La participación del Principado de Asturias en los asuntos comunitarios europeos

En el XX aniversario
de la adhesión de España
a las Comunidades Europeas

Juan Fernández Fernández
Gonzalo Riesgo Fernández

Primera Edición: Noviembre 2006
Printed in Spain. Impreso en España.
Diseño y Maquetación: Albornoz y Asociados.
Impresión: Gráficas Eujoa.
ISBN: 84-690-2551-1
D.L. : AS-5806/2006
Edita: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS EUROPEOS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....Pág 9

PRÓLOGO..... Pág 15

INTRODUCCIÓN..... Pág 23

LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS..... Pág 35

I. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA UNIÓN EUROPEA..... Pág 37

1.LAS ESTRUCTURAS ORGANICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS EUROPEOS.....Pág 38
1.1. Las primeras decisiones. La creación de la Oficina de Asesoramiento en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas (OFACE).....Pág 38
1.2. La estructura orgánico-administrativa de los asuntos europeos en la 4ª Legislatura (17 de julio de 1995 – 21 de julio de 1999)..... Pág 54
1.3. Hacia un modelo monista..... Pág 60
1.4. La situación actual.....Pág 67

2. LOS ACUERDOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LAS CC. AA. PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS EN LOS ASUNTOS EUROPEOS... Pág 72

2.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO COMUNITARIO DE TOMA DE DECISIONES...Pág 72
2.1.1. Principios generales de aplicación.....Pág 72
2.1.2. Naturaleza de los órganos de cooperación.....Pág 73

2.2. LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS (CARCE).....Pág 73
2.2.1. Puesta en marcha e institucionalización.....Pág 73
2.2.2. El Reglamento interno de la CARCE.....Pág 75
2.2.3. La consolidación y la regulación legal de la Conferencia.....Pág 76
2.2.4. El nuevo Reglamento interno.....Pág 77

2.2.5. La Comisión de Coordinadores de asuntos comunitarios.....Pág 79

2.3. LOS ACUERDOS ESPECIFICOS DE COOPERACIÓN DE LA CARCE.....Pág 80
2.3.1. Acuerdo en materia de ayudas públicas.....Pág 80
2.3.2. Acuerdo sobre la participación interna a través de las Conferencias Sectoriales (API)..... Pág 82
2.3.3. Acuerdo sobre la participación en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.....Pág 85
2.3.4. Acuerdo sobre la participación en los Comités de ejecución de la Comisión Europea.....Pág 87
2.3.5. Acuerdo sobre la Consejería de Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).....Pág 89
2.3.6. Acuerdo sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de Ministros de la Unión Europea.....Pág 93
2.3.7. Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea.....Pág 95

3. LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON REPRESNTACIÓN REGIONAL..... Pág 100
3.1. El Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales de la Comisión Europea.....Pág 100
3.2. El Comité de las Regiones.....Pág 102

II. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO REGIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.....Pág 107

1. LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL MOVIMIENTO REGIONALISTA EUROPEO Y EN LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL..... Pág 109
1.1. La Asamblea de las Regiones de Europa (ARE).....Pág 109
1.2. La Conferencia de Regiones Periférico Marítimas (CRPM)..... Pág 115
1.3. La Comisión del Arco Atlántico.....Pág 130
1.4. La Conferencia de Regiones del Sur de Europa Atlántica (SEA)..... Pág 141

1.5. La Asociación de Regiones de Tradición Industrial (RETI)..... Pág 144
1.6. La Asociación de Comarcas Mineras de la Unión Europea (EUR-ACOM)..... Pág 149
1.7. La Asociación de Regiones con Poderes Legislativos (REGLEG)..... Pág 153

2. OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL.... Pág 159
2.1. Programa "OUVERTURE"..... Pág 159
2.2. Iniciativa Comunitaria INTERREG..... Pág 161

A MODO DE CONCLUSIÓN..... Pág 169

Anexo Documental..... Pág 179

Acuerdos de la Conferencia Sectorial para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) de 29 de noviembre de 1990, sobre la intervención de las Comunidades Autónomas en procedimientos precontenciosos de la Comisión europea y en materia de ayudas públicas..... Pág 181

Acuerdo de la CARCE de 30 de noviembre de 1994, sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de las Conferencias Sectoriales..... Pág 186

Acuerdo de la CARCE de 22 de julio de 1996, sobre la creación de un Consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea..... Pág 195

Acuerdo de la CARCE de 11 de diciembre de 1997, sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas..... Pág 198

Acuerdo de la CARCE de 10 de marzo de 2003, relativo a las reglas sobre la participación autonómica en los Comités de ejecución de la Comisión europea..... Pág 205

Acuerdos de la CARCE de 9 de diciembre de 2004, sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea; y sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea.....Pág 211

PRESENTACIÓN

Es indudable que la sociedad asturiana ha cambiado de una manera significativa en las dos últimas décadas. En el desarrollo de este progreso el protagonismo corresponde, obviamente, a la propia sociedad; pero, asimismo, ha tenido como motor a Europa. El cambio social se ha desarrollado, en primer lugar, a partir de unos valores basados en la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales así como en la profundización de los procedimientos democráticos. La integración en Europa ha permitido la aplicación en Asturias de algunas políticas, como la agraria o la medioambiental, de particular trascendencia. Si bien la política agraria ha afectado a los sectores de la carne y la leche también ha contribuido al sostenimiento, no exento de dificultades, de una política cada vez más orientada al desarrollo rural y por otra parte en una comunidad como Asturias, tan volcada hacia la naturaleza, la incidencia de la avanzada legislación europea, principalmente directivas, de protección del medio ambiente tiene un amplio alcance hasta el punto de suponer una renovación de la regulación española y de la normativa autonómica.

Y también Europa ha contribuido financieramente a hacer efectiva la solidaridad y la cohesión económica apoyando a aquellas regiones, como Asturias, con más dificultades de desarrollo económico y, sobre manera, en declive industrial. En este sentido, los denominados "fondos estructurales y de cohesión", han permitido la realización de las más importantes infraestructuras de transporte, las de carácter industrial y las de interés medio ambiental. Sólamente en Fondos estructurales recibidos, es decir la cofinanciación de proyectos europeos de infraestructuras, saneamiento, medio ambiente y apoyo a empresas (FEDER), programas de fomento de empleo y de formación (FSE) y toda suerte de ayudas en materia ganadera, desarrollo rural y pesca, a través de instrumentos como FEOGA e IFOP, Asturias recibirá del orden de 3.100 millones de euros desde el año 1986. A todo ello habrá que sumarle las inversiones estatales provenientes de los Fondos de Cohesión y de las inversiones plurirregionales del propio FEDER, así como de algunas iniciativas comunitarias ya de ámbito más local como PRODER, LEADER, INTERREG y otras, que hace que estemos hablando de una cifra por encima de los 4.000 millones de euros en dos décadas.

Esos elementos han favorecido poderosamente el proceso de cambio de la sociedad asturiana en estos últimos veinte años, cambios no sólo en materia económica y social, que han sido profundos sino también en materia sociológica, cultural e institucional. Como uno de los elementos más significativos podemos señalar el ejemplo del impacto del programa ERASMUS. En 1986 muy pocos universitarios tenían la oportunidad de salir fuera de España a cursar estudios. Hoy, unos quinientos asturianos y asturianas desarrollan cada año un curso univeristario en alguna universidad europea y un parecido número de estudiantes de otros países europeos visitan

cada año nuestra Universidad. En definitiva, muchas veces para bien y otras no tanto lo cierto es que la sociedad asturiana de 2006 tiene poco que ver con la que había el 1 de enero de 1986 cuando se formalizó el ingreso de España en las entonces Comunidades Europeas. Europa se ha constituido así en un auténtico y poderoso motor de cambio de nuestra Comunidad.

Y estos cambios también se han reflejado en la organización administrativa de nuestra Comunidad Autónoma. Efectivamente, desde la integración de España en la Unión Europea y aun antes, Asturias hubo de adecuar su estructura orgánica a esa nueva realidad para garantizar de un lado el empleo más eficaz en nuestro territorio de los programas cofinanciados por las instituciones europeas y de otro la aplicación rigurosa de las políticas comunitarias en los ámbitos de competencia autonómicos. Sin embargo, y ademas, esas nuevas estructuras impulsaron también la colaboración de Asturias con otras regiones europeas y la participación de nuestra Comunidad en la estructura institucional regional Europea de la que el Comité de las Regiones es su expresión más conocida.

De eso es precisamente de lo que trata el libro que tiene usted en sus manos, del intenso, interesante, complejo, en muchas ocasiones árido y las más de las veces desconocido proceso de adaptación de la Administración del Principado de Asturias a la nueva realidad que supuso la incorporación de España a la entonces Comunidad Europea. En esa evolución y aun expresado con gran sutileza y elegancia, es posible distinguir distintas etapas de mayor o menor "creatividad administrativa" vinculadas a los mayores o menores impulsos políticos aplicados en cada momento. Y sus autores son sin ninguna duda, los mayores expertos que en Asturias se pueden encontrar sobre este asunto.

Efectivamente, Juan Fernández no sólo tiene una sólida formación sobre estudios europeos adquirida en universidades tan prestigiosas como la Católica de Lovaina, la Sorbona de París o la Complutense de Madrid sino una extraordinaria experiencia en lo que podríamos denominar las áreas administrativas del Principado de Asturias relacionadas con los asuntos europeos que se inició ya en 1985 con su incorporación a la recien creada Oficina de Asesoramiento sobre Comunidades Europeas de la que fue su director desde 1992 hasta 1999. Yo he tenido la oportunidad de comprobar por mi mismo su solidez intelectual y su rigor en el desempeño de sus funciones como Jefe del Área de Relaciones Exteriores, labor que desarrolla desde finales de 2003. Por otra parte Gonzalo Riesgo también une, a pesar de su juventud, una sólida formación como jurista experto en Derecho Comunitario a una amplia experiencia en asuntos europeos que inicia en 1991 como asesor jurídico del Centro Europeo de Información Empresarial del Instituto de

Fomento Regional, actividad que desarrolla desde 1999 en el departamento de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la Administración del Principado de Asturias.

Pero los autores de este libro no sólo describen la evolución de la estructura jurídico-administrativa de nuestra Comunidad Autónoma para adaptarse al hecho europeo o reflexionan sobre el presente de Asturias en Europa sino que también sientan las bases para plantearse el futuro. Hay que recordar que las Comunidades Autónomas, y entre ellas Asturias, apenas han podido participar en el proceso de construcción europea. Sólo a partir del acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea de 9 de diciembre de 2004 se ha permitido oficialmente y en algunos ámbitos concretos, como agricultura y pesca, medio ambiente, política social y consumidores o educación y cultura, que un consejero autonómico participe con el ministro español en el respectivo Consejo de la Unión. Esta implicación institucional, de vital importancia, ha de estar respaldada por un cambio jurídico e institucional profundo.

Y ese es el reto que tenemos planteado en este momento. Comparto la opinión de que es necesario mejorar e incluso redefinir la participación de las instituciones asturianas en el ámbito de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a la conformación de la voluntad colectiva del Estado en asuntos europeos como en la incorporación y aplicación del Derecho Europeo en nuestro territorio. Pero para ello es necesario conocer cuál ha sido el proceso hasta hoy y eso es lo que el libro de Juan Férnandez y Gonzalo Riesgo logra de manera rigurosa y brillante. Es una mirada al pasado y al presente que nos permite abordar con más garantías el futuro. Como señalan los autores « *tras estos veinte años de pertenencia a la Europa comunitaria tenemos que consolidar todo lo logrado, reforzar los mecanismos de coordinación interna, aunando esfuerzos, medios y voluntades para avanzar en la misma dirección, actuando cada uno en el ámbito de sus respectivas responsabilidades e implicando al conjunto de la Administración regional en la apasionante tarea de hacer más Europa desde Asturias. Es una tarea de todos.* »

Francisco Javier García Valledor
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores

PRÓLOGO

Han transcurrido veinticinco años desde la promulgación del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y veinte desde el ingreso de España en las Comunidades Europeas, en la actual Unión Europea. En ese tiempo, no hay Comunidad Autónoma que no haya desarrollado una limitada *actividad* o *acción exterior*. Hoy nadie duda de que las Comunidades Autónomas no son sujetos de Derecho Internacional, pero al mismo tiempo nadie niega que desarrollan una *acción exterior* que comprende una serie de relaciones o un conjunto de actividades que sin constituir, en sentido jurídico, *relaciones internacionales* o *política exterior*, se califican y configuran como *actividades de mero alcance internacional, actividades de promoción exterior, actividades de proyección exterior, acciones de proyección internacional, actividades de relevancia internacional* o, en fin, como *paradiplomacia*. Menos aún se duda hoy de que las Comunidades Autónomas desarrollan una actividad en el seno de la Unión Europea, un ámbito que, además, ya no es posible calificar en puridad de "exterior", sino, en palabras del Tribunal Constitucional, de ámbito "a ciertos efectos ... interno" (STC 165/1994, FJ 4); o quizás diríamos mejor, de ámbito "integrado" en el que se desarrolla, más que una acción exterior, una "acción europea".

Es cierto que las manifestaciones de la actividad exterior autonómica son muy variadas, pues dependen *del radio de acción de la Comunidad Autónoma*. En efecto, para el ejercicio de sus competencias o, simplemente, en el ejercicio de su autonomía o capacidad de autogobierno, una Comunidad puede necesitar del establecimiento de relaciones con otros sujetos, ya se trate de otras Comunidades Autónomas, contiguas o no, de España o de otras entidades subestatales de terceros Estados; ya se trate incluso de relaciones con esos mismos Estados. Desde un punto de vista normativo, en la medida en que esa actividad se proyecta o realiza fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, o implica el establecimiento de relaciones con otros sujetos terceros, la acción autonómica es estrictamente *exterior,* ya que el principio de territorialidad recogido en los Estatutos de Autonomía refiere todas las competencias de una Comunidad Autónoma a su propio territorio.

En consecuencia, dentro del concepto "exterior" se encuentran tanto el círculo de relaciones entre Comunidades Autónomas (y aun de éstas con corporaciones locales), que se hallan englobadas o totalizadas en el Estado, como el círculo que comprende las relaciones con sujetos de otros Estados, así como las actividades desarrolladas en ellos o ante ellos, incluidas las relaciones con Organizaciones Internacionales, entidades que carecen de territorio en un sentido distinto del estrictamente funcional.

El Principado de Asturias no constituye una excepción en esta práctica progresiva. La Comunidad Autónoma ha desarrollado de modo constante una

acción exterior; desde mediada la década de los 80 dispuso de estructuras administrativas de gestión de la actividad "europea", y desde 1999 cuenta con una Consejería que ostenta en su denominación la referencia a los "Asuntos Europeos" o, más genéricamente, a las "Relaciones Exteriores". Y aunque la dirección y gestión de la actividad exterior es genuinamente gubernamental, los hechos reflejan que ni siquiera el órgano institucional parlamentario, la Junta General del Principado, se mantuvo al margen de ella, ya fuera dotándose de órganos internos para orientar y controlar la acción de gobierno en la materia, ya ejerciendo por sí misma "diplomacia parlamentaria".

La acción exterior del Principado, como la del resto de las Comunidades Autónomas, comprende, entre otras manifestaciones, una limitada actividad convencional de naturaleza no normativa, la cooperación transfronteriza, la cooperación interterritorial, el asociacionismo regional, la cooperación al desarrollo, las actuaciones promocionales en el exterior o los meros viajes al extranjero de las autoridades autonómicas. En ese conjunto cabe distinguir, no obstante, un ámbito singular, de características propias, la acción conexa con la derivada de la pertenencia de España a la Unión Europea, la llamada por algunos "acción europea". A exponerla y analizarla se dedica el libro que el lector tiene en sus manos.

Hay que advertir al lector que se adentra ahora en sus páginas, que la perspectiva que adopta su autor no es jurídica, por lo que no hallará en este libro lo que es ya posible encontrar en un número abundante de monografías. Quien esté interesado en esta dimensión del asunto puede leer u hojear con provecho, escogiendo sólo entre las más recientes, es decir, las publicadas a caballo entre el pasado y el nuevo siglo, alguna de las siguientes obras generales: C. Fernández de Casadevante Romaní, *La acción Exterior de las Comunidades Autónomas. Balance de una práctica consolidada*; C. Conde Martínez, *La acción Exterior de las Comunidades Autónomas. La institucionalización de Gobiernos territoriales y la integración internacional*; F. Aldecoa y M. Keating (editores), *Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones*; J. M. Sobrino Heredia (Selección e Introducción), *La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a Galicia. Textos y documentos básicos*; S. Beltrán García, *Los acuerdos exteriores de las Comunidades Autónomas españolas. Marco jurídico actual y perspectivas de futuro*. Y si quisiera centrarse específicamente en la acción europea, puede acudir a L. Ortúzar Andéchaga, E. Gómez Campo, A. Hernández Lafuente, *La participación de las Comunidades Autonómas en los asuntos comunitarios europeos*; M. A. Arias Martínez, *Comunidades Autónomas y elaboración del derecho comunitario: un estudio sobre el principio de colaboración en este ámbito*; P. Pérez Tremps, (coord.), M. A. Cabellos Espiérrez, E. Roig Molès, (colaboradores), *La participación europea y la acción exterior de las*

Comunidades Autónomas; VV.AA., *La participación de las Comunidades Autónomas en los Consejo de Ministros de la Unión Europea*; P. Biglino Campos (coord.), *La política europea de las Comunidades Autónomas y su control parlamentario"*, o a E. Roig Molés, *Las Comunidades Autónomas y la posición española en asuntos europeos*.

No hay en este libro, por tanto, un análisis de la delimitación competencial que efectúa el bloque de la constitucionalidad en materia de acción exterior, ni de los títulos que habilitan la acción europea del Principado de Asturias, cuyo Estatuto de Autonomía es especialmente parco en esta materia, como lo son también los de las demás Comunidades, salvo los recientemente reformados (Cataluña y Valencia) o en curso de serlo en las Cortes Generales (Andalucía, Canarias, Aragón, Illes Balears). No lo hay porque no lo pretendió su autor, cuyo objetivo era otro, el que enuncia en las primeras páginas del libro con claridad y sencillez: "El objetivo de este trabajo es precisamente recoger y reseñar la manera en la que la Administración del Principado de Asturias ha ido adecuando, a lo largo de las legislaturas, sus estructuras orgánico-administrativas a la nueva realidad que nos imponía nuestra pertenencia las Comunidades Europeas. (...) Abordaremos asimismo las actuaciones del Principado llevadas a cabo al amparo de decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias para incrementar la participación de los Entes regionales y locales en los procesos de toma de decisiones comunitarios (...). Nos referiremos igualmente a la participación del Principado de Asturias en el movimiento regionalista europeo a través de diferentes Asociaciones de regiones de las que ha sido o sigue siendo miembro y de la participación de nuestra Comunidad Autónoma en la cooperación interregional europea."

Faltaba en Asturias este tipo de estudio sobre la acción europea de la Comunidad Autónoma. El momento elegido es singularmente oportuno: coincide con el vigésimo aniversario de la adhesión de España al proceso de integración europea, cuando existe ya un acervo suficiente necesitado de una exposición sistemática y rigurosa, en el momento en el que el proceso de reformas estatutarias en curso atiende de modo específico a la materia, y cuando comienzan a ver la luz estudios similares en otras Comunidades Autónomas. Con este libro, en esto último al menos no quedará Asturias en zaga.

En efecto, asistimos desde hace dos o tres años a la acentuación de una tendencia en el tipo de publicaciones que analizan la acción exterior de las Comunidades Autónomas: de los estudios de tipo general sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos se ha pasado progresivamente a un estado de coexistencia de los enfoques generales con los análisis circunscritos al análisis de la cuestión en una Comunidad

concreta, estudios éstos que proliferan hasta el punto de amenazar incluso con desplazar a los primeros. Una señal más de los tiempos, quizás. La atención concentrada en una sola Comunidad era ya habitual en relación con el análisis de la incidencia de los fondos estructurales en el sistema de financiación autonómica y en la estructura económica regional, pero ahora se amplía al estudio del modo general de participación en los asuntos europeos. La tendencia data de los primeros años del presente siglo, con la aparición de obras como VV.AA., *La Comunidad de Madrid en la Unión Europea"*; J. Romero González, A. Morales Gil, J. Salom Carrasco, *La periferia emergente: la Comunidad Valenciana en la Europa de las regiones*; J. I. Navarro Méndez, *La acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias: marco teórico y praxis;* J. L. de Castro Ruano y A. Ugalde Zubiri, *La acción exterior del País Vasco (1980-2003)*; M. I. Nieto Fernández, *Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.*

Muy pocas personas podían acometer en Asturias un empeño equivalente con el rigor y conocimiento de causa que Juan Fernández Fernández, formado en Bruselas y dedicado desde 1985 a servir en la Administración en la gestión de los asuntos comunitarios europeos, y que ha contado para ello con la ayuda de otro experto en la materia, Gonzalo Riesgo, de también larga y rigurosa trayectoria en la función pública regional.

Juan Fernández conoce la participación del Principado de Asturias en los asuntos comunitarios por haber sido artífice de la práctica que estudia desde que ingresó en el servicio público de la Comunidad Autónoma, en la Oficina de Asesoramiento en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas, la desaparecida OFACE que él analiza en las primeras páginas de este libro. Y en esa tarea sigue, sin otra interrupción que un temporal destierro profesional asumido con estoicismo, ahora en la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, ocupado en la gestión diaria, y hurtando tiempo al descanso para dar al lector interesado libros como el que se dispone a leer, sin duda con placer y provecho.

Bernardo Fernández
Presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

INTRODUCCIÓN

La Unión Europea es una organización internacional formada por Estados, basándose el funcionamiento de su sistema jurídico "en la relación entre la Unión y el Estado". Quizás por ello la participación de las regiones en el proceso de integración europea ha sido poco relevante y la propia Unión ha mostrado escaso interés y poca sensibilidad por las realidades regionales. Así, la participación de las regiones en los asuntos comunitarios europeos no se considera un tema "europeo" sino más bien una cuestión interna de cada uno de los Estados miembros. Son, en efecto, los Estados los que deciden el grado de implicación de sus regiones en los asuntos relativos a la Unión Europea.

En el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) sólo se menciona a las regiones en el marco de la política de la competencia, para señalar que podrán considerarse compatibles con el mercado común "*las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo*" o "*las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas (...)*"[1]. Las regiones se consideraban pues como meras unidades de carácter técnico administrativo sobre las cuales había que realizar determinados tipos de actuaciones, pero que carecían de cualquier tipo de connotación propia más allá de la meramente tecnocrática.

Cuando al inicio de los años setenta las instituciones de la Europa comunitaria reconocen el aumento de las disparidades regionales derivadas, en gran medida, del funcionamiento del propio mercado común y la puesta en práctica de las libertades comunitarias y deciden crear el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), las regiones elegibles a las intervenciones de este Fondo estructural continuaron siendo determinadas áreas o zonas, meros sujetos pasivos, que se beneficiaban de las intervenciones de los Fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros comunitarios en proyectos y planes diseñados por los Gobiernos nacionales. Se ignoraba totalmente el papel que las regiones podían asumir en el diseño de las líneas de intervención de su propio desarrollo regional.

En efecto, la existencia de una política de desarrollo regional comunitaria durante sus primeros años se centró siempre en la dimensión económica del hecho regional. En concreto, la finalidad del principal instrumento de intervención en el ámbito del desarrollo regional, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, era precisamente "*contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos*

1 - Artículo 87.3 a) y c) TCEE.

desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive".

Es a partir de 1986, cuando la idea de asociar más directamente las regiones en sus procesos de desarrollo se va imponiendo poco a poco. La Comisión Europea la había destacado como una de sus principales innovaciones en su documento "*Réussir l'Acte Unique*". La cohesión económica y social se convierte, a partir de la entrada en vigor del Acta Unica, en un imperativo político tanto para la Comunidad como para sus Estados miembros, y la reforma de los Fondos estructurales de 1988, como instrumento imprescindible para el cumplimiento de ese mandato imperativo, incluye entre sus principios fundamentales el principio de cooperación, por el que las regiones se asocian a la Comisión y a los Estados miembros en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo territorial. Las regiones dejan de ser meros sujetos pasivos para convertirse en actores de su propio desarrollo.

En el lento proceso de asociación de las regiones en los procesos de toma de decisiones comunitario, la Comisión Europea crea, por Decisión de 24 de junio de 1988[2], el Consejo Consultivo de los entes regionales y locales al considerar que "*es necesario que los entes regionales y locales puedan ser consultados por la Comisión, en el marco de un organismo abierto a los entes territoriales existentes, en sus diversos niveles, en los Estados miembros*". Así pues, "*la Comisión podrá consultar al Consejo consultivo sobre cualquier cuestión relacionada con el desarrollo regional y, en especial, con la elaboración y aplicación de la política regional de la Comunidad, incluidas las repercusiones regionales y locales de las otras políticas comunitarias*"[3]. De los 42 miembros titulares que componen el Consejo Consultivo, a España le correspondieron 5, uno de los cuales fue el entonces Presidente del Gobierno del Principado de Asturias.

Posteriormente, la creación en 1993 por el Tratado de Maastrich del Comité de las Regiones, como órgano consultivo compuesto por representantes de los entes regionales y locales, y la inclusión del principio de subsidiariedad en el Tratado fueron avances que facilitaron la presencia y la participación más directa de las regiones en los asuntos comunitarios europeos, pero que sin embargo no satisfacieron las demandas de las regiones, entre otras cosas porque pretendían que el Comité de las Regiones fuera no un órgano meramente consultivo sino una institución más de la Unión Europea.

Igualmente, la modificación de los Tratados para permitir la participación de las regiones en el Consejo de Ministros de la UE supuso un avance considerable: "*El Consejo estará compuesto por un representante de*

2 - Decisión 88/487/CEE, D.O.L 247, de 6 de septiembre de 1988.
3 - Artículo 2 de la Decisión 88/487/CEE.

cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro"[4], aunque es evidente que las regiones, como tales, no participan en las reuniones del Consejo; son sus ministros o consejeros los que pueden participar en representación del Estado y sólo de éste.

El Libro Blanco sobre la Gobernanza[5], ante el hecho constatable de una tendencia a la regionalización o a la descentralización en la mayor parte de los Estados miembros de la UE, propició el desarrollo de un profundo debate sobre el papel de las regiones en la propuesta, elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas europeas. Posteriormente, el 10 de mayo de 2004, se celebró en Bruselas el primer "*Diálogo con las asociaciones de entes territoriales sobre la elaboración de las políticas de la Unión Europea*"[6], que tenía por objetivo el intercambio de ideas entre las asociaciones de entes territoriales y la Comisión. En esta reunión se puso de manifiesto la necesidad de que dicho diálogo debía convertirse en un instrumento eficaz al servicio de la buena gobernanza a varios niveles así como de la cohesión territorial.

Por su parte, el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre "*El papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea*"[7], considera que se está formando una conciencia cada vez más clara de las funciones y la autonomía de las diferentes administraciones regionales y locales, y pone de relieve que estas administraciones pueden desempeñar una función relevante no sólo para acercar la Unión Europea a los ciudadanos sino también en el proceso de preparación de las decisiones comunitarias y en la aplicación de las políticas de la Unión.

Así, el Parlamento Europeo pide que "*en las disposiciones pertinentes de la Constitución Europea se reconozca el papel de las regiones, las provincias, los municipios y de toda organización territorial que conforme los Estados miembros, con vistas a la consecución de los objetivos de la Unión*". Es, por otra parte, interesante señalar como el propio Parlamento solicita a los Estados miembros que refuercen los mecanismos internos de participación de las regiones y de las colectividades territoriales, en particular las dotadas de poderes legislativos, en el proceso de formación de la voluntad del Estado en el ámbito de los asuntos comunitarios europeos y en aquellos temas que revistan para las mismas un interés específico.

4 - Artículo 203 del Tratado de la Comunidad Europea.
5 - COM(2001) 428 final, de 25 de julio de 2001.
6 - COM(2003) 811 final, de 19 de diciembre de 2003.
7 - De 14 de enero de 2003.

En todo caso, la realidad social, política y constitucional de la Europa de hoy nos ofrece un panorama de reparto de poder de distintos tamaños, niveles y formas que no admite la construcción de una Europa unida a partir sólo de los Estados y sin tener presente otro sujeto institucional que el estatal. En efecto, el peso de los Estados, las diferentes formas constitucionales de los mismos, la existencia de comunidades, naciones, pueblos, regiones, con un profundo sentido de su propia identidad cultural, política y económica en algunos Estados miembros y los diferentes tratamientos que les dan sus constituciones, nos interrogan sobre la vertebración jurídica y política de la Unión Europea de tal manera que ésta pueda satisfacer a todos sus ciudadanos.

En el proceso, impulso y desarrollo de la participación de las regiones en los asuntos comunitarios europeos, en todas sus dimensiones, ha desempeñado un papel destacado el movimiento regionalista europeo. Desde sus inicios en los años setenta y su posterior desarrollo en los años ochenta y noventa del pasado siglo, el movimiento regionalista se sustenta en la convicción de la complementariedad existente entre las competencias de la Unión, de los Estados miembros y de las regiones, afirmándose siempre como profundamente europeísta y planteándose su papel sin cuestionar la pertenencia estatal de las mismas. El movimiento regionalista busca un encaje en Europa con la voluntad de sumar, de reforzar y de legitimar aún más la Unión.

En la actualidad, la mayor parte de las regiones de Europa están integradas en Asociaciones de regiones[8] ya sea en función de su localización geográfica o de sus particularidades económicas, culturales o institucionales, y todas ellas tienen en común el objetivo de garantizar una estrecha relación de colaboración y cooperación tanto con las instituciones y órganos de la Unión Europea como con las diferentes realidades concretas sobre el terreno. A pesar de la ausencia de un nivel regional uniforme en Europa, la voluntad de participar de manera colectiva en los asuntos europeos se ha puesto de manifiesto mediante la creación de redes de cooperación transfronterizas, transnacionales e interregionales, que impulsadas por la propia Comisión Europea, tienen como uno de sus objetivos fundamentales los intercambios de experiencias y buenas prácticas, así como la defensa de intereses concretos.

8 - Entre las numerosas Asociaciones de regiones existentes en Europea podemos destacar, entre otras, la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE), la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM), Comisión del Arco Atlántico (AA) de la CRPM, la Asociación de Regiones Transfronterizas de Europa (ARFE), Asociación de Regiones Ultraperiféricas (ARUP),Asociación de Comarcas Mineras de Europa (EUR-ACOM), Asociación Europea de Representantes Electos de Zonas de Montañas (AEEM), Asociación de Regiones con Competencias Legislativas (REGLEG), etc., en muchas de las cuales está o ha estado integrado el Principado de Asturias.

El movimiento regionalista defiende el papel de las regiones como expresión política de su identidad, al mismo tiempo que pretende incidir más directamente en los mecanismos de diseño y ejecución de las políticas de desarrollo socioeconómico de los diferentes territorios y de sus ciudadanos. Asimismo, pretende que las regiones sean verdaderos socios activos en el proceso de integración europea, como portadores que son de democracia, que conforman la diversidad cultural de Europa y contribuyen a un mayor bienestar de los ciudadanos.

El movimiento regionalista preconiza un reparto competencial entre los Estados y las Regiones, regulado por los mecanismos adecuados en cada ordenamiento nacional, de acuerdo con los principios de descentralización política y de subsidiariedad. En virtud de estos principios, las diversas funciones y el ejercicio de la responsabilidad de diseño y ejecución de las diferentes acciones se ejercerán en el nivel más cercano posible a los ciudadanos, ejerciendo las regiones, de forma individual, las competencias que les hayan sido atribuidas.

En efecto, las regiones, como pilares de la democracia en Europa, contribuyen al mantenimiento de la paz, garantizan la salvaguardia de la diversidad histórica, política, social y cultural en Europa, constituyendo un elemento esencial en el proceso de integración europea y en la mundialización, al mismo tiempo que son el soporte de una gobernanza más humana, más próxima de los ciudadanos y sinónimo de una mayor autonomía, responsabilidad y eficacia.

El movimiento regionalista, consciente de que para poder hablar de un nivel de autonomía política a nivel regional son imprescindibles recursos económicos adecuados, ha abogado siempre por que los entes regionales tengan derecho tanto a una proporción adecuada de los impuestos recaudados por los Estados como a contar con capacidad propia para la recaudación de impuestos y la localización de fuentes fiscales. Así, en este como en todos los otros aspectos, para el movimiento regionalista las relaciones del Estado con sus regiones y de éstas entre sí, deben responder a los principios de respeto mutuo, cooperación, solidaridad y lealtad institucional, promoviendo la cooperación recíproca y no fomentando o realizando actuaciones que puedan perjudicar o limitar el ejercicio de competencias de los demás niveles.

Para el movimiento regionalista las relaciones internacionales no son un ámbito restringido exclusivamente a los Estados, reconociendo las limitaciones de actuación de los poderes regionales. Aunque condicionada a la aprobación por el Gobierno del Estado si así lo exige la legislación nacional, las regiones tienen capacidad para celebrar Acuerdos o Protocolos de intenciones

internacionales. Las regiones pueden y deben promover y fomentar la cooperación entre sí, bilateral o multilateralmente, tanto dentro del Estado al que pertenecen como más allá de las propias fronteras, con el objetivo de realizar proyectos comunes.

En el movimiento regionalista algunos defienden, aunque no hay unanimidad al respecto, el derecho de las regiones a establecer representaciones propias, sea individualmente o con otras regiones, en terceros Estados y ante organizaciones internacionales reconocidas. Quedaría por definir la naturaleza de esas representaciones que, aunque en ningún caso podrían ser consideradas como representaciones diplomáticas ante otro Estado, pueden desempeñar funciones de representaciones comerciales, de promoción cultural y turística o de promoción económica de la región para captar inversiones o desarrollar proyectos multinacionales. Asimismo, se propugna que el Estado que quiera celebrar Tratados internacionales que afecten a las competencias de las regiones, éstas participen conjuntamente con el Estado en la elaboración y conclusión del Tratado.

En concreto, en relación con la Unión Europea, el movimiento regionalista aboga por el reconocimiento por parte de la Unión de las regiones de sus Estados miembros así como de las asociaciones de carácter regional como sujetos activos de sus políticas. En este sentido, serán las regiones quienes gestionen las asignaciones de los Fondos comunitarios que afecten a sus competencias, sin que en estos supuestos precisen la intermediación del Estado.

La creación de un órgano de composición regional que participe en los procesos de toma de decisiones comunitario que afecten a las competencias o intereses regionales ha sido una de las reivindicaciones del movimiento regionalista desde sus orígenes. No obstante, la creación del Comité de las Regiones no satisfizo plenamente las reivindicaciones de las regiones, fundamentalmente por tratarse de un órgano meramente consultivo y cuya composición incluye tanto representantes de las regiones como de los entes locales. Otra de las carencias de este órgano consultivo especialmente sentida por el movimiento regionalista es su falta de legitimación para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si una medida de las instituciones comunitarias afecta a sus competencias o intereses. En el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, sí se le reconoce al Comité esta capacidad en determinadas circunstancias.

Asimismo, el movimiento regionalista preconiza la participación regional en la formación de la voluntad del Estado, en sus fases ascendente y descendente, en los asuntos europeos cuando sus competencias o sus

intereses se vean afectados, y según los mecanismos de participación interna arbitrados por cada uno de los Estados miembros. Es más, cuando se trate de competencias exclusivas de las regiones o afecte de manera especial a sus intereses, la posición negociadora del Estado no podrá desviarse de la posición común establecida por las regiones, salvo que el derecho interno lo exija por razones de integración. De igual modo, las regiones tendrán el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones que se desarrollen en los órganos comunitarios, nombrando un representante de las regiones que, como miembro de pleno derecho, se integre en la delegación del Estado concernido.

Buena parte de las pretensiones del movimiento regionalista europeo son hoy una realidad en determinados Estados miembros de la Unión, especialmente en aquellos que cuentan con regiones con competencias legislativas. En otros Estados con menor descentralización y donde los entes regionales son meros órganos administrativos, el camino por recorrer es aún largo.

En todo caso, Europa ha ido asumiendo la realidad regional y es preciso reconocer los avances realizados en relación con los años ochenta y noventa del siglo pasado. Quizás, porque como ya se ha apuntado, el movimiento regionalista europeo se ha manifestado siempre como profundamente europeísta, sin cuestionar su pertenencia estatal y buscando un encaje de las regiones más profundo en Europa con el objetivo de reforzar y legitimar aún más a la Unión.

Si la adhesión de España a las Comunidades Europeas, hace ahora veinte años, supuso un gran reto para nuestro país, no lo fue menos para las Administraciones Públicas que debieron adaptar su organización administrativa a la nueva realidad derivada de nuestra pertenencia a la Comunidad.

El objetivo de este trabajo es precisamente recoger y reseñar la manera en la que la Administración del Principado de Asturias ha ido adecuando, a lo largo de las legislaturas, sus estructuras orgánico-administrativas a la nueva realidad que nos imponía nuestra pertenencia las Comunidades Europeas. En este sentido, nos referiremos tanto a las iniciativas adoptadas por los sucesivos Gobiernos del Principado en relación con la estructura de la Administración regional en lo relativo a la gestión de los asuntos comunitarios europeos, como a aquellas derivadas de los Acuerdos firmados en el ámbito de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.

Abordaremos asimismo las actuaciones del Principado llevadas a cabo al amparo de decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias para incrementar la participación de los Entes regionales y locales en los procesos de toma de decisiones comunitarios, como es el caso del Comité Consultivo de la Comisión Europea o del Comité de las Regiones. Nos referiremos igualmente a la participación del Principado de Asturias en el movimiento regionalista europeo a través de diferentes Asociaciones de regiones de las que ha sido o sigue siendo miembro y de la participación de nuestra Comunidad Autónoma en la cooperación interregional europea.

LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS

I. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA UNIÓN EUROPEA.

El largo, lento y dificultoso camino recorrido por España hasta su integración como miembro de pleno derecho en lo que hoy es la Unión Europea, tiene sus inicios en los mismísimos ministros de Franco, Alberto Ullastres y Fernando María Castiella, que son quienes inician tímidos aunque imposibles contactos con la Europa comunitaria. Ya en 1962, Castiella comienza un proceso de acercamiento a las entonces Comunidades Europeas, y en 1965, Alberto Ullastres, retoma la iniciativa de Castiella y continúa el proceso de acercamiento del régimen franquista a las Comunidades.

Sin embargo, el hecho de que España no reuniera las garantías democráticas mínimas exigibles siguió aplazando cualquier posibilidad de acuerdo. En 1969, Gregorio López Bravo, entonces ministro de Asuntos Exteriores, logra un acuerdo preferencial comercial con la Europa de "los seis", que se firmaría el 29 de junio de 1970. El 6 de marzo de 1973, se celebra en Madrid la tercera reunión de la Comisión mixta CEE-España. La delegación española expone el punto de vista del Gobierno sobre las futuras relaciones entre España y la Comunidad de cara especialmente a la negociación de un nuevo acuerdo que mejorara las condiciones del de 1970. Los representantes de las instituciones comunitarias tomaron nota de las pretensiones del Gobierno español pero no se adoptó ninguna decisión al respecto.

El 17 de septiembre de 1974, ya en las postrimerías del franquismo, el Consejo de Ministros de la Comunidades Europeas aprueba formalmente una serie de directrices para la negociación de amplios acuerdos con España, Israel, Argelia, Marruecos y Túnez y la ampliación del Acuerdo existente con Malta a los temas de cooperación y agricultura.

No será, sin embargo, hasta el 28 de julio de 1977, al mes de haberse celebrado las primeras elecciones democráticas en España tras el franquismo, que en nombre del Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, solicitaba formalmente el ingreso de España en las Comunidades Europeas; el 5 de febrero de 1979 se inauguran formalmente en Bruselas las negociaciones de adhesión de España, y el 15 de junio de 1979 se inicia la primera tanda de negociaciones para la adhesión a nivel de subsecretarios.

Finalmente, el 12 de junio de 1985 se firma en Madrid el Tratado de adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas y el 1 de enero de 1986, España se incorpora a las Comunidades Europeas como miembro de pleno derecho.

1. LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS EUROPEOS.

1.1. Las primeras decisiones. La creación de la Oficina de Asesoramiento en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas (OFACE)

El Gobierno de del Principado de Asturias, que había pasado el ecuador de la primera legislatura (17/07/1983 – 28/07/1987) cuando se firmó el Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas, había adoptado ya en 1984, con perspectiva de futuro y cuando aún no se sabía con certeza cual sería el resultado de las negaciones de adhesión de España, las primeras decisiones para adecuar la estructura orgánico-administrativa de la Administración regional, aunque de forma indirecta, a la nueva realidad que impondría la adhesión de nuestro país a la Europa comunitaria.

Así, el Decreto por el que se regula la estructura orgánica del Gabinete Técnico de la Presidencia del Principado[9], crea una Secretaría de Relaciones Institucionales a la que, entre otras funciones, se le asigna "*el asesoramiento y el seguimiento y estudio de las repercusiones que se derivarán para Asturias del proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea*". Además, la mencionada Secretaría "*actuará como órgano para la coordinación de las relaciones de la Comunidad Autónoma con los Centros de Documentación y de Referencia europeos implantados en Asturias*".

En el mes de febrero del mismo año, 1984, se crea la Comisión de Seguimiento y Estudio de las Negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea[10], que se adscribe a la Presidencia del Principado a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales. La creación de esta Comisión se deriva de la "*preocupación del Consejo de Gobierno del Principado por la singular incidencia que tendrá en la economía regional la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea*". Las funciones que se le encomiendan son, entre otras:

- Elaborar informes sobre la situación y progresión de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, estudiando las posibles repercusiones sobre los diversos sectores de la Comunidad Autónoma Asturiana.

- Seguir permanentemente el desarrollo de dichas negociaciones.

9 - Decreto 2/1984, de 13 de enero. BOPA número 56, de 7 de marzo de 1984.
10 - Decreto 18/1984, de 23 de febrero. BOPA número 66, de 19 de marzo de 1984.

- Elaborar estudios tendentes a la coordinación de las actuaciones que puedan llevarse a cabo por las distintas Consejerías en relación con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea para conseguir una acción unitaria y coherente en la Comunidad Autónoma Asturiana.

- Informar sobre cualesquiera otras cuestiones que relacionadas directa o indirectamente con los objetivos generales de la Comisión les sean sometidas por el Presidente del Principado[11].

La mencionada Comisión la componían seis vocales designados, respectivamente, por los titulares de la Consejería de la Presidencia; Hacienda y Economía; Obras Públicas, Turismo Transporte y Comunicaciones; Agricultura y Pesca; Industria y Comercio, y Trabajo y Acción Social. Asimismo, la Comisión la integraban un representante de cada uno de las siguientes entidades y organizaciones: de la Universidad de Oviedo, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación radicadas en Asturias, de la Federación Asturiana de Empresarios, de las organizaciones profesionales agrarias y de los Sindicatos más representativos de la región[12].

Se precisa, además, que para el mejor cumplimiento de sus funciones, la mencionada Comisión podrá formar ponencias o grupos de trabajo, incorporando a los mismos técnicos o personas especializadas en las materias concretas objeto de estudio[13].

Por su parte, la Junta General del Principado por resolución del Pleno, aprobada en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 1984, manifestó su voluntad de que en la mencionada Comisión se integraran como Vocales un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios reglamentariamente constituidos. Para dar cumplimiento a la mencionada resolución, el Decreto 58/1984, de 3 de mayo[14], amplía la composición de la Comisión de Seguimiento y Estudio de las Negociaciones de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea añadiendo a los vocales previstos en el Decreto de creación de la mencionada Comisión, un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios reglamentariamente constituidos en la Junta General del Principado[15].

11 - Artículo cuarto.
12 - Artículo segundo.
13 - Artículo quinto.
14 - BOPA número 110, de 12 de mayo de 1984.
15 - Artículo único.

En el mismo año de 1984, otros Departamentos de la Administración regional introducen en sus estructuras orgánicas y métodos de trabajo menciones expresas a la adecuación de esas estructuras a las exigencias que impondría la integración de España en las Comunidades Europeas. Así, se crea el Comité Regional de Planificación y Coordinación de Inversiones Públicas[16], precisándose en el mismo que "*el Plan Económico Regional debe elaborarse siguiendo la metodología aprobada por las Comunidades Europeas para sus países miembros por ser la única vía para poder acceder, en caso de que nos integremos en dichas Comunidades, a los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (...)*"[17].

Asimismo, en el Anexo I del mencionado Decreto, en el que se recogen los Grupos de Trabajo para la elaboración del Plan Económico Regional, de los 17 grupos existentes, el tercero de ellos se refiere a "*Comunidades Europeas y Relaciones con el exterior*", que preside el Consejero de la Presidencia.

Ese Decreto se derogó en 1988, y en la nueva norma de creación del Comité Regional de Planificación y Coordinación de Inversiones Públicas[18] se reconoce explícitamente la necesidad de reformar la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Planificación como consecuencia de "*la realización del primer Programa de Desarrollo Regional del Principado de Asturias y la importancia que la planificación y sus consecuencias viene representando para la región (PNIC, Plan Oscos-EO, O.I.D., Planes sectoriales, etc.) (...)*"

En la cuarta legislatura (1995-1999), se crea el Comité de Inversiones y Planificación[19], que por lo que respecta a los asuntos europeos, recoge que el Comité deberá "*ser informado por la Comisión de Coordinación para Asuntos Europeos, creada por el Decreto 14/94, de 27 de enero, de las líneas de financiación comunitarias existentes y de los requisitos que han de reunir los proyectos que en ella puedan integrase, con el objeto de que estos sean considerados en la planificación regional*"[20].

Asimismo, el Comité debe "*informar a la Subcomisión de instrumentos financieros de la Comisión de Coordinación para los Asuntos Europeos de los productos que se deriven de la planificación regional, con el objeto de que puedan aprovecharse óptimamente las posibilidades de cofinanciación*

16 - Decreto25/1984, de 22 de marzo. BOPA número 78, de 2 de abril de 1984.
17 - Exposición de motivos del Decreto 25/1984.
18 - Decreto 54/88, de 28 de abril. BOPA número 115, de 18 de mayo de 1988.
19 - Decreto 19/96, de 30 de mayo. BOPA número 149, de 27 de junio de 1996
20 - Artículo 2.f).

comunitaria existentes en cada momento"[21].

En 1985, antes de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, el 12 de junio de ese año, se crea la Oficina de Asesoramiento del Principado de Asturias en cuestiones relativas a la Comunidad Económica Europea (OFACE)[22], para tener en cuenta que "*el reciente acuerdo para la integración de España en la Comunidad Económica Europea hace aconsejable intensificar los esfuerzos que el Principado de Asturias ha venido realizando para lograr una mayor preparación de las estructuras regionales ante las inevitables transformaciones que la adhesión ha de ocasionar*".

En su parte introductoria, el Decreto se refiere, como elementos importantes de ese esfuerzo que el Principado viene realizando, a la creación de la Comisión de Seguimiento y Estudio de las negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, así como al convenio que el Gobierno del Principado firmó con la Universidad de Oviedo, el 21 de enero de 1985, relativo al Centro de Documentación Europea, y al estudio, dirigido por el profesor Alvaro Cuervo, sobre las repercusiones de la adhesión en los principales sectores de la actividad económica asturiana.

De igual modo, y en la línea de la progresiva adaptación que se viene realizando, y teniendo en cuenta la complejidad del nuevo marco jurídico y económico, se impone al Gobierno del Principado reforzar su estructura en un doble plano: de una parte, en cada una de las Consejerías que por razón de sus competencias habrán de verse más directamente afectadas por las consecuencias de la integración; de otra, en los aspectos de coordinación de aquellas materias que no sean por su naturaleza susceptibles de un tratamiento exclusivamente sectorial.

La OFACE se crea como órgano de asesoramiento y apoyo, adscrito a la Consejería de la Presidencia, y se le atribuyen las siguientes funciones:

- El asesoramiento a los distintos órganos de la Administración del Principado de Asturias en todas aquellas cuestiones técnicas que pudieran suscitarse con motivo de la integración de España en la Comunidad Económica Europea.

- La organización de procesos de formación en materias comunitarias del personal perteneciente o adscrito a la Comunidad Autónoma.

21 - Artículo 2.g).
22 - Decreto 34/1985, de 2 de mayo. BOPA número 108, de 13 de mayo de 1985.

- El diseño y ejecución de campañas divulgativas que pudieran acercar a los asturianos a la nueva realidad socioeconómica por medio de publicaciones, cursos y conferencias, tanto sobre aspectos generales como sobre incidencias sectoriales.

- La cooperación e información en materia comunitaria con otras unidades igualmente especializadas, que pudieran organizarse en otras instituciones o corporaciones regionales.

La OFACE comenzó sus actividades el 1 de octubre de 1985, elaborando un programa de actividades que fue presentado por el entonces Consejero de la Presidencia, Don Bernardo Fernández Pérez, al Consejo de Gobierno el día 17 de octubre de 1985, como "*Programa inicial de actuación de la Oficina de Asesoramiento del Principado de Asturias en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas*".

La OFACE que, como acabamos de exponer, se creó como un órgano de asesoramiento y apoyo, adscrito a la Consejería de la Presidencia, se convirtió, años más tarde, en uno de los tres Servicios adscritos a la Dirección Regional de Relaciones con las Administraciones Públicas[23]. A la OFACE, "*con la organización prevista en el Decreto de su creación*", se le encomiendan funciones que completan y amplían las que se le asignaron en el Decreto de creación. En especial:

- "El seguimiento y estudio del derecho y políticas comunitarias y su adecuación con las actuaciones que promueva la Comunidad Autónoma.

- El análisis, en colaboración con las Consejerías competentes por razón de la materia, del impacto global en la Comunidad Autónoma de la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea, así como la formulación de propuestas que se deriven de dicho impacto"[24].

Por otra parte, como la Universidad de Oviedo contaba desde los años 70 con un Centro de Documentación Europea (CDE) en Oviedo y un Centro de Referencia en Gijón, la preocupación del Gobierno Regional por los asuntos europeos impulsó la revitalización de estos centros mediante la firma de un Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de

23 - Decreto 83/91, de 13 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas. BOPA número 226, de 28 de septiembre de 1991.
24 - Artículo 23.

Oviedo, como ya se ha señalado, el 21 de enero de 1985[25].

El objeto del Convenio es el de "*proporcionar a la sociedad asturiana, y especialmente a sus sectores empresariales y a las administraciones públicas, un servicio de información y documentación sobre las Comunidades Europeas, (...)*". Así, el CDE pondrá a disposición de todos los usuarios toda la legislación, documentación, publicaciones, revistas, etc. que emanen de las distintas instituciones y órganos de las Comunidades Europeas, incluida la Jurisprudencia producida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades.

El Principado proporcionará, por su parte, la instalación completa de un local que albergue el Centro de Documentación Europea, y que "*se ubicará en un lugar céntrico de la Capital del Principado, en condiciones que favorezca su pública utilización por los usuarios del Centro*", aunque tendrá a todos los efectos el carácter de centro dependiente de la Universidad de Oviedo. En el Convenio se especifica, igualmente, que el Principado de Asturias y sus diferentes organismos, tendrán acceso gratuito a todos los servicios, durante los dos primeros años de funcionamiento de este servicio, y que a partir de los cuales "*la continuación de la gratuidad vendrá condicionada al establecimiento de un nuevo dispositivo de ayuda por parte del Principado, y a la consiguiente renovación de este convenio*".

Especialmente interesante y fructífera resultó la colaboración y cooperación que se estableció entre el Centro de Documentación Europea y la Oficina de Asesoramiento del Principado de Asturias en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas. En efecto, durante dieciocho años se elaboró conjuntamente el Boletín de Información sobre las Comunidades Europeas, primero, y el Boletín de Información sobre la Unión Europea, después, que con periodicidad bimestral se publicaron alrededor de 100 números, siendo codirectores del mencionado boletín la Directora/or del CDE y el Director de la OFACE. Asimismo, en colaboración con el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo y el CDE, se realizaron cursos sobre los aspectos más relevantes de las Comunidades Europeas, destinado a los alumnos de la Facultad de Derecho; destinados a la sociedad Asturias en general, la OFACE y el CDE organizaron diferentes conferencias, seminarios, jornadas, etc., como las relativas al Acta Unica Europea, el ejercicio de la profesión de abogado en la Europa comunitaria, la leche y la carne de vacuno ante las Comunidades Europeas, la política industrial de las Comunidades Europeas, la CECA, etc.

25 - Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo sobre el Centro de Documentación Europea, firmado el 21 de enero de 195 por el Presidente del Principado, Don Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos y el Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, Don Alberto Marcos Vallaure.

Nuevos Convenios y Protocolos de colaboración entre el Principado Asturias y la Universidad de Oviedo se han ido firmando a lo largo de los últimos años, con diferentes objetivos y contenidos. Nos referiremos sólo a aquellos en los que se haga alusión a los temas relacionados con la Unión Europea.

Así, en el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, de 23 de marzo de 1988[26], cuyo objeto es facilitar la colaboración permanente entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo "*en todas las materias de carácter académico, científico y cultural de interés común*", en una cláusula adicional se manifiesta que "*al amparo de lo previsto en el presente Convenio, se declara expresamente en vigor, en sus propios términos, el Convenio suscrito entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo con fecha de 21 de enero de 1985 para la dotación del Centro de Documentación Europea (...)*".

Años más tarde, el Convenio Marco suscrito entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, de 23 de septiembre de 1996[27], sirve de base para la firma de un Protocolo de Colaboración entre el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Oviedo y la Secretaría General de la Presidencia del Principado de Asturias, el 1 de octubre de 1997[28]. El objeto fundamental del Protocolo de Colaboración es el mismo que el que se establece en el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, de 21 enero de 1985, "*proporcionar a la sociedad asturiana en general y, especialmente a las Administraciones Públicas y a los diferentes sectores sociales y económicos, un servicio adecuado de información y documentación sobre las Comunidades Europeas*", mediante la puesta a disposición de los usuarios de la legislación y documentación que emana de las diferentes instituciones y órganos de la Comunidades, de la Jurisprudencia producida por el Tribunal de Justicia, así como de las publicaciones, documentos y revistas editados por el Servicio Oficial de Publicaciones de las Comunidades Europeas y el acceso a las bases de datos

26 - Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, de 23 de marzo de 1988, firmado por el Presidente del Principado, Don Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos y por el Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, Don Alberto Marcos Vallaure.

27 - Resolución de 25 de septiembre de 1996 de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio Marco suscrito entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. BOPA número 239, de 14 de octubre de 1996.

28 - Protocolo de Colaboración entre el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Oviedo y la Secretaría General de la Presidencia del Principado de Asturias. Comisión Permanente de la Comisión de seguimiento del Convenio Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. Firmado el 1 de octubre de 1997 por el Consejero de Cooperación y representante de Asturias en la Comisión se Seguimiento, Don Ramón García Cañal, y el Vicerrector de Investigación y representante de la Universidad de Oviedo en la Comisión de Seguimiento, Don Vicente Gotor Santamaría.

tanto de las propias Comunidades Europeas como a otras especializadas a las que se tenga acceso.

Sin embargo, en este Protocolo se recogen explícitamente algunos de los ámbitos de colaboración que la OFACE y el Centro de Documentación Europea vienen realizando. Así, se precisa que "*(...) ambas partes seguirán colaborando en la elaboración del Boletín Asturiano sobre la Unión Europea y en la realización de actividades conjuntas de interés sobre la Unión Europea*"[29]. Asimismo se recoge la aportación específica de Principado para la adquisición de fondos bibliográficos, *"hasta un millón de pesetas"*, y que los mencionados fondos *"se depositarán en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Oviedo*"[30].

Al amparo del mismo Convenio Marco de 23 de septiembre de 1996, se firma un nuevo Protocolo de colaboración, en este caso entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, el día 21 de marzo de 2001[31], en el que además de poner de manifiesto la colaboración que, desde 1986, se viene manteniendo con el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Oviedo, y se ratifica el objeto fundamental de los sucesivos Protocolos que se han firmado *"(...) con objeto de proporcionar a la sociedad asturiana en general y, especialmente a las Administraciones Públicas, así como a los diferentes sectores sociales y económicos, un adecuado nivel de información sobre las Comunidades Europeas*", se promueve la puesta en marcha de nuevos ámbitos de colaboración.

En este sentido y como principales novedades, se pretende promover, dos actuaciones concretas. Por una parte, "*la Universidad de Oviedo, a través del Centro de Documentación Europea, se compromete a colaborar activamente en la puesta en marcha y consecución del proyecto de creación de una Red asturiana de información y sensibilización europea, que está impulsando la Administración del Principado de Asturias a través de la Dirección General de Asuntos Europeos*"[32]. Por otra parte, ambas partes "*acuerdan colaborar estrechamente en el establecimiento y puesta en marcha de un sistema de difusión selectiva de la información europea, como instrumento necesario que facilite un mejor y más rápido acceso a la documentación y bibliografía*

29 - Cláusula Segunda.
30 - Cláusula Cuarta.
31 - Protocolo de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, al amparo del Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo (BOPA de 14 de octubre de 1996). Comisión Permanente de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco. Firmado el 21 de marzo de 2001 por Don Luis Iturrioz Viñuela, Consejero de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, y Don Mario Díaz Fernández, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo.
32 - Cláusula Primera.

de la Unión Europea"[33].

Por lo que se refiere a la Red Asturiana de Información y Sensibilización, ésta nunca se puso en marcha. No obstante, a partir de enero de 2001, el Boletín Asturiano sobre la Unión Europea pasó a denominarse EURASTUR, cambiando totalmente su formato y contenidos. EURASTUR se elaboró exclusivamente por el personal de la Dirección General de Asuntos Europeos, primero, y por el de la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, en la actualidad. Por lo que se refiere al sistema de distribución selectiva de la información (DSI), se puso efectivamente en funcionamiento por la Dirección General de Asuntos Europeos y sigue operativo en la actualidad, aunque se realiza sin colaboración alguna con otros entes.

Además de los Convenios firmados con la Universidad de Oviedo para la colaboración mutua en relación con la integración Europea, se firmaron igualmente Convenios con otros organismos, cuya finalidad última ha sido siempre un más eficaz y eficiente servicio a la sociedad asturiana en general para un mejor conocimiento de todos los temas relacionados con la Unión Europea.

Así, el 28 de febrero de 1998, se firma el Convenio Marco de colaboración e intercambio de experiencias entre la Representación en España de la Comisión de las Comunidades Europeas y el Principado de Asturias[34], cuyo objeto es el de "*adoptar las medidas adecuadas para llevar a cabo un intercambio de información, documentación y experiencias en todos los asuntos de su competencia relacionados con la integración europea*"[35], especificando que la colaboración y el intercambio de experiencias "*se realizará fundamentalmente a través de la Oficina de Asesoramiento sobre Comunidades Europeas del Principado de Asturias*", que se concretará principalmente en la realización de actividades relacionadas con:

a) Intercambio de información europea.

b) Formación de funcionarios y empleados públicos en asuntos europeos.

33 - Cláusula Tercera.
34 - Resolución de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y la Representación en España de la Comisión de las Comunidades Europeas para llevar a cabo un intercambio de información, documentación y experiencias en todos los asuntos de su competencia relacionados con la integración europea, firmado por Don José Ramón García Cañal, Vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias y Don Gonzalo Velasco García, Director de la Representación en España de la Comisión de las Comunidades Europeas. BOPA número 63 de 17 de marzo de 1998.
35 - Cláusula Primera.

c) Colaboración y coordinación en la difusión de la información europea en el Principado de Asturias.

d) divulgación de cuestiones relacionadas con la construcción europea.

e) Cualesquiera otras actividades complementarias y referidas al cumplimiento de los objetivos previstos[36].

En el Convenio se prevé la posibilidad de celebrar convenios específicos de aplicación que regulen el alcance de la actividad particular que se pretenda realizar, en los que se determinarán el contenido concreto de las acciones. Se prevé asimismo la designación de un Coordinador por ambas partes que se encargarán de la ejecución y seguimiento de la aplicación del Convenio Marco[37].

El 12 de marzo de 1999, se firma un Convenio de colaboración con la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.[38], cuyo ámbito de aplicación se reduce a las actividades que se puedan realizar en Bruselas y relacionadas con la integración europea. En este sentido, las partes firmantes del Convenio, teniendo en cuenta que desde abril de 1995 el Principado de Asturias cuenta con una Oficina de representación en Bruselas, "*encargada de realizar las funciones de representación y colaboración ante las instituciones y órganos de la Unión Europea* ", y que la Sociedad Regional de Promoción considera de interés realizar actividades de promoción e información en Bruselas en apoyo de la actividad que desarrollo, "*acuerdan prestarse la colaboración y asistencia necesaria en el desarrollo en Bruselas de aquellas actividades de interés común relacionadas con la integración europea, sin perjuicio de que la autonomía institucional y económica sea plena en el desarrollo de sus funciones por ambas partes*"[39].

Para el desarrollo del Convenio, el Principado de Asturias se compromete a "*facilitar la ubicación en los locales de su Oficina de Bruselas de una persona dependiente de la Sociedad Regional de Promoción*", asumiendo la Sociedad Regional de Promoción el resto de los gastos que ocasione la presencia del

36 - Cláusula Segunda.
37 - Cláusulas Tercera y Cuarta.
38 - Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. para el desarrollo en Bruselas de actividades de interés común relacionadas con la integración europea, de 12 de marzo de 1999. Firmado por Don Leonardo Verdín Bouza, Consejero de Cooperación y Vicepresidente del Principado de Asturias, y Don José de Jove Sela, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.
39 - Cláusula 1ª.

personal dependiente de la misma Sociedad[40].

Aunque formalmente no se trate de un Convenio de colaboración, la creación de la Oficina de Asesoramiento sobre temas Comunitarios de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) propició la firma de un acuerdo tripartito de colaboración entre la propia FADE, el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. En base al mencionado acuerdo, la Universidad de Oviedo se compromete a que "*la Oficina pueda acceder a los Centros de Documentación dependientes de la misma, así como a todos sus servicios de documentación existentes*". El Principado de Asturias, por su parte, mediante Resolución de 4 de marzo de 1986[41], concede una subvención de dos millones de pesetas "*con destino a sufragar los gastos de primer establecimiento, y especialmente la adquisición de material bibliográfico, suscripción de revistas, mobiliario e instalaciones y contratación de personal especializado*".

Además, se garantiza el apoyo de la Oficina de Asesoramiento del Principado de Asturias en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas para la puesta en marcha de la Oficina de FADE y la asistencia técnica al personal de la misma.

A comienzos de 1986, volviendo a la estructura orgánico-administrativa de la Administración del Principado, y con objeto de reforzar la cooperación entre los diferentes Departamentos de la Administración autonómica en todos los ámbitos relacionados con el proceso de integración europea, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de febrero, se crea la Comisión de Coordinación para los Asuntos Comunitarios[42], "*con carácter interno y adscripción funcional a la Consejería de la Presidencia*". Las funciones generales que se asignan a la mencionada Comisión son de dos tipos:

a) Coordinar y planificar las actuaciones relacionadas con las Comunidades Europeas que se lleven a cabo por los distintos órganos del Principado.

b) Efectuar el seguimiento y aplicación de la normativa comunitaria y de las políticas de las Comunidades Europeas que afecten de modo especial a los intereses de la Comunidad Autónoma.

40 - Cláusulas 2ª y 3ª.
41 - Resolución de 4 de marzo de 1986 por la que se concede una subvención a la Federación Asturiana de Empresarios para ayudar a la instalación de una Oficina de Información en temas relacionados con la CEE.
42 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de febrero de 1986, por el que se crea la Comisión de Coordinación para los Asuntos Comunitarios. BOPA número 53, de 5 de marzo de 1986.

Para el cumplimiento de esas funciones generales, se prevén una serie de actuaciones referidas, fundamentalmente, a:

- La elaboración de estudios e informes sobre los proyectos a presentar a los instrumentos financieros comunitarios, elaborados por los distintos órganos del Principado, así como sobre los programas o proyectos susceptibles de participar en políticas o programas comunitarios.

- La elaboración de dictámenes sobre las disposiciones que, en desarrollo y ejecución de la normativa comunitaria, deba adoptar el Principado de Asturias.

- El seguimiento de las disposiciones estatales que desarrollen o ejecuten normas comunitarias y que tengan incidencia en la Comunidad Autónoma.

- El examen de la adecuación de la normativa comunitaria de los actos adoptados por el Principado.

- La elaboración de las propuestas que la Comunidad Autónoma presente antes las instancias estatales pertinentes de cara a formar la voluntad del Estado en las instituciones comunitarias.

- El examen de los sectores más directamente afectados por la integración en las Comunidades Europeas y sobre las posibles medidas a adoptar en esos sectores.

- El establecimiento de un cauce de relación con otras Comisiones similares de otras Comunidades Autónomas, con el fin de buscar posiciones comunes en la formación de la voluntad del Estado en las instituciones comunitarias y en desarrollo y ejecución de la normativa comunitaria.

- El estudio de cualquier otra cuestión que, relacionada con las Comunidades Europeas, se plantee en el ámbito del Principado[43].

La Comisión, que preside el Consejero de la Presidencia y cuyo Vicepresidente es el Consejero de Hacienda y Economía, está compuesta por los Directores Regionales de Agricultura; de Comercio; de Economía y

43 - II. Funciones, 1) y 2).

Planificación; de Industria; de Minería y Energía; de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; de Pesca ; y de Trabajo, además de un representante de cada una de las Consejerías y de los técnicos superiores al servicio de la Oficina de Asesoramiento para las Comunidades Europeas, uno de los cuales actuará como Secretario de la misma.

Asimismo, se contempla de posibilidad de invitar a las reuniones de la Comisión a representantes de las entidades, instituciones y organismos que guarden especial relación o puedan resultar especialmente afectados por los acuerdos que se adopten sobre los asuntos incluidos en el orden del día. Del mismo modo, se podrá invitar a las reuniones de la Comisión personas que por sus conocimientos y actividades profesionales se considere que pueden contribuir a un mejor cumplimiento por aquélla de las funciones que le competen.

Por otra parte, se prevé la creación de subcomisiones o grupos de trabajo para el estudio y presentación de informes sobre aspectos sectoriales[44].

En 1994, tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la puesta en marcha del Comité de las Regiones y la nueva reforma de los Fondos estructurales, se requiere intensificar la coordinación entre todos los Departamentos de la Administración regional para afrontar con mayor eficacia esta nueva situación, pero que seguirá asumiendo la Comisión de Coordinación para Asuntos Europeos, que, en este caso, se regulará mediante un Decreto[45], derogando el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1986.

El objeto y las funciones que se le asignan a la Comisión de Coordinación son prácticamente idénticas a las que se le asignaron en 1986, siendo la principal novedad la creación de dos subcomisiones: la subcomisión de Instrumentos Financieros y la subcomisión de Asuntos Generales.

La subcomisión de Instrumentos Financieros, presidida por el Director Regional de Economía y Planificación y compuesta por los responsables de las distintas áreas afectadas por los temas que se vayan a tratar, se encargará de los aspectos económicos y financieros de la integración europea, especialmente de la evaluación y coordinación de las actuaciones relacionadas con los fondos comunitarios.

Por lo que respecta a la subcomisión de Asuntos Generales, presidida por el Director Regional de Relaciones con las Administraciones Públicas

44 - I. Composición, 1, 2 y 3.
45 - Decreto 14/94, de 27 de enero, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Coordinación para los Asuntos Europeos. BOPA número 44, de 23 de febrero de 1994.

y formada igualmente por los responsables de las distintas áreas afectadas por los temas que se traten, se ocupara de todos los demás aspectos de la integración de Asturias en la Unión Europea[46].

En lo que se refiere a la composición de la Comisión, los cambios introducidos en el Decreto de 1994 vienen fundamentalmente dados por la denominación y la reestructuración de las diferentes Consejerías del Principado a partir del inicio de la tercera legislatura (1991-1995) y por el perfil de los vocales que la componen. Así, la Comisión de Coordinación para los Asuntos Europeos está presidida por el titular de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas, siendo vicepresidente el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación. En relación con los vocales, integran la Comisión: un representante de cada una de las Consejerías, el Secretario General de la Presidencia, el Director del Instituto de Fomento Regional y el Director de la Oficina de Asesoramiento sobre Comunidades Europeas, que actuará como secretario[47].

En los primeros años de nuestra pertenencia a la Europa comunitaria, todas las Consejerías que conforman el Gobierno del Principado de Asturias van adaptando progresivamente sus estructuras orgánicas a esta nueva realidad, fundamentalmente para beneficiarse de las intervenciones de los diferentes programas e instrumentos financieros comunitarios.

Así, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en su artículo 54, autoriza a la Comisión de las Comunidades Europeas a facilitar la financiación de programas de inversiones, de trabajos y de instalaciones que contribuyan directamente a la competitividad de los productores de carbón y de acero. Esta disposición ha permitido a la Comisión Europea, ya desde 1954, conceder préstamos, normalmente a largo plazo y al 1% de interés, para la construcción, compra y modernización de viviendas para los trabajadores de las empresas CECA. Todas las solicitudes de los préstamos antes mencionados deben ser dictaminadas por un Comité paritario específico, compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y de empresarios del sector y presidido por un representante de la Administración.

En este sentido, para que los trabajadores de las empresas CECA ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma pudieran beneficiarse de los préstamos CECA para viviendas sociales, mediante un Acuerdo del

46 - Artículo 4.1.a) y b).
47 - Artículo 3.1.

Consejo de Gobierno de 10 de junio de 1986[48] , se crea el Comité Regional de Viviendas Sociales CECA. La misión del mencionado Comité es la de emitir un dictamen sobre la solicitud de ayuda dirigida a la Comisión de las Comunidades Europeas en base a las orientaciones para la aplicación del décimo programa de viviendas sociales CECA aplicable durante el período 1984-1988, para la ejecución del proyecto de construcción de 404 viviendas y locales en La Felguera, Sama, Pola de Laviana, Mieres y Teverga, promovidas por el Montepío de la Minería Asturiana del Carbón, que solicita la Ayuda[49].

El Comité, presidido por un representante de la Administración, está formado por cuatro representante de las organizaciones de empresarios: dos representantes de HUNOSA y dos representantes de la Cámara Oficial Minera de Asturias; y cuatro representantes de las organizaciones de trabajadores: dos representantes del SOMA-UGT y dos representantes de Comisiones Obreras de la minería de Asturias[50].

En el Acuerdo del Consejo de Gobierno se especifica que el Comité se disolverá una vez emitido el dictamen para el que ha sido creado, y que la creación de este Comité no prejuzga la creación, composición y funciones del Comité que se constituya con carácter permanente[51].

El Comité Regional *ad hoc* de viviendas sociales CECA queda extinguido por el Decreto 135/86, de 28 de noviembre, por el que se crea el Comité de Viviendas Sociales CECA de Asturias[52], cuya función es la de informar de las solicitudes dirigidas a la Comisión de las Comunidades Europeas, en base a las orientaciones que la mencionada Comisión establezca en los correspondientes programas de viviendas sociales CECA[53].

El Comité, presidido por el Consejero de Industria y Comercio del Principado, está formado por cuatro representantes de las organizaciones de empresarios: un representante de HUNOSA, un representante de ENSIDESA, un representante de la Cámara Oficial Minera de Asturias, y un representante del sector siderúrgico; y por cuatro representantes de las organizaciones de trabajadores: un representante del SOMA-UGT, un representante de la Federación Siderometalúrgica de la UGT de Asturias, un representante del Sindicato Regional de la Minería de Comisiones Obreras de Asturias y un

48 - Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 10 de junio de 1986, por el que se crea con carácter provisional y "ad hoc" el Comité Regional de Vivienda Sociales CECA. BOPA número 173, de 26 de julio de 1986.
49 - Punto segundo.
50 - Punto tercero.
51 - Puntos quinto y sexto.
52 - BOPA número 282, de 4 de diciembre de 1986.
53 - Artículo 1.

representante del Sindicato Regional del Metal de Comisiones Obreras de Asturias[54].

Por su parte, la Administración del Principado de Asturias prestará al Comité el apoyo técnico necesario, y actuará como secretario del mismo, con voz pero sin voto, el Director Regional de Vivienda. Posteriormente, en 1992, se modifica la composición del Comité para adaptarlo a la reestructuración de las Consejerías realizada el 11 de julio de 1991, asumiendo la presidencia del mismo el Viceconsejero de Turismo y Fomento del Empleo[55].

La estructura orgánica de la Consejería Hacienda, Economía y Planificación[56], de 1987, asigna a la Dirección Regional de Economía y Planificación, entre otras funciones, dos explícitamente relacionadas con la integración en las Comunidades Europeas y de la condición de Asturias como región beneficiaria de las intervenciones de los Fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros comunitarios:

- La preparación, tramitación, control y seguimiento de los Programas y Proyectos susceptibles de ser cofinanciados por los Fondos estructurales europeos: FEDER, FEOGA, FSE.

- El estudio de los incentivos regionales y su adecuación a la normativa comunitaria[57].

Para llevar a cabo estas actuaciones, se crea, dentro del Servicio de Programación y Seguimiento de Inversiones Públicas de la Dirección Regional de Economía y Planificación, la Sección de Fondos Estructurales[58]. Una norma posterior, de 1990, el Decreto 88/90[59], no introduce cambio alguno ni en cuanto a los cometidos que se le asignan a la Dirección Regional de Economía y Planificación en lo relativo a los asuntos europeos, ni en lo que se refiere a la estructura de la mencionada Dirección.

En relación con la Consejería de Industria y Comercio, el Decreto de 1986 que regula su estructura orgánica[60], al enunciar en su parte introductoria

54 - Artículo 2.
55 - Decreto 30/92 de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 135/86, de 28 de noviembre, mediante el cual se crea el Comité de Viviendas Sociales CECA de Asturias. BOPA número 87, de 13 de marzo de 1992.
56 - Decreto 55/87, de 17 de septiembre. BOPA número 239, de 17 de octubre de 1987.
57 - Artículo 16 f) y j).
58 - Artículo 15.
59 - Decreto 88/90, de 26 de diciembre, de estructura orgánica de la Consejería, BOPA número 89, de 19 de marzo de 1991.
60 - Decreto 14/86, de 6 de febrero. BOPA número 84, de 27 de febrero de 1986.

la necesidad de una reforma de la misma para crear el Centro de Inspección Técnica de Vehículos, aduce como motivo fundamental la necesidad de encajar adecuadamente el impacto que, "*por causa de la integración de España en la Comunidad Económica Europea, se va a producir en la cantidad de tareas y funciones a realizar (...) en todo lo relacionado con la aplicación de la normativa comunitaria a la inspección de los vehículos a motor*".

Posteriormente, en 1990, teniendo en cuenta que el Principado de Asturias había sido incluido entre las regiones beneficiarias de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), creado por el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957 para intervenir en todo lo relacionado con la formación y el empleo en la Europa comunitaria, se crea, en el Servicio de Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo, adscrita a la propia Consejería de Industria, Comercio y Turismo[61], la Sección "Unidad de Gestión del Fondo Social Europeo"[62], con el objeto de coordinar todas las actuaciones de formación profesional cofinanciadas por el FSE en Asturias que, en esta fase de la integración en las Comunidades Europeas, fue considerada como *región prioritaria* para las intervenciones del mencionado Fondo estructural.

Un año más tarde, mediante una nueva reforma de la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, la Unidad de Gestión del Fondo Social Europeo se integró en la Viceconsejería de Turismo y Fomento del Empleo a través de la recién creada Agencia Regional de Empleo[63].

Por lo que respecta a la Consejería de Medio Rural y Pesca, la primera referencia a los asuntos comunitarios europeos en su estructura orgánica la encontramos en el Decreto 24/93, de 13 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio Rural y Pesca[64], por el que se crea la "Sección de Acciones Comunitarias", integrada en el Servicio de Planes y Programas de la Dirección Regional de Cooperación y Mejora Rural. Aunque a esta Sección no se le asigna un cometido específico, parece evidente que se encargará de todo lo relacionado con la Política Agrícola Común (PAC) en el ámbito del Principado de Asturias.

1.2. La estructura orgánico-administrativa de los asuntos europeos en la 4ª Legislatura (17 de julio de 1995-21 de julio de 1999)

Al inicio de la cuarta Legislatura, coincidiendo con el cambio de

61 - Decreto 76/90, de 17 de octubre. BOPA número253, de 31 de octubre de 1990.
62 - Artículo 19, dos a).
63 - Decreto 89/1991, de 13 de septiembre. BOPA número 223, de 31 de octubre de 1991.
64 - BOPA número 133, de 10 de junio de 1993.

orientación política del Gobierno del Principado, se produce una reordenación de la estructura orgánico-administrativa en relación con los asuntos europeos, que afectó fundamentalmente a la OFACE.

En efecto, en el Decreto por el que se regula la estructura orgánica de los órganos de apoyo de la Presidencia del Principado de Asturias[65], corregido por una Rectificación de errores de 24 de enero de 1996, la OFACE se adscribe a la Secretaría General de la Presidencia, a la que se encomienda además "*las relaciones del Principado de Asturias con las oficinas de éste en Madrid y ante la Unión Europea en Bruselas*"[66]; esta última, aunque fue abierta en abril de 1995 no se creó formalmente hasta 1999, como más adelante veremos. No obstante, y debido sin duda a un error tipográfico, en el Decreto que regula la Consejería de Cooperación[67], se recoge que "*las funciones de asesoramiento relativas a las Comunidades Europeas se incorporan al Gabinete de la Presidencia*".

La gestión de los Fondos estructurales, por su parte, siguió adscrita a la Consejería de Economía a través de la Dirección Regional de Economía de la Viceconsejería de Hacienda. En concreto, es al Servicio de Políticas Comunitarias, con una Sección específica de Fondos estructurales, al que le corresponde la preparación, tramitación, control y seguimiento de los programas y proyectos comunitarios (Fondos estructurales, Iniciativas Comunitarias, etc.), susceptibles de ser cofinanciados por los Fondos estructurales u otros instrumentos financieros de la Unión[68].

Unos meses más tardes, se suprimió el Servicio de Programas Comunitarios[69] y se creó la Oficina de Gestión de Fondos Comunitarios, adscrita a un nuevo Servicio llamado, en este caso, de Planificación y Estadísticas[70], aunque se le asignan las mismas funciones que tenía el extinto Servicio de Programas Comunitarios.

En 1998, se regula una vez mas la estructura orgánica de la Consejería de Economía[71] y, en esta ocasión a diferencia de las anteriores, se encomienda explícitamente a la Dirección Regional de Economía "*la elaboración y seguimiento de los Programas Operativos e Iniciativas Comunitarias financiados con fondos europeos, coordinación de las políticas comunitarias*

65 - Decreto 116/95, de 27 de julio. BOPA número 175, de 29 de julio de 1995.
66 - Artículo 6.
67 - Decreto 117/95, de 27 de julio. BOPA número 175, de 29 de julio de 1995.
68 - Decreto 118/95, de 27 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Artículos 17 y 22, BOPA número 175, de 29 de julio de 1995.
69 - Decreto 164/1995, de 7 de septiembre. BOPA número 222, de 25 de septiembre de 1995.
70 - Artículo 20.
71 - Decreto 43/98, de 9 de julio. BOPA número 173, de 27 de julio de 1998.

aplicadas en el Principado y análisis de las ayudas públicas desde el punto de vista de la financiación comunitaria y la coherencia con la normativa europea aplicable (...)"[72].

Este Decreto suprime la Oficina de Gestión de Fondos Comunitarios, creada en 1995, y se vuelve a crear el Servicio de Políticas Comunitarias, que había sido suprimido, y al que se adscribe la Sección de Fondos Estructurales, encomendándosele, en particular, "*la preparación, tramitación, control y seguimiento de programas y proyectos susceptibles de ser cofinanciados por fondos comunitarios*"[73].

La introducción del euro como moneda única a partir del 1 de enero de 1999 en los Estados miembros que participen en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), aconsejaba la creación, entre otras cosas, de una estructura organizada dentro de la Administración del Principado de Asturias que permitiese anticipar las acciones necesarias a llevar a cabo por ésta para facilitar la implantación del euro. En este sentido, a mediados de 1988, se crea la Comisión para la implantación del euro en el Principado de Asturias[74].

La mencionada Comisión se establece como un órgano interno de asesoramiento y apoyo a de la Administración del Principado, adscrito a la Consejería de Economía, y a la que se atribuyen, entre otras, las siguientes funciones:

- Proponer medidas destinadas a prevenir los efectos de la introducción del euro y facilitar el tránsito hacia la moneda única en el seno de la Administración del Principado de Asturias.

- Aprobar y coordinar los planes de actuación propuestos por las diferentes Consejerías, incluido la adaptación informática al nuevo escenario del año 2000.

- Proponer y realizar estudios, análisis e informes sobre las consecuencias que la implantación del euro pueda suponer en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y en las relaciones de ésta con el sector privado.

- Proponer planes de información sobre la introducción de euro en la Administración del Principado y en toda la sociedad asturiana,

72 - Artículo 22.
73 - Artículo 26.
74 - Decreto 22/98, de 28 de mayo. BOPA número 135, de 12 de junio de 1998.

y definir los agentes promotores de dicha información.

- Identificar los problemas que requieran colaboración con otros sectores afectados por la introducción del euro[75].

La Comisión la preside el titular de la Consejería de Economía, siendo Vicepresidente el titular de la Dirección Regional de Hacienda, y actuando como Vocales de la misma los titulares de las Secretarías Generales Técnicas, Intervención General, Dirección General de Economía y del Servicio de Informática y Proceso de Datos. El Secretariado de la misma lo desempeña el titular del Servicio de Política Financiera.

En el Decreto de constitución se prevé la posibilidad de participación en las reuniones de la misma, por invitación de los miembros, de representantes de la propia Administración del Principado, de otras Administraciones Públicas, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región y de especialistas en los temas que trate la Comisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de crear subcomisiones y grupos de trabajo para la realización de estudios, informes o propuestas sobre los asuntos que específicamente se les encomiende[76].

Por lo que se refiere a la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura[77], es al Servicio de Programación y Presupuestos al que se le asigna la función de "*controlar la ejecución y justificación de inversiones cofinanciadas por los instrumentos comunita*rios"[78], sin que exista órgano alguno específico que se encargue expresamente de las múltiples actuaciones de la PAC o de la política de pesquera comunitaria.

No obstante, la constitución en organismo pagador al Principado de Asturias para la gestión de los fondos de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)[79], de conformidad con la normativa comunitaria sobre la financiación de la política agrícola común (PAC) que abre la posibilidad de establecer varios organismos pagadores en cada Estado miembro, y del Real Decreto 2.206/95, de 28 de diciembre, que regula las actuaciones interadministrativas relativas a los gastos de la Sección Garantía del FEOGA, que prevé que en cada Comunidad Autónoma se podrá designar o autorizar un solo organismo pagador de las ayudas de la Sección Garantía del FEOGA, mediante el Decreto 32/96, de 26 de julio, se designa a

75 - Artículo 2.
76 - Artículos 3, 4 y 5.
77 - Decreto 122/95, de 27 de julio, BOPA número 175, de 29 de julio de 1995.
78 - Artículo 4.
79 - Decreto 32/96, de 26 de julio, BOPA número 179, de 2 de agosto de 1996.

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura como organismo pagador en el ámbito del Principado de Asturias, en relación con las líneas de ayuda, respeto de las que tenga competencia de resolución y pago, con cargo a la Sección Garantía del FEOGA, en las condiciones previstas en la normativa comunitaria.

En consecuencia, se le encomiendan las funciones de autorización, ejecución y contabilidad de pagos; la adopción de las medidas necesarias para garantizar la realidad y la regularidad de las operaciones financiadas por el FEOGA, previniendo y persiguiendo las irregularidades, así como recuperando las cantidades perdidas como consecuencia de irregularidades o negligencias; la adopción de las medidas que puedan facilitar la realización de los controles que la Comisión Europea considere útiles en el marco de la financiación comunitaria, incluyendo las verificaciones sobre el terreno; y participar en las comprobaciones y verificaciones realizadas por la Comisión[80].

Años más tarde, al comienzo de la quinta legislatura (1999-2003), se regulan la estructura y las funciones de ese organismo pagador[81], y se atribuye a la Secretaría General Técnica, en ese momento de la Consejería de Medio Rural y Pesca, las funciones de organismo pagador, precisándose que las Direcciones Generales de Agroalimentación, de Montes y el Instituto de Desarrollo Rural ejercerán, cada una de ellos en el ámbito de sus competencias, las funciones correspondientes a servicios técnicos del organismo pagador.

En julio de 1996, mediante un Decreto de la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Regional de Formación[82], a la que, en relación con los asuntos comunitarios europeos, se le encomienda, en lo relativo a sus funciones de evaluación y seguimiento, el "*seguimiento y evaluación de los programas adscritos a fondos europeos que tengan como objetivo la formación*".

En febrero de 1997, se crea la Agencia para la Promoción del Empleo[83] que cuenta con un Servicio de Formación, al que se adscribe la Unidad de Gestión del Fondo Social Europeo, encargada del diseño, seguimiento y evolución de los diferentes proyectos que se financian con cargo al FSE.

En el inicio de la quinta legislatura se suprime la Agencia para la Promoción del Empleo[84], a la que nos acabamos de referir, y se crea un nuevo Servicio, llamado de Iniciativas Comunitarias para el Empleo, adscrito a la

80 - Artículos 1 y 2.
81 - Decreto 172/1999, de 17 de diciembre. BOPA número 300, de 30 de diciembre de 1999.
82 - Decreto 36/96, de 26 de julio. BOPA número 208, de 6 de septiembre de 1996.
83 - Decreto 9/97, de 13 de febrero. BOPA número 50, de 1 de marzo de 1997.
84 - Decreto 85/1999, de 11 de agosto. BOPA número 188, de 13 de agosto de 1999.

Dirección General de Formación de la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo, al que se le encomienda la misión de "*elaborar propuestas de proyectos cofinanciados por los Fondos estructurales y otros instrumentos financieros para la promoción del empleo a través de la formación profesional, la orientación y la asistencia técnica en el marco de las condiciones generales de las Iniciativas Comunitarias en vigor y aquellas otras que se promuevan desde la Unión Europea*" [85].

Como consecuencia del traspaso de competencias al Principado de Asturias en materia de ejecución de la legislación laboral, prevención de riesgos laborales, cooperativas y entidades asimilables así como la gestión de la formación ocupacional, el 30 de diciembre de 1999, e igualmente del traspaso de las funciones de gestión que, en materia de trabajo, empleo y formación, viene realizando el Instituto Nacional de Empleo, el 12 de febrero de 2000, se modifica la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente, en los años 2000 y 2001[86], para adaptarla a la nueva situación.

Por lo que respecta al Servicio de Iniciativas Comunitarias, que continua adscrito a la Dirección General de Formación, se amplían y completan sus funciones, entre otras:

- La coordinación de los proyectos acogidos a Iniciativas Comunitarias con otros que se incluyan en planes y programas de promoción del empleo en Asturias por otros organismos y entidades.

- Promover y divulgar los productos derivados de la puesta en marcha de las Iniciativas Comunitarias y otros programas europeos para el empleo entre los potenciales usuarios, ocupándose igualmente del seguimiento de la inserción de sus beneficiarios.

- La tramitación, ejecución y justificación de otros programas europeos y proyectos innovadores, vinculados con la formación profesional destinada a la generación de empleo, o con la mejora de la estabilidad y calidad de empleo existente.

85 - Artículo 12.
86 - Decreto 9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo, BOPA número 36, de 14 de febrero de 2000. Decreto 20/2001, de 8 de febrero, de primera modificación del Decreto 9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo, BOPA, número 41 de 19 de febrero de 2001.

Asimismo, al Servicio de Formación Ocupacional y Continua se le asigna, entre otras, la misión de tramitar los expedientes de solicitudes de ayuda, justificación de gastos y seguimiento de los ingresos a través del Fondo Social Europeo o de otros instrumentos financieros comunitarios referidos a su ámbito de actuación. Al Servicio de Intermediación Laboral le corresponde, entre otras, las funciones relativas a las actividades de la Red EURES (Servicios Europeos de Empleo), cuyo objetivo es facilitar el principio de la libre circulación de personas a todos los ciudadanos de la UE que deseen beneficiarse de la misma.

Como acabamos de ver, la estructura orgánico-administrativa de los asuntos europeos en el Principado de Asturias desde 1985 hasta el inicio de la Quinta legislatura en 1999, ha sido básicamente dualista, por la implicación fundamentalmente de dos Departamentos. En efecto, la Consejería de la Presidencia o la Consejería equivalente en funciones, aunque variara su denominación y, más tarde, la Secretaría General de la Presidencia, se ocuparon de los aspectos políticos, jurídicos e institucionales de los asuntos comunitarios europeos; mientras que la Consejería de Hacienda y Economía se ocupaba de la programación y gestión de los Fondos estructurales.

No obstante, como indica acertadamente Bernardo Fernández Pérez, "con frecuencia se olvida o pasa generalmente desapercibido que la gestión de las muy importantes ayudas agrícolas de origen comunitario (procedentes del FEOGA, sección Garantía) se lleva a cabo siempre (...) por la Consejería de Agricultura (o de Medio Rural), con lo que acaso convendría calificar de pluralista este tipo de estructura administrativa"[87].

1.3. Hacia un modelo monista

Con el inicio de la Quinta legislatura en 1999, se produce una modificación importante, al crearse en la Administración del Principado la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos. Así, el Decreto 10/1999, de 20 de julio, del Presidente del Principado, asigna a la mencionada Consejería "*las funciones en materia de asuntos europeos actualmente atribuidas a otros Departamentos*", poniendo así fin al modelo dualista que había configurado la gestión de los asuntos comunitarios en la Administración autonómica e instaurando un modelo monista que hace depender del mismo Departamento los aspectos jurídicos-institucionales y los económicos-financieros derivados de la integración europea.

87 . Fernández Pérez, Bernardo, "*Actividad Exterior del Principado de Asturias*", en El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio Sistemático, Junta General del Principado de Asturias, 2003, páginas 698-703.

Se crea, como un órgano central, la Viceconsejería de Asuntos Europeos y se la dota con una importante estructura orgánica[88]. De la mencionada Viceconsejería dependen la Dirección General de Programación Comunitaria, la Dirección General de Coordinación Jurídica e Institucional y la Oficina de Representación del Principado de Asturias ante la Unión Europea, que mediante una rectificación de errores de 4 de octubre de 1999, pasó a denominarse Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas. Como órganos colegiados dependen de la misma Viceconsejería la Comisión de Seguimiento de Actuaciones con Financiación Comunitaria y la Comisión Interdepartamental para Asuntos Jurídicos e Institucionales relacionados con la Unión Europea.

Esa Viceconsejería de Asuntos Europeos, "*directamente dependiente del Consejero*", ostentará la competencia y ejercerá las funciones de dirección, coordinación, control y seguimiento de los Asuntos relacionados con la Unión Europea, así como la dirección de la Oficina de Representación del Principado en Bruselas.

Por su parte, a la Dirección General de Programación Comunitaria se le asignan, entre otras, las funciones siguientes:

- La elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Regional.

- La coordinación y control de idoneidad de los objetivos de todas las acciones realizadas por el Gobierno Regional y entidades de él dependientes con financiación de la Unión Europea.

- La vigilancia de la coherencia de las acciones señaladas anteriormente, tanto en lo que se refiere a su enfoque como a su ejecución, con el resto de actuaciones relevantes para el desarrollo regional que se realicen no sólo por el Gobierno del Principado de Asturias, sino también por el resto de Administraciones Públicas y sector privado relevante, con o sin recursos provenientes de la Unión Europea.

- Análisis y propuesta de las solicitudes de ayudas que se promuevan con cargo a los Fondos FEDER y de Cohesión.

La Dirección General de Coordinación Jurídica e Institucional ejercerá las funciones relativas a:

88 - Decreto 69/1999, de 10 de agosto. BOPA número 187, de 12 de agosto de 1999.

- La coordinación general, el impulso, el seguimiento y la evaluación permanentes de las actuaciones del Gobierno Regional no comprendidas entre las funciones asignadas a la Dirección General de Programación Comunitaria y relacionadas con la Unión Europea.

- La supervisión de la adecuación de los proyectos de normas y, en general, de todas las actuaciones del Gobierno Regional al derecho comunitario.

- La vigilancia y supervisión de la compatibilidad con el Tratado de la Unión Europea de las ayudas públicas otorgadas por el Gobierno Regional y los entes de él dependientes.

- La canalización y control de todas las comunicaciones oficiales de las Consejerías y demás entes dependientes del Gobierno Regional con las Instituciones comunitarias y, en especial, con la Comisión Europea.

- La dirección de la respuesta y reacción debidas en los procedimientos de infracción abiertos por las autoridades comunitarias en relación con materias de competencia o interés de la Comunidad Autónoma, con especial atención al normal funcionamiento del Mercado Interior Europeo.

- La participación de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional en los distintos organismos que intervienen en los procesos de decisión comunitarios, tanto en su fase nacional como en la específicamente comunitaria.

- La propuesta al Gobierno, en estrecha colaboración con el Servicio Jurídico, de la interposición directa de recursos, así como interesar al Gobierno de la Nación su presentación o el apoyo a recursos presentados por otros Estados miembros o Instituciones comunitarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra actos presuntamente contrarios al derecho comunitario que puedan perjudicar los intereses del Principado de Asturias.

- El fomento de acciones de cooperación interregional de interés para el Principado de Asturias.

- La puesta a disposición del Gobierno Regional y de la sociedad

asturiana en general de formación e información sobre las políticas de la Unión Europea.

A la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas se le asignan las funciones de:

- Cooperar con el Gobierno español en la defensa de los intereses de Asturias ante las instituciones comunitarias.

- El seguimiento del proceso de toma de decisiones por parte de las instituciones comunitarias, con especial atención a las que afectan de modo específico a Asturias.

- Fomentar y apoyar encuentros y reuniones de trabajo entre los agentes socioeconómicos y/o las autoridades y funcionario de las Administraciones públicas de Asturias con los responsables de las Instituciones comunitarias.

- La puesta a disposición de las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas de la Región y entidades de ellas dependientes así como de las empresas asturianas, de información de su interés relacionadas con las actividades de las Instituciones comunitarias y no disponibles fácilmente en los canales de información de acceso general.

- El apoyo a una eficaz presentación y seguimiento de los proyectos de cualquier tipo presentados por entidades públicas o privadas asturianas cuya decisión deba ser adoptada por las Instituciones comunitarias.

- El fortalecimiento de las relaciones con las autoridades y funcionarios de las Instituciones comunitarias así como con los expertos que participan habitualmente en los procedimientos de evaluación y/o decisión comunitarios.

- El apoyo a la búsqueda de relaciones con instituciones y entidades públicas y privadas de otros Estados y Regiones de la Unión Europea o candidatos a pertenecer a las mismas, dirigidas al establecimiento de relaciones de partenariado que impulsen la apertura de las instituciones y empresas de Asturias al espacio europeo.

- El apoyo a la obtención de información sobre tendencias de los

mercados, nuevas tecnologías disponibles o a punto de estarlo y buenas prácticas de las empresas en el espacio europeo.

- La colaboración en el diseño y aplicación de una estrategia para la difusión en Europa de una imagen positiva de Asturias que propicie la implantación de empresas y la buena acogida de sus productos.

En septiembre del mismo año 1999, se establece la organización y funcionamiento de la Oficina de Representación del Principado de Asturias ante la Unión Europea[89], con la posterior rectificación de errores a la que hemos aludido, asignándosele las mismas funciones que se le asignaban en el Decreto de estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, que acabamos de comentar.

Por lo que respecta a su funcionamiento, el Decreto precisa que la Oficina de Representación del Principado en Bruselas "*actuará a requerimiento de la Administración del Principado de Asturias, por propia iniciativa o a petición de personas o entidades de Asturias, previo conocimiento del Gobierno Regional*". Igualmente se especifica que la Oficina del Principado podrá actuar individualmente o en cooperación con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

Tan ambiciosa estructura sólo se mantuvo como tal durante un período breve de tiempo. En efecto, por sendos Decretos de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de septiembre de 2000 y de abril de 2001[90], respectivamente, se modifica la estructura orgánica de la mencionada Consejería, que reordena el modelo de organización de los asuntos comunitarios europeos en el Principado y se reintroduce una estructura orgánica propia de un sistema dualista.

En el Decreto de septiembre de 2000, en su parte introductoria, se apuntan las razones por las que se procede a modificar la estructura orgánica de la Consejería: "*tras culminar el proceso de negociación y planificación necesario para lograr la aprobación por la Unión Europea del Programa de Desarrollo Regional (PDR), y finalizada la elaboración del Marco Comunitario de Apoyo para Asturias en el período 2000-2006 y de los*

89 - Decreto 135/1999, de 8 de septiembre. BOPA número 210 de 10 de septiembre de 1999.
90 - Decreto 68/2000, de 5 de septiembre, de segunda modificación del Decreto 62/1999, de 10 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, BOPA número 210, de 9 de septiembre de 2000. Decreto 40/2001, de 11 de abril, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, BOPA número 97, de 27 de abril de 2001.

programas operativos que lo desarrollan, en el ámbito de la programación comunitaria comienza una nueva fase donde prima el seguimiento y el control de la ejecución de los objetivos propuestos, una línea más próxima al ámbito presupuestario que ha aconsejado la integración funcional y orgánica en la Consejería de Hacienda del órgano competente en la materia, la Dirección General de Economía y Planificación, con la consiguiente desaparición de la Dirección General de Programación Comunitaria, hasta hoy dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos".

En consecuencia, la reforma llevada a cabo por el Decreto de abril de 2001 supone:

a) La supresión de la Viceconsejería de Asuntos Europeos.

b) La supresión de la Dirección General de Programación comunitaria de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos y la reasignación a la Dirección General de Economía y Programación, de la Consejería de Hacienda, de las funciones relacionadas con la gestión de los recursos financieros procedentes de los fondos comunitarios, en particular, de los Fondos estructurales.

c) La reconversión de la Dirección General de Coordinación Jurídica e Institucional en Dirección General de Asuntos Europeos, con las mismas funciones.

d) La configuración de la Oficina de Representación del Principado en Bruselas como órgano desconcentrado, como Agencia, adscrita a la Dirección General de Asuntos Europeos.

e) La supresión en la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de la Comisión de Seguimiento de Actuaciones con Financiación Comunitaria, y la reconversión de la Comisión Interdepartamental para Asuntos Jurídicos e Institucionales relacionados con la Unión Europea en Comisión Interdepartamental para Asuntos Europeos.

Posteriormente, un nuevo Decreto de la Consejería de Hacienda, que deroga los anteriores, y por el que se regula la estructura orgánica básica de la mencionada Consejería[91], crea la nueva Dirección General de Economía y Presupuestos, a la que se encomiendan, entre otras funciones, la "*coordinación general de las intervenciones de los Fondos estructurales y de Cohesión de la*

91 - Decreto 96/2001, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, BOPA número 240, de 16 de octubre de 2001.

Unión Europea". Dentro de la estructura de la mencionada Dirección General se crea el Servicio de Fondos Europeos, cuyas funciones son básicamente las mismas que las que se le asignaron a la Dirección General de Economía y Programación[92].

En relación con la Consejería de Medio Rural y Pesca, cuya estructura orgánica básica se regula mediante el Decreto 96/1999, de 12 de agosto[93], además de las funciones que se le asignan al Servicio de apoyo al Organismo Pagador constituido para la gestión de los fondos de la Sección Garantía del FEOGA, y a otros departamentos de la Consejería en relación con este mismo Organismo, como ya hemos visto, se crea el Instituto de Desarrollo Rural como órgano desconcentrado y con nivel orgánico de Dirección General, al que se adscribe el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, cuya función consiste en "*gestionar las primas y ayudas de la Unión Europea, (...), de apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos, así como las que compensen las limitaciones de las zonas desfavorecidas o con programas agroambientales. Gestionará también las ayudas a la renta de los agricultores y ganaderos*"[94].

Posteriormente, con motivo del traspaso de las funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de encomienda de gestión del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) y de otros ámbitos en materia agrícola y pesquera, el 30 de diciembre de 1999, se modifica el Decreto por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería[95], adscribiendo al Instituto de Desarrollo Rural el Servicio de Apoyo, con las funciones de "*elaboración, organización y desarrollo de los planes anuales de control de las primas y ayudas comunitarias del FEOGA-Garantía, la participación en los planes y programas con financiación comunitaria del FEOGA-Orientación y en los Comités de seguimiento de todos los programas del Instituto cofinanciados por la Unión Europea*"[96].

Por otra parte, un número considerable de los diferentes Departamentos de la Administración Regional incluyen entre sus funciones el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de la Unión Europea en relación con sus respectivos ámbitos de competencias, se creen o no órganos específicos para su puesta en práctica, como una actividad ordinaria en el desempeño de sus funciones.

92 - Artículos 17 y 21.
93 - BOPA número 189, de 14 de agosto de 1999.
94 - Artículos 15 y 18.
95 - Decreto 8/2000, de 3 de febrero, primera modificación del Decreto 96/1999, de 12 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca, BOPA número 36, de 14 de febrero de 2000.
96 - Artículo 15 bis.

Así, mediante el Decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia[97], se crea el Instituto Asturiano de la Mujer como órgano desconcentrado y nivel orgánico de Dirección General, y entre su funciones se recoge la de "*fomentar las relaciones (...) y con las Instituciones comunitarias para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres*". Posteriormente, en el Decreto por el que se regula la organización y funciones del Instituto Asturiano de la Mujer[98], se insiste en la necesidad de colaborar con las Instituciones de la Unión Europea, especialmente en lo referido a los programas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en los de no discriminación por razón del sexo.

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias[99], que deroga la Ley 6/1983, de 9 de agosto, por la que se creó el Instituto de Fomento Regional, contempla, entre los fines y facultades del Instituto, el de "*proporcionar información y asesoramiento sobre ayudas a la inversión que ofrezcan las distintas administraciones y la Unión Europea, así como acerca de asuntos comunitarios de interés empresarial*". Del mismo modo, dentro de sus facultades, se recoge la de *"participar en programas e iniciativas de la Unión Europea*"[100].

1.4. La situación actual

En la legislatura 2003-2007 se produce una reordenación de los asuntos comunitarios europeos con la introducción de un modelo totalmente diferente al que había existido hasta ese momento. En efecto, con el inicio de la legislatura "se ha despiezado en el Principado la estructura administrativa que atendía la actividad exterior de la Comunidad Autónoma, y reconstruido su estructura y distribuido las funciones vinculadas a ella de un modo peculiar"[101].

En este sentido, el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma[102], asigna a la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores "*las funciones relativas a Asuntos Europeos actualmente atribuidas a la Consejería de*

97 - Decreto 61/1999, de 10 de agosto, BOPA número 187, de 12 de agosto de 1999.
98 - Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, BOPA número 217, de 18 de septiembre de 1999.
99 - BOPA número 99, de 30 de abril de 2002.
100 - Artículos 6 y 7.
101 - Fernández Pérez Bernardo, o.p. cit. p.p. 703-707.
102 - BOPA número 157, de 8 de julio de 2003.

Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, excepto las ejercidas por la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas", que se atribuyen a la Consejería de la Presidencia.

No obstante, la asignación de competencias a la Consejería de la Presidencia en asuntos europeos parece ser provisional, puesto que el Decreto 82/2003, de 24 de julio, de estructura orgánica de los órganos de apoyo de la Presidencia del Principado de Asturias[103], crea la Delegación del Principado de Asturias en Bruselas, con nivel orgánico de Viceconsejería, que "*actuará como centro de referencia de la Comunidad Autónoma ante las instituciones y órganos europeos, promocionando y defendiendo los intereses del Principado de Asturias ante las instituciones de la Unión Europea (...)*", se adscribe la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas, cuyas funciones son "*las establecidas en sus normas de organización y funcionamiento*".

En cuanto a la nueva Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores[104], cuyas competencias van más allá de los asuntos comunitarios europeos, con relación a los asuntos comunitarios que aquí nos ocupan, se le asignan las funciones, entre otras, de:

- Supervisión de la adecuación normativa, y en general de todas las actuaciones de la Administración Autonómica relativas al derecho comunitario.

- La vigilancia y supervisión de la compatibilidad con el Tratado de la Unión Europea de las ayudas públicas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias y sus organismos dependientes.

- La canalización y control de las comunicaciones oficiales de las Consejerías y demás entes dependientes de la Administración del Principado con las Instituciones comunitarias y, en especial, con la Comisión.

- La dirección de la respuesta y reacción debidas en los procedimientos de infracción abiertos por las autoridades comunitarias en relación con materias de competencia o interés de la Comunidad Autónoma, con especial atención al normal funcionamiento del Mercado Interior Europeo.

103 - BOPA número 175, de 29 de julio de 2003.
104 - Decreto 82/2003, de 29 de julio, BOPA número 176, de 30 de julio de 2003.

- El fomento de acciones de cooperación interregional en el espacio europeo de interés para el Principado de Asturias.

- La puesta a disposición de la Administración del Principado, y de la sociedad asturiana en general, de formación e información sobre las políticas de la Unión Europea.

- El apoyo a una eficaz formalización y seguimiento de los proyectos que las entidades públicas y privadas asturianas presenten a las convocatorias comunitarias.

Por lo que respecta a la gestión de los aspectos económicos y financieros, que se mantienen en la Consejería de Economía y Administración Pública, la principal "novedad" en la estructura orgánica de la misma[105] es la creación de la Viceconsejería de de Presupuestos y Administración Pública, a la que se adscribe la Dirección General de Presupuestos que entre sus funciones se le encomienda "*la coordinación general de las intervenciones de los Fondos estructurales y de Cohesión de la Unión Europea en Asturias*". El Servicio de Fondos Europeos, que conserva las funciones que ya tenía en la anterior legislatura, es el que operativamente se encarga, dentro de la Dirección General de Presupuestos, de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de las intervenciones de los Fondos comunitarios.

En relación con la gestión de los asuntos agrícolas tanto en el marco de la política agrícola común (PAC) como en el de otros programas comunitarios en ese ámbito, el Decreto 11/2005, de 27 de enero, de la Consejería de Medio Rural y Pesca[106], en su parte introductoria expone los motivos de esta modificación, todos ellos relacionados con la gestión de los asuntos comunitarios europeos en los ámbitos de competencia de la Consejería: "*La gestión de la mayor parte de las ayudas de la PAC, que significa un importante nivel presupuestario en cada ejercicio y un volumen considerable de expedientes, incrementado con la gestión, ya desempeñada por el Servicio de Extensión Rural, de los programas comunitarios PRODER y LEADER, y la reforma actual de la PAC, que en su nueva versión debe comenzar a aplicarse en 2005, lo que supone una nueva modalidad de gestión en las ayudas directas, parte fundamental para la supervivencia del sector agrario del Principado de Asturias, hace necesario una modificación del Instituto de Desarrollo Rural en cuanto a la distribución de funciones entre los Servicios de Extensión Rural y Primas,*

105 - Decreto 84/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, BOPA número 176, de 30 de julio de 2003.
106 - Decreto 11/2005, de 27 de enero, primera modificación del Decreto 91/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca, BOPA número 34, de 11 de febrero de 2005.

Ayudas de Rentas y Apoyo".

Al Instituto de Desarrollo Rural, a cuyo frente existirá un Director/a con nivel orgánico equiparado a Viceconsejería, se adscriben los nuevos Servicios de Programas Comunitarios y Extensión Rural y de Gestión de Ayudas Directas y Pago Unico.

Al Servicio de Programas Comunitarios y Extensión Rural se le asignan las funciones de gestión de los programas de desarrollo endógeno de zonas rurales y las Iniciativas Comunitarias de desarrollo rural, así como la gestión, evaluación y seguimiento de estos programas conjuntamente con los representantes institucionales y socioeconómicos locales, concretamente de los programas PRODER (Programas de Desarrollo Rural) y la Iniciativa Comunitaria LEADER. Del mismo modo, se le encomienda la coordinación y el seguimiento financiero de las medidas financiadas por el FEOGA que forman parte del Programa Operativo Integrado (POI), así como los programas operativos pluriregionales.

Por su parte, el Servicio de Ayudas Directas y Pago Unico desarrollará las funciones de gestión del régimen de pago único de la reforma de la política agrícola comunitaria (PAC) y de las ayudas directas derivadas de la aplicación de la PAC al sector agrario. Igualmente, se ocupará de la gestión de superficies y del sistema de información geográfico de parcelas agrícolas (SIGPAC) y la gestión de las medidas agroambientales y la indemnización compensatoria de montaña del programa horizontal de desarrollo rural para las medidas de acompañamiento.

A la nueva Consejería de Educación y Ciencia se le atribuyen las funciones que venía ejerciendo la Viceconsejería de Educación, las relativas a universidades, investigación desarrollo e innovación que estaban atribuidas a distintos departamentos así como las que en materia de Formación se hallaban atribuidas a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. En particular, es la Dirección General de Formación la que asume las competencias en materia de Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua. Es pues esta Dirección la encargada de gestionar los programas y proyectos del Fondo Social Europeo, de las Iniciativas Comunitarias en los ámbitos de la formación y la inserción profesional y de los programa Sócrates y Leonardo da Vinci en sus diferentes acciones[107].

Actualmente, todas las Consejerías del Principado, con una estructura específica o sin ella, tienen entres sus funciones el seguimiento, análisis y

107 - Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, BOPA número 178, de 1 de agosto de 2003.

aplicación de las diferentes políticas sectoriales de la Unión Europea en sus respectivos ámbitos de competencias. Así, el departamento de Medio Ambiente, dentro de sus correspondientes Direcciones Generales, se ocupa, por ejemplo, de la correcta aplicación de las Directivas medioambientales o de la conservación de los recursos naturales; la Consejería de Cultura del Programa Cultura 2000; el Instituto de la Juventud del Programa comunitario Juventud; la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología de la aplicación del Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión, la Sociedad de la Información, etc.

2. LOS ACUERDOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS EN LOS ASUNTOS EUROPEOS

2.1.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL PROCESO COMUNITARIO DE TOMA DE DECISIONES

2.1.1.- Principios generales de aplicación

La vigente Ley 4/1999[108], de modificación de la Ley 30/1992[109], de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo cuarto el principio general de lealtad institucional entre las Administraciones públicas, en aras a facilitar la colaboración y la cooperación entre las mismas.

Este principio, traducción a su vez del de buena fe y de confianza legítima, recoge los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto y se configura pues como un elemento sustancial e informador de las relaciones entre las Administraciones públicas en un Estado Autonómico moderno.

La colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que libremente establezcan tales Administraciones, básicamente a través de Convenios de colaboración.

En cuanto a la cooperación, la citada Ley establece la necesidad de adecuar los instrumentos y procedimientos al marco fijado por la misma, para el caso de relaciones que tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas, bien por afectar a competencias compartidas, bien por precisarse una actividad común.

Ambos elementos, colaboración y cooperación, conforman también a su vez sendos principios generales en las relaciones entre las Administraciones Públicas, que deben ser aplicados a la luz del principio-deber de lealtad institucional.

108 - BOE número 12, de 14 de enero de 1999.
109 - BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992. Corrección Errores BOE número 311, de 28 de diciembre de 1992.

2.1.2.- Naturaleza de los órganos de cooperación

Para articular esas relaciones de cooperación, el ordenamiento jurídico español ha optado por la figura de la Conferencia Sectorial, que ya proviene de la Ley 12/1983[110], de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

En este sentido, el artículo 5.1 de la actual Ley 4/1999 dispone que:

> *"La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos".*

Aquellos órganos de composición bilateral y de ámbito general se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación[111], siendo las de composición multilateral y de ámbito sectorial los denominados Conferencias Sectoriales.

En ambos casos, los integrantes son miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Los acuerdos que se adopten formalmente en una Conferencia Sectorial serán firmados por el Ministro o Ministros correspondientes y por los correlativos titulares de los órganos de las Comunidades Autónomas.

2.2. LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS (CARCE)

2.2.1.- Puesta en marcha e institucionalización

El inicio del órgano de cooperación denominado Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) podemos referirlo al año 1988, cuando se constituye la correspondiente Conferencia Sectorial en el Ministerio de Administraciones Públicas.

110 - BOE número 247, de 15 de octubre de 1983.
111 - BOPA número 217, de 17 de septiembre de 2004, sobre normas de organización y funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Principado de Asturias.

La incorporación de pleno derecho del Reino de España a las Comunidades Europeas había tenido lugar el 1 de enero de 1986.

A la vista de la experiencia alcanzada tras los primeros años de funcionamiento, las Administraciones que formaban parte de la Conferencia Sectorial entendieron necesario institucionalizar el citado órgano, a fin de "*acometer, con arreglo al principio de cooperación, la solución progresiva de las cuestiones que plantea la participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración y aplicación del Derecho y las políticas comunitarias europeas*".

Es por ello que, en reunión de fecha 29 de octubre de 1992, la CARCE adoptó el Acuerdo[112] de institucionalización de la misma, firmándose el mismo por el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, a excepción del País Vasco quién finalmente se sumaría al mismo con fecha 30 de noviembre de 1995[113].

El ámbito temático de la Conferencia quedaba integrado por las tres siguientes facetas de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas:

- la información a las Comunidades Autónomas y la discusión en común sobre el desarrollo del proceso de construcción europea;

- el tratamiento y resolución con arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de alcance general o contenido institucional relacionadas con las Comunidades Europeas; y,

- el impulso y seguimiento del progresivo desarrollo del esquema de participación de las Comunidades Autónomas aplicable, a través de la respectiva Conferencia Sectorial o instrumento equivalente, en cada una de las políticas comunitarias que afecten a las competencias de aquéllas.

El tratamiento y resolución de los asuntos "*con arreglo al principio de cooperación*" contenía la siguiente lista abierta:

- procedimientos técnicos para asegurar la recepción por las Comunidades Autónomas de la información comunitaria de carácter general;

112 - BOE número 241, de 8 de octubre de 1993.
113 - BOE número 305, de 22 de diciembre de 1995.

- técnica normativa para incorporar las directivas al Derecho interno y completar Reglamentos y Decisiones;

- fórmulas de participación en los procedimientos internos para el cumplimiento de obligaciones ante las instituciones comunitarias;

- problemas planteados en la ejecución del Derecho comunitario por implicar horizontalmente a varias políticas comunitarias o exigir medidas internas con un cierto grado de coordinación temporal o material; y,

- cuestiones relativas a la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas que carezcan de una Conferencia Sectorial o instrumento equivalente donde ser tratadas.

Finalmente, el Acuerdo también contempla la creación de un órgano de apoyo a la Conferencia, al que le corresponderá la preparación de los trabajos, denominado Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos, y que estará igualmente conformado por representantes del Estado y las Comunidades Autónomas, con rango de Director General o asimilado.

Con fecha 14 de junio de 1994[114], la CARCE acordó la ampliación de su ámbito temático, para incluir el tratamiento con arreglo al principio de cooperación, de las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y, en particular, de las relacionadas con el Consejo de Europa que afecten a sus competencias.

Este Acuerdo fue firmado por cada una de las Comunidades Autónomas, resultando por tanto aplicable a las mismas, a excepción del País Vasco que suscribiría el mismo con posterioridad, con fecha 30 de noviembre de 1995[115].

2.2.2.- El Reglamento interno de la CARCE

De conformidad con la previsión contenida en el Acuerdo de institucionalización, la CARCE, en su reunión de 14 de junio de 1994[116], adoptó el acuerdo de aprobación de su Reglamento interno.

Básicamente, el Reglamento establece la estructura orgánica de la

114 - BOE número 257, de 27 de octubre de 1994.
115 - BOE número 305, de 22 de diciembre de 1995.
116 - BOE número 269, de 10 de noviembre de 1994.

CARCE, así como su régimen interno de funcionamiento.

En cuanto a su estructura, la CARCE consta de los siguientes órganos: la Conferencia en Pleno, integrada por miembros del Gobierno estatal y autonómicos; la Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos, formada por Directores Generales o asimilados; y los grupos de trabajo que se constituyan dentro de la Comisión.

El Pleno contará además, en aras a una mayor coherencia del sistema, con la participación en la representación del Estado, del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas y el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.

Aparte de las naturales disposiciones relativas al régimen de funcionamiento, reuniones, convocatoria, orden del día, quórum, etc., el Reglamento establece que los acuerdos de la Conferencia serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Autónomas que los hayan suscrito con expresión, en ambos casos, de las Administraciones firmantes de los mismos.

Aquellas Comunidades Autónomas que no expresen su voto favorable a un Acuerdo, podrán adherirse con posterioridad, surtiendo en este caso efectos a partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa.

2.2.3.- La consolidación y regulación legal de la Conferencia

El desarrollo del principio de cooperación entre las distintas Administraciones y la consolidación del sistema de participación y articulación de procedimientos en el ámbito de los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, garantizando la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la fase de formación, como en la fase de ejecución del Derecho Comunitario Europeo, determinaron la conveniencia de regular la Conferencia mediante una norma de rango de Ley.

Será mediante la Ley 2/1997[117], de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en tanto que órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la que de continuidad a este proceso de participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las instituciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario.

117 - BOE número 64, de 15 de marzo de 1997.

Su composición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley, será la siguiente:

> *"Estará constituida la Conferencia por el Ministro de Administraciones Públicas que la presidirá, y por el Consejero que, como responsable de los asuntos que integran el ámbito de las materias de la misma, sea designado por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con sus normas de organización interna.*
>
> *En la representación de la Administración del Estado se integrarán tanto el Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea como el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales".*

Por lo que se refiere a las funciones y contenidos, básicamente se contemplan los mismos que los establecidos en el Acuerdo de institucionalización de la CARCE, de fecha 29 de octubre de 1992, si bien haciéndose hincapié en la articulación de mecanismos para hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado, así como la necesidad de garantizar por las distintas Conferencias sectoriales los procedimientos y fórmulas de participación establecidos.

La precitada Ley, en su Disposición adicional primera, contempla además la posibilidad de que para aquellas cuestiones que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan para ésta una vertiente singular en función de su especialidad autonómica, se traten a iniciativa de cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo, mediante instrumentos de cooperación de carácter bilateral, caso de las Comisiones bilaterales.

También se contempla, por lo que a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se refiere, que su participación se articulará igualmente a través de la CARCE, formando parte de la misma un miembro del Consejo de Gobierno de cada una de ellas.

2.2.4 El nuevo Reglamento interno

Conforme al mandato legal previsto en el artículo 4.1 de la Ley 2/1997, de 13 de marzo, la CARCE adoptó en su reunión de 5 de junio de 1997 un nuevo Reglamento interno[118], incorporando las modificaciones derivadas de la Ley, así como aquellas fruto de la experiencia de funcionamiento de la Conferencia, derogando el aprobado por la Conferencia en su reunión de 14

118 - BOE número 189, de 8 de agosto de 1997.

de junio de 1994.

Este nuevo Reglamento mantiene los mismos órganos ya establecidos, es decir, Conferencia en pleno, Comisión de coordinadores de asuntos comunitarios europeos y grupos de trabajo que se constituyan en el seno de la Comisión.

Los miembros de la Conferencia, cuya composición viene determinada por lo previsto en el artículo 2 de la Ley citado anteriormente, no podrán delegar su representación en el Pleno, pudiendo excepcionalmente ser sustituido por otro Consejero. Además, podrán estar acompañados del representante en la Comisión de Coordinadores.

Para la válida constitución de la Conferencia, a efectos de la celebración de sesiones, se requiere la presencia, junto con la representación de la Administración del Estado, de al menos catorce de sus miembros.

Conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Reglamento, la Conferencia desarrollará sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes técnicas de cooperación:

- el intercambio de información y de puntos de vista;
- la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas;
- la elaboración conjunta y la adopción de acuerdos;
- la organización conjunta de actividades de estudio, formación, intercambio y divulgación; y,
- la creación de grupos de trabajo y la celebración de reuniones *ad hoc* para la preparación de los trabajos de la Conferencia.

En este marco funcional, cabe hacer mención especial del epígrafe denominado "*Garantía de la participación de las Comunidades Autónomas*" que se predica respecto a la aplicación en las distintas Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación, de los procedimientos y fórmulas establecidos para la participación de las CCAA en los asuntos comunitarios europeos.

En particular, esta garantía de participación se instrumenta a través de los siguientes mecanismos:

- recabando de cada Conferencia sectorial, periódica o

puntualmente, los datos y documentos sobre dicha aplicación, que serán puestos a disposición de los miembros de la Conferencia;

- analizando y evaluando, tanto desde una perspectiva general como en casos concretos, el grado de aplicación de los procedimientos y fórmulas de participación y el resultado alcanzado;

- formulando propuestas y recomendaciones a las Conferencias sectoriales para la efectividad de la aplicación de los procedimientos y fórmulas de participación; y,

- prestando a las Conferencias sectoriales la asistencia técnica precisa para resolver los problemas prácticos de la aplicación de los procedimientos y fórmulas de participación y para completar y perfeccionar su contenido.

Estos mecanismos traen causa del Acuerdo de la Conferencia de 30 de noviembre de 1994, del que daremos oportuna cuenta con ocasión del análisis y detalle de los Acuerdos específicos de cooperación alcanzados en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

En cuanto al régimen de adopción de acuerdos y publicidad de los mismos, se mantienen básicamente las pautas ya establecidas en el precedente Reglamento interno.

2.2.5. La Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios

La Comisión de Coordinadores es el órgano encargado de preparar los trabajos de la Conferencia y sus reuniones se celebrarán en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas.

La Presidencia de la Comisión la ostenta el Secretario de la Conferencia, que recae en el Director General de Cooperación Territorial, siendo su composición la siguiente:

> "(...) está compuesta por un miembro del Gabinete del Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, un miembro del Gabinete del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y por un representante de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla,

preferentemente con categoría de Director General o equivalente, designado por el respectivo miembro de la Conferencia."

Asimismo forma parte de la Comisión el Consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, actuando como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, un funcionario de la Dirección General de Cooperación Territorial.

Tal y como ya se ha señalado, en el seno de la Comisión pueden constituirse Grupos de trabajo con la misión de realizar tareas específicas de preparación, estudio y propuesta de asuntos, siendo su composición determinada por la Comisión de Coordinadores, pudiendo integrarse en esas Comisiones expertos de las distintas Administraciones o personas de reconocida cualificación designados al efecto.

2.3. LOS ACUERDOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN DE LA CARCE

2.3.1.- Acuerdo en materia de ayudas públicas

Uno de los primeros acuerdos formales alcanzados en el seno de la CARCE es el relativo a ayudas públicas, que vino a dar carta de naturaleza a una práctica administrativa que se había demostrado eficaz en el proceso de notificación a la Comisión de las Comunidades Europeas de los proyectos de ayudas públicas correspondientes a las Comunidades Autónomas.

En su reunión de 21 de noviembre de 1990[119], la CARCE adoptó este Acuerdo conjuntamente con otro, relativo a los procedimientos por incumplimiento del Derecho comunitario europeo y del que se dará oportuna cuenta, por el que se establece un cauce unitario de comunicación entre las Comunidades Autónomas y el Estado, y viceversa, a través de la entonces Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, hoy denominada para la Unión Europea.

Establece el Acuerdo que tanto la notificación de los proyectos de ayudas públicas de las Comunidades Autónomas, como de las respuestas y aclaraciones que eventualmente requiera la Comisión europea, se articularán bajo las premisas de agilidad y transparencia. Todo ello, en el marco de un régimen de permanente colaboración entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central.

119 - BOE número 216, de 8 de septiembre de 1992; Rectificación de errores, BOE número 229, de 23 de septiembre de 1992.

En este sentido, la Administración Central, a través de la Secretaría de Estado responsable de los asuntos europeos facilitará los contactos necesarios a las Comunidades Autónomas con la Comisión europea, o viceversa, cuando así se requiera, asegurando además unas comunicaciones rápidas y fluidas entre todas las partes interesadas.

Hasta el presente ejercicio 2006, todas las comunicaciones Comisión/ Estado/CCAA, en ambos sentidos, han venido realizándose vía tele-fax y en formato papel, con una razonable celeridad. Actualmente, se están dando los primeros pasos para lograr una comunicación más eficaz con una plataforma electrónica de uso conjunto.

En el caso del Principado de Asturias, es la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos el órgano encargado de coordinar y canalizar las notificaciones de los proyectos de ayudas públicas a empresas, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, para su notificación a la Comisión de las Comunidades Europeas.

El establecimiento de un cauce permanente de comunicación ha posibilitado el desarrollo de una cooperación estrecha y privilegiada entre los órganos concernidos de las Administraciones implicadas.

En particular, la vigente estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores[120] del Principado de Asturias, atribuye a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, en su artículo 11, letra f), "*la vigilancia y supervisión de la compatibilidad con el Tratado de la Unión Europea de las ayudas públicas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias y sus organismos dependientes*".

Este canal de comunicación o colaboración entre Administraciones, se enmarca en el ámbito estatal en el procedimiento establecido mediante el Real Decreto 1755/1987[121], de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión de las Comunidades Europeas de los proyectos de las Administraciones o Entes públicos que se propongan establecer, conceder o modificar ayudas internas, que prevé el análisis y estudio por una Comisión Interministerial para asuntos económicos relacionados con las Comunidades Europeas, previamente a su remisión por la Secretaría de Estado para la UE a la Comisión de las Comunidades Europeas.

Nos encontramos hoy en presencia de un procedimiento consolidado,

120 - BOPA número 176, de 30 de julio de 2003; Primera modificación, BOPA número 25, de 1 de febrero de 2005; Rectificación de errores, BOPA número 31, de 8 de febrero de 2005.
121 - BOE número 19, de 22 de enero de 1988.

que ha permitido establecer cauces estables de comunicación e interlocución, facilitando el correcto cumplimiento y ejecución del Derecho comunitario por el Estado español, del que forman parte integrante las Comunidades y Ciudades Autónomas previstas en nuestra norma fundamental.

2.3.2.- Acuerdo sobre la participación interna a través de las Conferencias sectoriales (API)

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) adoptó en su reunión de 30 de noviembre de 1994[122], un necesario Acuerdo sobre la participación interna (API) de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias sectoriales.

El citado Acuerdo tenía por objeto determinar el procedimiento marco que cada Conferencia sectorial debe aplicar tanto por lo que se refiere a la fase ascendente de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como en la descendente de ejecución y aplicación descentralizada del Derecho comunitario europeo.

A los efectos de este Acuerdo, se entiende por Conferencia sectorial tanto el Pleno de la misma, como los órganos de nivel inferior que, encuadrados directa o indirectamente en la Conferencia, puedan desarrollar en la práctica el contenido del procedimiento marco.

Se establece además que cada Conferencia desarrollará el procedimiento concretando su ámbito material y modulando su aplicación a tenor de las exigencias de la distribución de competencias y de la respectiva política comunitaria.

A fin de facilitar la aplicación del mismo, se anexaron al Acuerdo una relación de Conferencias sectoriales y órganos de cooperación de muy distinta naturaleza, en correspondencia con políticas comunitarias y las correlativas formaciones del Consejo de ministros de las Comunidades Europeas.

Esta relación, si bien no ha sido formalmente objeto de ampliación, debe entenderse como una lista abierta a la que hay que agregar aquellos órganos de cooperación o Conferencias sectoriales de creación posterior que, independientemente de su denominación, conozcan de materias comunitarias y resulten afectadas competencias autonómicas, sean éstas exclusivas, de desarrollo legislativo o de mera ejecución.

122 - BOE número 69, de 22 de marzo de 1995.

El Acuerdo establece un principio general de información del Estado a las Comunidades Autónomas, en la correspondiente Conferencia sectorial u órgano de cooperación, para el caso de que la materia o asunto comunitario afecte a las competencias reservadas al Estado y las Comunidades Autónomas invoquen su interés.

Caso de afectar el asunto a competencias autonómicas exclusivas, se contempla: "*si en el procedimiento de concertación interno, previo a la decisión del Consejo, se ha llegado a una posición común entre ellas, ésta será tenida en cuenta de forma determinante a efectos de fijar la posición negociadora inicial del Estado*".

Igual previsión se establece para el caso de competencias compartidas o concurrentes, de existir una posición común de las CCAA y del Estado.

En el supuesto de variación sustancial de la posición negociadora del Estado a consecuencia del proceso de negociación comunitaria, éste informará, siempre que los plazos lo permitan, a fin de facilitar una nueva posición común. Caso de no resultar posible, el Estado dará cuenta de la posición llevada al Consejo de ministros de las Comunidades Europeas.

Se contempla además, que en ausencia de posición común por las Comunidades Autónomas, el Estado tomará conocimiento de los argumentos expresados por ellas.

Para que resulte factible lo estipulado en el Acuerdo, se prevé que las Conferencias incluyan en sus órdenes del día los asuntos comunitarios europeos, con arreglo a la tabla de correspondencias mencionada anteriormente, debiendo dejarse además constancia en acta del desarrollo de las reuniones y contenido de los acuerdos alcanzados.

A fin de ordenar esta inclusión de asuntos se establece que, al inicio de cada semestre, se analice por el Pleno de las Conferencias sectoriales el programa de la Presidencia semestral del Consejo de ministros de las Comunidades Europeas.

Con carácter general y como no podría ser de otro modo, se refleja la obligación entre las distintas Administraciones, de facilitarse la información y documentación precisa, para hacer efectiva la participación.

En fin, cabría señalar que la falta de adopción de posiciones comunes, tanto del Estado con las CCAA, como de las CCAA entre sí, ha sido uno de los elementos característicos de este sistema de participación. En demasiadas

ocasiones, donde deberían existir posiciones comunes se brindaban únicamente informaciones, en muchos casos tardías, impidiendo una participación real y efectiva de las CCAA.

Ahora bien, la responsabilidad no cabe sólo atribuirla a la Administración del Estado, sino que nos encontramos ante un claro supuesto de responsabilidad concurrente de todas las Administraciones territoriales implicadas.

Como dato más positivo, reseñar el progresivo y paulatino desarrollo de una cultura de cooperación entre las Administraciones públicas.

En el apartado del Acuerdo relativo a la participación de las CCAA en la fase ascendente o de formación de la voluntad del Estado, básicamente se contempla que será cada Conferencia sectorial la que habrá de remitir sin dilación a las CCAA las propuestas de la Comisión europea fijándose, en función de los plazos de tramitación en el Consejo, un término para expresar su propuesta.

La Conferencia sectorial afectada será también la responsable de informar regularmente de la evolución de las propuestas de la Comisión, de las modificaciones que se produzcan, así como de la propuesta definitiva que se eleve al Consejo de ministros de la UE, correspondiéndole igualmente a ella la decisión de reunir, en su caso, al Pleno de la Conferencia antes de la sesión del Consejo.

El Acuerdo también contempla los mecanismos de participación en la denominada fase descendente o de aplicación descentralizada del Derecho comunitario europeo.

En este sentido, fija un contenido necesario, a instrumentar a través de las respectivas Conferencias sectoriales, cuando la aplicación consista, bien en la aprobación de normas, bien en la ejecución de actuaciones administrativas, o bien en el desarrollo de programas comunitarios.

Todo ello, habrá de desarrollarse con arreglo al reparto competencial interno establecido por el denominado bloque de constitucionalidad. Dicho de otro modo, la aplicación del Derecho comunitario europeo habrá de realizarse con arreglo a las características propias del ordenamiento jurídico interno español, resultando por tanto determinante cual es el nivel competencial atribuido a las distintas Administraciones territoriales.

2.3.3.- Acuerdo sobre la participación en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El primer Acuerdo sobre esta materia denominado "*Acuerdo para regular la intervención de las Comunidades Autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos precontenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y en los asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias*" se alcanzó en la reunión de la CARCE de 21 de noviembre de 1990[123], conjuntamente con el relativo a ayudas públicas, del que ya se ha dado cuenta, como uno de los primeros Acuerdos formales alcanzados.

Al igual que en el caso de las ayudas públicas, se vino a dar carta de naturaleza a una práctica administrativa que también se había demostrado eficaz en el proceso de comunicación con la Comisión europea, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea como órgano de coordinación en la materia, del incumplimiento de las obligaciones comunitarias en aquellos asuntos cuya competencia, en alguna medida, recayese en las CCAA.

Establece el Acuerdo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, por conducto de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas (hoy para la Unión Europea), como órgano de coordinación en la materia, comunicará a la Comunidad o Comunidades Autónomas los escritos de queja, cartas de emplazamiento y dictámenes motivados y demás comunicaciones recibidas de la Comisión de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias.

En tanto que órgano de coordinación, le corresponde al mismo coordinar a las diferentes Administraciones afectadas y en particular a los efectos de elaborar la respuesta, que necesariamente habrá de ser unitaria y atribuible al Estado en su conjunto. Téngase presente que en ocasiones, la posición de distintos Departamentos ministeriales o Consejerías autonómicas, incluso en el seno de una misma Administración, pueden tener planteamientos distintos

En el caso del Principado de Asturias, la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos es el órgano que tiene encomendado "*la dirección de la respuesta y reacción debidas en los procedimientos de infracción abiertos por las autoridades comunitarias en relación con materias de competencia o interés de la Comunidad Autónoma, con especial atención al normal funcionamiento del Mercado Interior Europeo*", tal y como se establece en el artículo 11, apartado h), del Decreto regulador de la

123 - BOE número 216, de 8 de septiembre de 1992; Rectificación de errores, BOE número 229, de 23 de septiembre de 1992.

vigente estructura orgánica.

El Acuerdo regula la participación en las actuaciones tanto en la fase pre-contenciosa (quejas, cartas de emplazamiento, dictámenes motivados) como en la jurisdiccional de los recursos de incumplimiento y se completaba con una previsión de información Estado / CCAA en caso de cuestiones prejudiciales que tuvieran su origen en disposiciones o actos emanados de las CCAA o asuntos que afectasen a sus competencias.

Ahora bien, teniendo en cuenta que existían otros aspectos de la actuación jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no se encontraban previstos, la CARCE adoptó en su reunión de 11 de diciembre de 1997[124], el Acuerdo relativo a la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Se ampliaba entonces a los restantes procedimientos judiciales, caso del recurso de anulación, recurso de inacción y procedimiento por incumplimiento de otro Estado miembro, los ámbitos de participación de las Comunidades Autónomas.

Para los asuntos contenciosos, se mantiene la coordinación a través del conducto de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, en la que se integra la unidad de la Abogacía del Estado acreditada ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La previsión autonómica para estos asuntos la encontramos también en el Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, donde también se atribuye a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos "*la propuesta a la Consejería competente, en colaboración con el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, de la interposición directa de recursos, así como interesar del Gobierno del Estado su presentación o el apoyo a recursos presentados por otros Estados miembros o Instituciones Comunitarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra actos sobre la base de su presunta contradicción con el derecho comunitario que puedan perjudicar los intereses del Principado de Asturias*".

Todas las actuaciones, tanto las pre-contenciosas como las contenciosas propiamente dichas, habrán de realizarse con el concurso necesario de la

124 - BOE número 79, de 2 de abril de 1998.

Administración del Estado, quién coordina y unifica la posición tanto de los distintos Ministerios, como de las Comunidades Autónomas afectadas.

2.3.4.- Acuerdo sobre la participación en los Comités de ejecución de la Comisión europea

Como resultado de los trabajos desarrollados en el seno de la CARCE, durante el ejercicio 1998 se puso en marcha un nuevo mecanismo de participación autonómica consistente en participar en los Comités encargados de velar por el control de las medidas de ejecución que le son conferidas por el legislador comunitario a la Comisión europea y que ésta debe adoptar para hacer posible la ejecución de numerosas normas comunitarias.

De los más de 300 Comités de muy distinta naturaleza y alcance existentes, se abrió la posibilidad a las Comunidades Autónomas de participar, en un primer momento, en 55 Comités, consolidándose esta iniciativa durante el periodo 1999-2002, si bien con limitados resultados.

Para el periodo comprendido entre los ejercicios 2003-2006, la Administración del Estado ha ampliado las posibilidades de participación autonómica a un total de 95 Comités, habiéndose alcanzado además, con fecha 10 de marzo de 2003, un Acuerdo relativo a las Reglas sobre la participación autonómica en los Comités de ejecución de la Comisión europea, que al día de la fecha no ha sido objeto de publicación.

Tal y como se establece en el punto 1.1 de las Reglas, su objeto es el establecimiento de los principios generales a los que se ajusta la participación de los representantes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en los comités de la Comisión europea previstos en la Decisión 1999/468/CE, del Consejo, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Ciertamente esta falta de publicidad no ha impedido su aplicación, ni tampoco la adopción de las Reglas introdujo novedades sustanciales en el papel desarrollado por el Estado y las Comunidades Autónomas respecto al periodo anterior, si bien la experiencia nos demuestra que es en aquellos ámbitos dónde se alcanzan acuerdos concretos, dónde radica en mayor medida la consolidación de los mecanismos de participación.

La distribución de estos Comités ha sido realizada de común acuerdo entre las Comunidades Autónomas y atribuye la representación autonómica en cada uno de los Comités y por ejercicios anuales, a una Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, le corresponde a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, conforme a lo establecido en el artículo 11, apartado i), del ya mencionado Decreto 87/2003, de 29 de julio, "*La participación de las autoridades y de personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias en los distintos organismos que intervienen en los procesos de decisión comunitarios, tanto en su fase nacional como en la específicamente comunitaria*".

El representante autonómico designado al efecto por la Comunidad Autónoma elegida, actúa en representación de todas ellas y en estrecha y leal cooperación con el representante del Estado, en su calidad éste último, de titular y portavoz del Estado en las reuniones del Comité.

A su vez, este representante autonómico, además de asistir a las reuniones con el representante del Estado, es el encargado de informar a los responsables sectoriales, designados al efecto por las restantes CCAA, del desarrollo de cada reunión, remitiéndoles previamente la documentación al objeto de recabar su parecer, así como los acuerdos adoptados que resulten de las mismas.

Este parecer deberá ser tenido en cuenta a efectos de formar la posición del Estado en el Comité correspondiente.

Se trata en definitiva de un mecanismo de participación indirecta, o si se prefiere de una "red" que nos permite conocer y transmitir, en su caso, una posición determinada al representante estatal, vía representante autonómico, tendente todo ello a la consecución de posiciones comunes, en orden a una mejor defensa de los intereses comunes.

Si bien como regla general y acorde con el sistema de conferencias sectoriales y órganos inferiores, se establece que la posición de las Comunidades Autónomas sobre las cuestiones que se están tratando o se van a tratar en la reunión de los comités se expresará y debatirá de forma habitual en las reuniones especializadas de los órganos de cooperación específicos existentes, en la práctica, la adopción de la denominada posición común dependerá fundamentalmente del voluntarismo del empleado público que ostente la representación autonómica y de la existencia o no de interlocutores designados en las restantes Comunidades Autónomas, los denominados responsables sectoriales.

Durante el actual periodo 2003-2006, le ha correspondido a la Administración Autonómica del Principado de Asturias ostentar la

representación de las restantes CCAA en los siguientes Comités:

- Comité de aplicación de proyectos, acciones y medidas destinadas a garantizar la interoperabilidad de las redes transeuropeas para el intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA II – CTA); durante los ejercicios 2003 y 2004.

- Comité de Desarrollo y Reconversión Regional (CDDR); durante los ejercicios 2003 y 2004.

- Comité de aplicación de las acciones previstas en la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional (Leonardo da Vinci II); durante los ejercicios 2005 y 2006.

- Comité de aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación; durante el ejercicio 2005.

- Comité del programa especifico de Estructuración del Espacio Europeo de Investigación; durante el ejercicio 2006.

2.3.5.- Acuerdo sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER)

La Representación Permanente, en su conocido acrónimo de REPER, es el órgano, con carácter representativo y de gestión, acreditado por el Estado español ante la Unión Europea y responsable de asegurar la presencia de España en las instituciones y organismos dependientes de la misma. Su papel es además fundamental en los mecanismos de toma de decisiones comunitarios.

En este marco, la CARCE adoptó, en su reunión de 22 de julio de 1996, un Acuerdo[125] por el que se proponía la creación de la figura de un Consejero dentro de la REPER, con competencia única para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas.

Atendiendo a esta propuesta y a iniciativa de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas, se adoptó el Real Decreto

125 - BOE número 302, de 16 de diciembre de 1996.

2105/1996[126], de 20 de septiembre, por el que se crea la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

En el mismo se le atribuye a esta Consejería la competencia única para relacionarse con las Oficinas autonómicas en Bruselas, con independencia de la información y al papel primordial que corresponde realizar a las Conferencias Sectoriales, según lo dispuesto en el Acuerdo de la Conferencia de 30 de noviembre de 1994.

Establece además el Real Decreto que esa competencia única no afectará a las relaciones que ordinariamente mantengan las Comunidades Autónomas con el resto de los Consejeros de la Representación Permanente.

Esta Consejería para Asuntos Autonómicos la desempeñaba un alto funcionario del Estado, miembro del cuerpo diplomático.

A fin de garantizar una mayor implicación y presencia autonómica, con fecha 9 de diciembre de 2004, se alcanzaron en el seno de la CARCE sendos "*Acuerdos*[127] *sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea; y sobre el sistema de Representación Autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea*".

Estos Acuerdos por lo que a la Consejería para Asuntos Autonómicos se refiere, deja sin efecto el anterior Acuerdo de la CARCE, de 22 de julio de 1996, comprometiéndose además la Administración del Estado a adaptar el Real Decreto de creación de la Consejería, al nuevo alcance de los Acuerdos.

El nuevo Acuerdo establece que los puestos de trabajo de la Consejería, pasarán a ser desempeñados por funcionarios propuestos por las Comunidades Autónomas y previamente consensuados entre ellas. Caso de los dos Consejeros que, actualmente y desde el año 2005, prestan servicios en la citada Consejería.

Estos Consejeros autonómicos se integran, como no podría ser de otro modo, dentro de la organización de la REPER de España ante la Unión Europea. Sus nombramientos tendrán una vigencia limitada a tres años, sin perjuicio de eventuales prórrogas anuales, previa conformidad de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE).

126 - BOE número 229, de 21 de septiembre de 1996.
127 - BOE número 64, de 16 de marzo de 2005.

Con un carácter genérico y muy amplio, el Acuerdo le atribuye los siguientes cometidos específicos en relación con las Comunidades Autónomas:

- transmisión, con la máxima celeridad posible y preferentemente por vía telemática, de la información y documentación generada en relación con las actividades y propuestas normativas de las instituciones comunitarias que puedan afectar a las competencias o los intereses de las Comunidades Autónomas;

- organización de reuniones informativas entre representantes autonómicos y los consejeros sectoriales que prestan servicios en la REPER;

- seguimiento de la participación autonómica en los asuntos europeos dentro de las Conferencias Sectoriales y contribución al desarrollo de dicha participación proporcionando información sobre las claves de la negociación de tales asuntos;

- seguimiento y detección de puntos críticos en las negociaciones de los diferentes asuntos, procediendo a la pertinente comunicación de aquéllos;

- seguimiento informativo de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión europea, de las observaciones a las ayudas públicas notificadas y de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, que afecten a las competencias o intereses de las Comunidades Autónomas;

- apoyo, en su caso, a la coordinación entre las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas, contribuyendo a los mecanismos de cooperación que puedan establecerse para mejorarla;

- a solicitud de las mismas, apoyo específico a las Oficinas de las Comunidades Autónomas en la preparación de visitas y entrevistas de autoridades autonómicas con responsables comunitarios y en la realización de otras gestiones ante las instituciones comunitarias;

- seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones.

En relación con el Ministerio de Administraciones Públicas, el Acuerdo le atribuye los siguientes cometidos específicos:

- información sobre las iniciativas normativas de las instituciones comunitarias que puedan afectar a las competencias de las Comunidades Autónomas;

- información sobre las actividades más relevantes de las instituciones comunitarias que se relacionen o incidan en la actividad política y administrativa de las Comunidades Autónomas;

- tramitación de las propuestas de nombramientos y sustituciones de los miembros españoles del Comité de las Regiones;

- información sobre la actividad más relevante de las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas;

- información sobre la actividad derivada del proceso de descentralización en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, no sustituye en medida alguna a los cauces procedimentales ya establecidos de comunicación Estado/CCAA a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, en el marco de los primeros Acuerdos alcanzados en el seno de la CARCE y de los que ya se ha dado cuenta.

Habiendo sido el referido Acuerdo refrendado por la Administración del Estado, el Principado de Asturias, el resto de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y en aplicación de lo establecido en el artículo 7º.1.a) de la Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos de gobierno del Principado de Asturias, puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Reglamento Interno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, el Principado de Asturias, mediante Resolución de 13 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, ordenó la publicación del citado Acuerdo[128] en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

128 - BOPA número 110, de 14 de mayo de 2005.

2.3.6.- Acuerdo sobre la participación en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea

Aunque formalmente nos encontramos en presencia de la segunda parte del Acuerdo anterior[129], hemos considerado oportuno por razones metodológicas y de exposición el incluirlo como un Acuerdo específico.

Este Acuerdo, largamente esperado, determina los mecanismos de participación autonómica en las instancias preparatorias del Consejo de la Unión Europea y supone un paso cualitativo y cuantitativo de enormes proporciones.

El contenido de este Acuerdo de participación en las instancias preparatorias del Consejo (Grupos de Trabajo y Comité de Representantes Permanentes) ha de entenderse íntimamente ligado al relativo a la representación autonómica directa en las formaciones del Consejo de la Unión Europea, consistente en la participación de un miembro, con rango de Consejero o miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, en el Consejo de la UE, y del que se dará cuenta una vez delimitados los ámbitos abiertos a la participación autonómica en los Grupos de trabajo, en tanto que instancias preparatorias de los asuntos que son sometidos a la decisión del Consejo de la UE, como órgano decidor en el que están presentes todos los Estados miembros.

El Acuerdo establece que la participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea se hará efectiva, en su fase inicial, mediante dos vías:

En primer lugar y en coherencia con la primera parte del Acuerdo, a través de los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, integrándolos en la delegación española de los Grupos de trabajo.

En segundo lugar, a través de los responsables técnicos designados por el miembro del Gobierno autonómico que vaya a ejercer, previo acuerdo de la Conferencia sectorial correspondiente, la representación autonómica directa, también mediante su integración en la delegación española.

Del total de Grupos de trabajo existentes y que periódicamente elabora la Secretaría General del Consejo, la participación autonómica se predica de aquellos que se correspondan con las siguientes formaciones del Consejo:

129 - BOE número 64, de 16 de marzo de 2005.

- Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores;
- Agricultura y Pesca;
- Medio Ambiente; y,
- Educación, Juventud y Cultura.

Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que el Embajador responsable de la Representación Permanente o su adjunto, identifiquen otros Grupos en los que estimen conveniente la asistencia de un consejero de la Consejería para Asuntos Autonómicos.

Establece el Acuerdo que la participación autonómica en los señalados ámbitos habrá de referirse a asuntos que afecten a competencias autonómicas y en representación del conjunto de las Comunidades Autónomas, estableciéndose además el alcance y contenido de la participación, que consta de los siguientes elementos:

- recibir información sobre el calendario de reuniones de los Grupos de trabajo, del Consejo de la Unión Europea, su convocatoria, los respectivos órdenes del día y la documentación de los asuntos que afecten a las competencias autonómicas;
- asistir a las reuniones del Grupo de trabajo formando parte de la delegación española, bajo la dirección del Consejero de la REPER que asuma la jefatura de la delegación y, por tanto, la condición de portavoz de la delegación;
- intervenir en las reuniones de acuerdo con las reglas establecidas en el Acuerdo que establece el sistema de representación autonómica directa en las formaciones del Consejo de la Unión Europea.

La participación autonómica conllevará igualmente, en aras a la coherencia del sistema, la asistencia al Comité de Representantes Permanentes (COREPER), cuando se traten en el mismo asuntos que afecten a las competencias autonómicas y en tanto que última instancia preparatoria previa al Consejo.

2.3.7.- Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea

El presente Acuerdo[130] se alcanzó en el seno de la CARCE, con fecha 9 de diciembre de 2004, conjuntamente con el Acuerdo relativo a la Consejería para Asuntos Autonómicos y a la participación de las CCAA en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea, de los que ya se ha dado cuenta.

Este Acuerdo culmina la apertura a la participación de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de la Unión Europea, posibilitando la participación directa de aquéllas, mediante la incorporación a la delegación española, en las reuniones de determinadas formaciones del Consejo, de un miembro con rango de Consejero o miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, en representación de todas las CCAA y en aquellos asuntos que afecten a sus competencias.

Siguiendo el contenido del Acuerdo, el mismo establece una serie de principios generales de aplicación a esa representación autonómica directa, que son los siguientes:

- el principio de la unicidad de representación de España en el seno de la Unión Europea;
- el principio de unidad de acción de España en el exterior;
- el principio de la necesidad de mantener y facilitar la capacidad de propuesta y de reacción de España en el sistema de adopción de decisiones del Consejo de la Unión Europea;
- el principio de lealtad y mutua confianza entre las instancias autonómicas y estatal;
- el principio de corresponsabilidad a la hora de lograr el mayor grado de eficacia en la participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea;
- el principio general de representación conjunta de las Comunidades Autónomas; y,
- el principio de responsabilidad del Estado en el resultado de las negociaciones.

130 - BOE número 64. de 16 de marzo de 2005.

Ciertamente, salvando la referencia específica al sistema de adopción de decisiones del Consejo de la Unión Europea, los señalados principios también resultarían de aplicación a los demás mecanismos de participación autonómica, bien sean Grupos de trabajo del Consejo, bien Comités de la Comisión europea.

En coherencia con el sistema de participación diseñado en las instancias preparatorias del Consejo, la representación autonómica directa será de aplicación a las cuatro formaciones del Consejo abiertas a la participación en Grupos de Trabajo.

Esta determinación de apertura a cuatro formaciones del Consejo de las diez existentes, se plantea con carácter inicial, vistas las experiencias de otros Estados con estructuras descentralizadas, así como la confluencia de competencias autonómicas en las cuatro formaciones objeto de apertura: Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; y Educación, Juventud y Cultura.

La futura evaluación del sistema de participación y los resultados que se alcancen, resultarán determinantes en orden a la ampliación de la participación a otras formaciones del Consejo.

Para la determinación del representante autonómico, es decir, del miembro de un Consejo de Gobierno autonómico que habrá de incorporarse en la delegación española en las reuniones de las formaciones del Consejo, será el Pleno de la Conferencia Sectorial respectiva la competente para su designación.

En este sentido, el Acuerdo identifica las Conferencias Sectoriales vinculadas en relación a las formaciones del Consejo cuya apertura se pretende, lo que da una primera idea de las dificultades prácticas que conlleva la aplicación del mismo, vistas las numerosas Conferencias afectadas.

A la formación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, y en razón de las materias objeto de decisión, se vinculan las Conferencias Sectoriales de Asuntos Laborales, de Asuntos Sociales, Consumo, Turismo y Consejo Interterritorial de Salud.

Por lo que se refiere a la formación del Consejo de Agricultura y Pesca, resultan vinculadas las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Pesca Marítima.

En cuanto a la formación del Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente, solamente aparece vinculada una, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, lo que como veremos no presupone garantía alguna de estabilidad del representante autonómico.

Por último, la formación del Consejo relativa a Educación, Juventud y Cultura, alcanza en el plano interno y por razón de la materia, a las Conferencias Sectoriales de Educación, Asuntos Sociales y Cultura.

El procedimiento para la designación del representante autonómico será establecido por el Pleno de cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas, ahora bien, el Acuerdo establece unas pautas mínimas, o si se prefiere un marco general de actuación, que garantice básicamente la estabilidad, cubriendo como mínimo un semestre de presidencia del Consejo, así como la necesaria sucesión de representantes autonómicos. Todo ello, en aras a una efectiva y real participación en los asuntos que se someten a la decisión del Consejo de la UE.

La pluralidad de Conferencias Sectoriales afectadas ha supuesto una diversidad de soluciones alcanzadas en las mismas, y muy en particular, por lo que se refiere a la necesaria sucesión de representantes autonómicos.

Los criterios poblacionales, la alternancia de las diferentes opciones políticas, la fecha de la aprobación de los estatutos, etc., han sido algunas de las opciones fijadas por las Conferencias Sectoriales vinculadas en orden al establecimiento del mecanismo de rotación en la representación autonómica directa.

Por lo que se refiere a la estabilidad de esa representación, incluso en alguna Conferencia Sectorial como la de Medio Ambiente, se ha acudido a un criterio de distribución de la representación por sesiones, lo que ha provocado que en un semestre se produzca la participación de tres representantes autonómicos distintos.

Tal y como se establece en el Acuerdo, el representante autonómico asumirá por parte de las Comunidades Autónomas, la coordinación del proceso previo a la incorporación a la delegación española y la concertación con la Administración del Estado.

Para hacer posible la efectividad de esa representación, se contempla además la necesidad de designación de un responsable técnico por parte del representante autonómico elegido, pudiendo aquel asistir a las reuniones de las instancias preparatorias del Consejo.

Ciertamente y para que la representación no sea meramente testimonial, resulta preciso la participación efectiva en aquellas instancias preparatorias de los asuntos que serán tratados finalmente en el Consejo de Ministros, en el que tomará parte, integrado en la delegación española y en representación de todas las CCAA, el miembro del Consejo de Gobierno autonómico elegido por la respectiva Conferencia Sectorial.

En el caso del Principado de Asturias y durante estos dos primeros ejercicios de aplicación del Acuerdo, se ha participado en Grupos de Trabajo de Medio Ambiente, de Salud Pública y Productos Farmacéuticos, en asuntos sometidos con posterioridad a la consideración de estas dos formaciones del Consejo de Ministros de la UE, y en los que han tomado igualmente parte los miembros del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias responsables por razón de la materia de Medio Ambiente y Salud, todo ello en aras a la debida y necesaria coherencia del sistema.

La participación última del representante autonómico en el Consejo supone, además de la integración como miembro de pleno derecho en la delegación española y en representación del conjunto de las Comunidades Autónomas, la posibilidad del uso de la palabra, previa concertación con el jefe de la delegación y en tanto se debatan cuestiones que afecten a competencias autonómicas y exista una posición común autonómica que expresar.

En cualquier caso, "*La responsabilidad última de las negociaciones y de su conclusión corresponderá en todo momento al jefe de delegación*".

La determinación de los concretos asuntos sobre los que se aplicará la representación autonómica directa se realizará, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo, en cada una de las Conferencias Sectoriales vinculadas y con arreglo al programa semestral de la Presidencia del Consejo de Ministros de la UE.

En fin, la Comunidad Autónoma que ostente la representación autonómica y a través de su representante directo, que deberá ser miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, y del representante técnico designado por él, normalmente un empleado público altamente cualificado, deberán informar regularmente a las restantes Comunidades Autónomas y desarrollar el proceso tendente al establecimiento de posiciones comunes, con arreglo a las pautas que se establezcan en cada Conferencia Sectorial y en orden a la posterior concertación con la Administración del Estado.

El establecimiento de grupos de trabajo especializados en el seno de las Conferencias Sectoriales o bien la integración de esos asuntos en órganos

de cooperación ya existentes, aparece como uno de los cauces más factibles en torno a los cuales quepa implementar, consolidar y desarrollar un Acuerdo de estas características y que posibilite que la representación autonómica directa sea efectiva y no un mero mecanismo de representación institucional.

3. LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON PARTICIPACIÓN REGIONAL

El movimiento regionalista europeo se ha manifestado, desde sus inicios al comienzo de la década de los setenta, por que las regiones se conviertan en verdaderos socios en el proceso de integración europea, como portadoras que son de democracia, mediante una participación efectiva en el diseño y aplicación de las políticas de la Unión que afecten, particularmente, a la cohesión económica, social y territorial, así como por un mayor desarrollo de la cooperación interregional y transfronteriza en todos los ámbitos y al servicio de los ciudadanos.

Además, manifestándose como profundamente europeísta y sin cuestionar su pertenencia estatal, busca y preconiza un encaje de las regiones en Europa más profundo, con el objetivo de reforzar y legitimar más a la Unión, sustentándose en la convicción de la complementariedad existente entre las competencias de la Unión, de los Estados miembros y de las Regiones.

La insistencia del movimiento regionalista en la defensa del papel de las regiones como expresión política de su identidad, al mismo tiempo que su demanda reiterada de incidir más directamente en la promoción de los mecanismos de desarrollo socioeconómico de los territorios y de sus ciudadanos, ha contribuido, sin duda, a la decisión de las instituciones comunitarias de crear los dos órganos de la Unión con participación de las Regiones: el Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones.

3.1. El Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales de la Comisión Europea

Creado por Decisión de la Comisión de 24 de junio de 1988[131], el Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales es el antecedente inmediato del Comité de las Regiones y se configura como un órgano de apoyo más a la Comisión, de los muchos que existen, en el proceso de formación de sus decisiones.

En este sentido, la Comisión Europea consideró necesario que los Entes Regionales y Locales participasen en mayor medida en la elaboración y aplicación de la Política Regional de la Comunidad, incluidas las repercusiones regionales y locales de las otras políticas comunitarias. Así, la Comisión

131 - Decisión 88/487/CEE, de 24 de junio, D. O. L 247, de 6 de septiembre de 1988.

"*podrá consultar al Consejo Consultivo sobre cualquier cuestión relacionada con el desarrollo regional y, en especial, con la elaboración y aplicación de la política regional de la Comunidad, incluidas las repercusiones regionales y locales de otras políticas comunitarias*"[132].

El Consejo consultivo estaba formado por 42 miembros[133], de los que expresamente se requiere, que tengan un mandato electivo a nivel regional o local; serán nombrados a título personal, la mitad de ellos por sus conocimientos y experiencias específicas en cuestiones relativas a problemas de desarrollo de las regiones, y la otra mitad por sus conocimientos y experiencias específicos en cuestiones relativas al desarrollo de los municipios y de los entes existentes a un nivel intermedio entre los municipios y las regiones.

Los miembros del Consejo consultivo son nombrados por la Comisión por un período de tres años, a propuesta conjunta de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE), de la Unión Internacional de Ciudades y Autoridades Locales y del Consejo de Municipios y Regiones de Europa.

En el seno del Consejo se crearon dos secciones, una integrada por representantes de las regiones y otra por representantes de los entes locales. La Comisión Europea podrá someter una consulta bien al Consejo consultivo en su conjunto, bien, previo dictamen de la mesa, a una de sus secciones. Del mismo modo, la mesa del Consejo podrá pedir a la Comisión que consulte al Consejo consultivo o a una de sus secciones sobre asuntos de su competencia.

Uno de los cinco puestos que le correspondieron a España fue ocupado por el Presidente del Principado de Asturias, Don Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos[134], y como su suplente, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Don Joaquín Leguina. Como miembro titular del Comité, el Presidente del Principado participó en los Dictámenes relativos al seguimiento y evaluación de la reforma de los Fondos estructurales de 1988 así como a las propuestas de la Comisión en relación con las Iniciativas Comunitarias RECHAR, ENVIREG, STRIDE e INTERREG y al programa LEADER , a la entrada en vigor del Mercado Unico Europeo en 1992 y la política comunitaria de transporte, al primer proyecto de Carta Social Europea así como al programa de intercambio de experiencias y de cooperación regional y local en materia

132 - Artículo 2.
133 - La distribución de los puestos del Consejo Consultivo entre los entonces Estados miembros de las Comunidades Europeas es: Bélgica: 2 puestos, Dinamarca: 2 puestos, República Federal de Alemania: 6 puestos, Grecia: 2 puestos, España: 5 puestos, Francia: 6 puestos, Irlanda: 2 puestos, Italia: 6 puestos, Luxemburgo: 1 puesto, Países Bajos: 2 puestos, Portugal 2 puestos y Reino Unido: 6 puestos.
134 - En septiembre de 1991, Don Pedro de Silva fue sustituido por el nuevo Presidente del Principado de Asturias, Don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio.

de desarrollo, propuesto por la Comisión Europea, entre otros. En relación con este programa, el Consejo Consultivo propuso las tres modalidades de cooperación que se podrían realizar con financiación comunitaria: intercambio y transferencia de experiencias; proyectos pilotos, y estructuración de redes de cooperación económica y tecnológica.

3.2. El Comité de las Regiones

La creación de un Comité de las Regiones, concebido como una institución más de la Comunidad Europea, fue una de las prioridades políticas fundamentales de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE). Para la ARE, la creación de este Comité encontraba su fundamento y legitimad en la necesidad de una mayor implicación de las regiones tanto en el proceso de toma de decisiones comunitario como en el diseño, aplicación, seguimiento, y evaluación de las políticas comunitarias.

Creado por el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Comité de las Regiones es el órgano, que no institución, de representación de los Entes Regionales y Locales en el proceso de toma de decisiones comunitario, aunque con funciones meramente consultivas: emitir Dictámenes no vinculantes por consultas preceptivas de la Comisión Europea, el Consejo o el Parlamento Europeo, por iniciativa propia o dictámenes facultativos.

Los miembros del CdR, cuyo número no podrá exceder de 350, con igual número de miembros suplentes, son nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de sus respectivos Estados miembros, para un período de cuatro años, precisándose en el Tratado que ningún miembro del Comité podrá ser simultáneamente miembro del Parlamento Europeo. De los 21 miembros que le corresponden a España, 17 representan a cada una de las Comunidades Autónomas, 2 a las Diputaciones Provinciales y 2 a los Municipios. Desde su creación, el Presidente del Principado forma parte del mismo como miembro titular y el Vicepresidente del Consejo de Gobierno o el titular de la Consejería competente en los Asuntos Europeos como miembro suplente. No obstante, en las dos últimas legislaturas la condición de suplente recayó en la persona titular de la Dirección General de Asuntos Europeos.

Entre los dictámenes preceptivos que debe emitir el CdR se encuentran los relativos a:

- Política de Educación, Formación Profesional y Juventud.
- Medidas de fomento en materia de Cultura.

- Medidas de fomento en materia de Salud.
- Redes transeuropeas.
- Acciones específicas en materia de cohesión económica y social.
- Funciones, objetivos y organización de los Fondos estructurales.
- Decisiones sobre el Fondo de Cohesión.
- Decisiones de aplicación del FEDER, FEOGA, FSE e IFOP.

Puede, igualmente, emitir dictámenes facultativos en cualquier otro caso que la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo lo estimen oportuno y, en particular, los que afecten a la cooperación transfronteriza, o cuando el Comité estime que hay intereses regionales específicos en juego. Del mismo modo, el Comité puede emitir dictámenes de iniciativa cuando lo considere conveniente.

Desde la creación del Comité, los representantes del Principado de Asturias han participado asiduamente tanto en los trabajos de las sesiones plenarias como en los de las Comisiones de las que ha sido o es miembro. Así, en los primeros años de andadura del CdR, los representantes de nuestra Comunidad Autónoma participaron en los trabajos de las Comisiones de "*Ordenación del Espacio, Agricultura, Caza, Pesca, Bosque, Mar y Montaña*" y en la de "*Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Energía*", participando en la elaboración de los dictámenes, entre otros, sobre la "Gestión integrada de las zonas costeras", el "Programa integrado a favor de las PYMES y el artesanado", "El libro Blanco sobre la política social europea", "Las nuevas programaciones regionales en virtud de los objetivos nº 1 y 2 de la política estructural comunitaria", "El futuro de las Iniciativas Comunitarias al amparo de los Fondos estructurales" o el dictamen relativo a la "propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Fondo de Cohesión".

Asimismo, en estos primeros años, se hicieron diferentes aportaciones a los trabajos de la "*Comisión Especial para Asuntos Institucionales*", encargada de elaborar la contribución del Comité a la Conferencia Intergubernamental de 1996, en cada uno de los tres ámbitos definidos por el propio CdR: mejorar su papel institucional, ampliar sus competencias en el propio Tratado y formular propuestas concretas para realizar cambios de tipo político en el Tratado.

Posteriormente, se ha venido trabajando en las Comisiones de "*Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca*", la de "*Transportes, Redes Transeuropeas y Sociedad de la Información*", la de "*Política de Cohesión Territorial (COTER)*" y la de "*Cultura y Educación (EDUC)*".

En el marco de cada una de esas Comisiones así como en las sesiones plenarias, cabe señalar, a título de ejemplo, la participación del Principado en la elaboración de los siguientes dictámenes:

En el marco de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, se participó en la elaboración de los dictámenes relativos al "*Libro Verde de la futura política pesquera común*" y al de "*Instalación de Jóvenes agricultores*" Así mismo, se formó parte del Grupo de trabajo encargado de elaborar un dictamen de iniciativa propia sobre "*Seguridad alimentaria*" y el relativo a "*El impacto regional de la política agrícola y rural europea*", cuyo objetivo fundamental era efectuar una evaluación de la política agrícola común con vistas a intervenir en el diseño futuro de esta política.

En la Comisión encargada de los Transportes, Redes Transeuropeas y Sociedad de la Información, fue particularmente destacada la participación del Principado en los dictámenes relativos al "*Refuerzo de la calidad de los servicios en los puertos de mar: una clave para el transporte europeo*", así como en el relativo a la propuesta de Directiva sobre "*El acceso al mercado de los servicios portuarios*" y en el del "*Libro Blanco sobre el futuro de la política de transporte*".

Asimismo, en el ámbito de esta misma Comisión, el representante del Principado fue ponente de los proyectos de dictámenes relativos a "*Seguridad de las redes de información. Propuestas para un enfoque político europeo*" y en el de "*eEurope 2002: Creación de un marco comunitario para la explotación de la información del sector público*". Del mismo modo, organizado por el Principado conjuntamente con esta Comisión del CdR, Oviedo fue la sede del Seminario sobre "*Nuevas tendencias de la Sociedad de la Información: el papel de las Administraciones Públicas*", los días 23 y 24 de octubre de 2001.

En los ámbitos de competencia de las Comisiones de "Política de Cohesión Territorial" (COTER) y de "Educación y Cultura" (EDUC), la participación de los representantes del Principado de Asturias en sus trabajos ha sido igualmente intensa. Se ha venido participando en los todos asuntos relacionados con la política de cohesión económica y social tratados por el Comité: Tercer Informe sobre la Cohesión, Propuestas de Reglamento de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013, las

nuevas orientaciones estratégicas comunitarias para la política de cohesión, el crecimiento y el empleo, el marco de cooperación para el futuro del turismo europeo o la evaluación comparativa de los sistemas de educación y formación en Europa.

Cabe destacar, igualmente, la celebración en Gijón, el 14 de junio de 2002, de la reunión de la 63ª Mesa extraordinaria del Comité de las Regiones, cuyo punto fundamental en el Orden del día fue la contribución del CdR a los trabajos de la Convención que elaboraría la propuesta de Tratado constitucional para la UE, y el Seminario sobre "*Ayudas Estatales con finalidad regional y cohesión territorial: El futuro después de 2006*", organizado conjuntamente por el Principado, el CdR y la CRPM, celebrado en Oviedo el 18 de abril de 2005. En el transcurso del mismo, el Presidente del Principado expuso las líneas generales del proyecto de Dictamen sobre "*El nuevo régimen de ayudas estatales con finalidad regional*", proyecto que sería aprobado por el Pleno del Comité de julio de 2005.

Desde el inicio del 4º mandato del Comité, el pasado día 16 de febrero, el Presidente del Principado, Don Vicente Alvarez Areces, además de mantener su cargo como miembro de la Mesa del mismo, asume, por un período de dos años, la presidencia de la Delegación española en el CdR. Del mismo modo, el Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, es elegido como miembro suplente de la Mesa del Comité.

II. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO REGIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Desde 1985 el Principado de Asturias se ha ido integrando en las diferentes Asociaciones de regiones que existían en Europa y en las que se han creado a partir de ese año, en algunas de las cuales, como es el caso de EUR-ACOM o de la Comisión Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (C. R. P. M.), ha sido una de las regiones promotoras y fundadoras. La defensa de intereses comunes y la participación conjunta en programas y proyectos de cooperación interregional son los objetivos fundamentales de estas organizaciones. Nos referimos precisamente a estas Asociaciones en cuanto que la referencia fundamental de todas ellas ha sido la Unión Europea, tanto para promover e impulsar la participación de las regiones en el proceso de toma de decisiones comunitario como para la definición y ejecución de las políticas comunitarias, desde la óptica de la subsidiariedad.

En determinadas circunstancias, grupos de regiones se han asociado coyunturalmente para defender intereses comunes que les afectaban de forma particular. Es el caso, por ejemplo, de las llamadas regiones afectadas por el "efecto estadístico", con una incidencia de especial importancia para nuestra Comunidad Autónoma en el marco de la política de desarrollo territorial comunitario.

En efecto, la adhesión de diez nuevos Estados miembros a la Unión Europea al comienzo del 2004 provocó que el Producto Interior Bruto (PIB) *per cápita* de las regiones de la Europa de los quince aumentara artificialmente en un 12,5%, como consecuencia del bajo nivel de renta de los nuevos Estados miembros. Este aumento del PIB supondría que regiones como Asturias y Murcia, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por citar sólo el caso español, no pudieran beneficiarse de las ayudas estructurales de la UE en el ámbito del nuevo objetivo "Convergencia" para el periodo de programación 2007-2013, a pesar de que su nivel de desarrollo se situara por debajo del 75% de la media del PIB de la UE de los quince.

Por iniciativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, las regiones europeas afectadas por el llamado "efecto estadístico"[135] se reunieron en Oviedo en marzo de 2004, para que su situación fuera tomada

135 - Las regiones europeas afectadas por el "efecto estadístico" en la EU 15 son: España: Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla; Portugal: Algarve; Italia: Basilicata; Grecia: Atica; Alemania: Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sacasen-Anhalt, Thüringen; Finlandia: East Finland; Reino Unido: Gales, Yorkshire-Humberside, Merseyside, Highlands; Bélgica: Wallonie; Austria: Burgerland.

en consideración tanto por las autoridades comunitarias, como por las de sus respectivos Estados miembros. En la llamada "Declaración de Oviedo", reconociéndose que la solidaridad comunitaria como principio básico de la política de cohesión debía centrarse en los nuevos Estados miembros, se formulaban dos peticiones fundamentales: la primera, que las llamadas regiones del "efecto estadístico" deberían seguir beneficiándose de las ayudas estructurales durante el periodo de programación 2007-2013, aunque fuera de forma decreciente a lo largo del periodo; la segunda, que estas mismas regiones deberían ser incluidas entre las regiones beneficiarias de los topes más elevados en el marco de las ayudas de estado[136].

Estas reivindicaciones fueron, en buena medida, tenidas en cuenta por las diferentes instituciones comunitarias cuando se han ido aprobando las normas comunitarias para el próximo periodo de programación, poniendo así de relieve la importancia de la cooperación entre regiones europeas para la defensa de intereses comunes en el marco de la Unión Europea.

Aparte de estas asociaciones coyunturales, que hemos citado a título de ejemplo, en este capítulo abordaremos, en primer lugar, las diferentes Asociaciones de Regiones de las que forma o ha formado parte el Principado, a alguno de los Grupos de trabajo más significativos de las mismas en los que ha participado o participa esta Comunidad Autónoma, así como a los proyectos de cooperación interregional más significativos en los que, en el marco de estas Asociaciones de Regiones, ha participado el Principado de Asturias. Posteriormente nos referiremos a otros proyectos igualmente de cooperación interregional en los que nuestra Comunidad Autónoma ha sido uno de los socios de los mismos.

136 - Artículo 87.3 a), del Tratado CE.

1. LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL MOVIMIENTO REGIONALISTA EUROPEO Y EN LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL

1.1. La Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)

En 1985 se creó en Estrasburgo el Consejo de las Regiones de Europa así como su socio científico, el Centro Europeo de Desarrollo Regional (CEDRE). La asamblea constitutiva tuvo lugar en Lovaina la Nueva el 15 de junio de 1985 y en Estrasburgo los días 25 y 26 de noviembre del mismo año, siendo el Principado de Asturias miembro fundador de las mismas. En 1987, se reunió en Bruselas la II Asamblea General del Consejo de las Regiones de Europa, donde se decidió el cambio de denominación de la Asociación, pasándose a llamar desde entonces Asamblea de las Regiones de Europa.

Desde sus orígenes, la misión principal de la ARE ha sido que se reconociera el lugar y el papel de las regiones en la construcción de una Europa democrática y próxima de los ciudadanos. En consecuencia, ya desde sus primeros años de existencia, la ARE se propuso, ante todo, institucionalizar la participación de las regiones tanto en los procesos de toma de decisiones comunitarios como en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas comunitarias que, como hemos comentado, se concretaría en la creación de un Comité de las Regiones que se conformaría como una institución más de la Unión. En esa línea de actuación, los objetivos que persigue son:

- promover el concepto de democracia regional en Europa y el papel de las regiones en los procesos políticos;
- promover y apoyar los intereses de los gobiernos regionales, participando como socio reconocido, en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional, europeo e internacional;
- apoyar a las regiones en sus proyectos en común para maximizar el desarrollo y la puesta en práctica de las políticas regionales;
- promover la diversidad en Europa;
- desarrollar la capacidad de las regiones para acercar a los ciudadanos Europa.

Tres son, en resumen, las convicciones y los valores que impregnan todas las actuaciones de la ARE: las regiones son los pilares de la democracia en Europa; las regiones son actores de la construcción europea; y la cooperación

interregional es uno de los motores de la integración europea.

Para llevar a cabo sus actividades, la ARE se estructura en una Asamblea General, que se reúne generalmente una vez al año, el Comité permanente que es el órgano de administración de la ARE, el Buró y el Secretariado General que dirige los servicios de la Asociación. La ARE realizaba sus actividades, al menos durante los años en los que el Principado de Asturias era un miembro activo de la Asociación, a través de cuatro Comisiones y de diferentes Grupos de Trabajo:

Comisión 1: Cuestiones institucionales y de fondo con el objeto de promover el regionalismo en Europa.

Comisión 2: Asuntos de la Comunidad Europea.

Comisión 3: Asuntos del Consejo de Europa.

Comisión 4: Cooperación con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), así como con las regiones de Europa Central y Oriental y las regiones no europeas.

En estas cuatro Comisiones así como en los Grupos de Trabajo relativos al Mundo Rural y Agricultura de Montaña; Estrategia Global de Desarrollo Regional; Solidaridad Regiones de Europa Tercer Mundo; y Promoción de las Culturas Regionales, ha participado activamente el Principado de Asturias hasta el inicio de la 5ª Legislatura, 1999-2003, ya que, aunque formalmente seguía siendo una de las regiones miembros de la Asociación, no volvió a participar en actividad alguna de la misma.

Como actuaciones más significativas de la participación del Principado en actuaciones tanto en las Comisiones como en los Grupos de Trabajo de la ARE, recogemos las siguientes:

- Elaboración de la "*Declaración sobre el Regionalismo en Europa*", dentro del Grupo de trabajo creado al efecto en el marco de la Comisión 1, que fue aprobada por la Asamblea General en Basilea, el 4 de diciembre de 1996.

- La participación como miembro de pleno derecho en el *"Comité ad hoc"* encargado de la creación del Comité de las Regiones, presidido por el Sr. Jacques Blanc Presidente de la Sección Regional del Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales, participando en la elaboración de la propuesta sometida

a la Asamblea General de la ARE en Santiago de Compostela, el 3 de julio de 1992.

- Elaboración del Dossier informativo *"Régions et développement de l'emploi"*, en colaboración, entre otras, con las Comunidades Autónomas de Cataluña, Murcia y Galicia, y con las regiones de Toscana, Lombardía, Salzburg, Limousin y Thüringen, presentado en Diciembre de 1997.

- Elaboración del documento "*Environmental Quality Standards in Tourism*", con aportaciones de regiones de Reino Unido, Irlanda, Suecia, España, Grecia, Noruega y Rumania y presentado en Lillehammer, en octubre de 1998.

- En el marco del Grupo de trabajo "*Estrategia Global de Desarrollo Regional*" se participó en todo el proceso de reflexión y propuestas en relación con la Agenda 2000 y la ampliación y, de manera especial, en lo relacionado con la reforma de la política de cohesión y las intervenciones de los Fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros comunitarios.

- Edición de la "*Guía de Itinerarios Culturales de las Regiones de Europa*" promovida simultáneamente por la ARE y por la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), y en la que participaron unas 40 regiones de Europa, que coordinó la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

- En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el Principado participó, junto con los Gobiernos de la República y Cantón de Jura y del País Vasco, en un proyecto de cooperación al desarrollo en la Comarca de Mefou, en Camerún, en el ámbito de la atención primaria sanitaria, desarrollado en el marco del Grupo de trabajo "Solidaridad Regiones de Europa Tercer Mundo".

- Participación en el Programa *Eurodysea*, creado por la ARE en 1985 con objeto de mejorar las oportunidades de los jóvenes europeos de integrarse en el mercado de trabajo ofreciéndoles la oportunidad de adquirir una experiencia profesional en el extranjero. Eurodysea es un programa abierto a todos los jóvenes sin más condición que ser demandante de empleo y tener entre 18 y 30 años de edad.

Aunque se había venido participando en reuniones de contacto en el Foro de las Regiones Activas en el marco del Programa, la integración del Principado en Eurodysea no se produce hasta el 23 de agosto de 1996, con la firma por la Consejería de Cultura de la carta de adhesión. Desde 1996 hasta 1999, se han realizado intercambios en el marco de este programa con las regiones francesas de Franche-Conté, Poitou-Charentes, Limousin, Champagne-Ardennes, Rhônes Alpes y Bourgogne; la región belga de Wallonie; las regiones suizas de Jura y Ticino; y la región portuguesa de Açores.

En relación con el **Centro Europeo de Desarrollo Regional (CEDRE)**, socio científico de la ARE, del que, como ya se ha indicado, el Principado de Asturias fue una de las regiones fundadoras, sus objetivos fundamentales son:

- Aconsejar a las instancias permanentes en materia de desarrollo regional de las Comunidades Europeas, del Consejo de Europa, así como de sus Estados miembros.

- Iniciar ante todas las administraciones, organismos,... todas las acciones y cooperaciones susceptibles de promover el desarrollo regional.

- Ejecutar y hacer ejecutar todos los estudios e investigaciones técnicas, económicas y financieras que se relacionen con el desarrollo regional en Europa.

- Tomar todas las iniciativas o promover todas las medidas de ayuda destinadas al desarrollo regional en Europa, muy especialmente en lo que respecta al campo de la investigación, de asistencia técnica, de la formación y de la enseñanza.

- Proceder a todas las operaciones y medidas que tienden a favorecer directa o indirectamente los objetivos anteriormente mencionados[137].

La estructura de la Asociación se articulaba en torno a una Asamblea General, un Comité de Dirección y un Director, y sus ámbitos de actuación, hasta su disolución al final de la década de los noventa del siglo pasado, han sido los siguientes:

137 - Artículo 4 de los Estatutos del CEDRE.

a) *Transportes interregionales*: Trabajándose fundamentalmente en los ámbitos relacionados con el tren de alta velocidad, los transportes combinados, los transportes aéreos interregionales y los nuevos servicios de transportes.

b) *Promoción y europeización de las* economías *regionales*, con especial incidencia en los asuntos relacionados con las Agencias de desarrollo, la cooperación Este-Oeste, la transferencia de tecnologías y las inversiones extranjeras.

c) Ordenación espacial regional, sobre todo en lo relacionado con la planificación, la agricultura y el medio ambiente, los programas a desarrollar en el marco de Europa 2000 y el turismo.

d) Formación profesional, en particular en los aspectos relacionados con la *Interface* CEE-Estados-Regiones.

La participación del Principado se centró en los Grupos de trabajo relativos a Agricultura y Medio Ambiente, Transportes Interregionales, Turismo y Formación Profesional, colaborando activamente en los diferentes Informes que se realizaron al respecto, así como en diferentes proyectos de cooperación interregional cofinanciados por el FEDER.

En efecto, como el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), preveía "fomentar el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de desarrollo entre regiones de la Comunidad", y el Parlamento Europeo aprobó, en 1989, "cubrir la financiación de las operaciones que generan cooperación, información y relaciones entre las regiones de la Comunidad Europea", la Comisión Europea elaboró un programa de acciones con vistas a apoyar el intercambio de experiencias y fomentar la cooperación regional y local con relación al desarrollo.

En el marco de este Programa de Intercambio de Experiencias –*RECITE*, el Principado participó en diferentes proyectos presentados a la Comisión Europea por la ARE y gestionados, en general, por el CEDRE, entre otros:

- "*Progetto di intercambio di know-how in materia di Pubblica Amministrazione*", liderado por la región italiana de Piamonte, y en el que participaron, además de Asturias, la región francesa de Rhône-Alpes y la región italiana de Molise.

- "*Aeropuertos Regionales*", cuyo objetivo era el intercambio

de “savoir-faire” y de experiencias en materia de desarrollo de aeropuertos regionales, así como el estudio y lanzamiento de nuevas conexiones. El proyecto lo coordinó la región Valona y participaron como socios Asturias, Sicilia, Cerdeña y Creta.

- Con diferentes regiones de tradición industrial –RETI- se participó en el proyecto “*Ordenación del Territorio y Medio Ambiente*”

- Con la región Nord-Pas de Calais se realizó un proyecto en el ámbito temático de la protección del consumidor relativo a “*Las etiquetas de calidad de productos regionales*”. Con la misma región, se organizaron en Oviedo, entre los días 14 y 16 de octubre de 1992, *“Las Jornadas Europeas sobre Calidad*”, con el fin de efectuar un análisis y facilitar la expansión de los diferentes métodos de control de la calidad de manera integral en las diferentes regiones de Europa.

- Con las regiones Centro-Portugal y Nord-Pas de Calais se desarrolló el proyecto “*CLIPS-calidad*”, centrado en la certificación de la calidad como factor de desarrollo del sector alimentario.

- Teniendo como socios a las regiones de Martinica, Nord-Pas de Calais y Piamonte, se realizaron los proyectos “”*Labeles de calidad*” y “*Jornadas de Calidad*”, cuyo objetivo fundamental era promover distintivos apropiados para los productos de calidad.

- La Agencia Regional de Consumo participó en un proyecto sobre *“La protección de los intereses económicos de los consumidores*” con las regiones francesas de Martinica, Centro Portugal y Nord-Pas de Calais.

- A través de la Fundación para la Investigación Científica y Técnica (FICYT) el Principado participó también en tres proyectos cofinanciados por RECITE:
“Red Britt Atlantic”, para la transferencia de tecnología en el campo de la biotecnología, teniendo como objetivos la realización de trabajos conjuntos de investigación, y promover la transferencia de tecnología y resultados de la investigación. Participaron como socios las regiones de Oporto, Lisboa, Limousin, Pays de la Loire, Bretaña, Irlanda, Escocia y Exeter.

"Biotecnología, Materiales Avanzados y Producción Robótica". Proyecto de intercambio de experiencias con todas las regiones de la Asociación del Sur de Europa Atlántica (SEA).
"TECH'ATLANTIC", cuyo objetivo es el de mejorar la capacidad de investigación y enseñanza entre las regiones del Arco Atlántico, favoreciendo la movilidad del personal docente e investigador en las áreas de Materiales, Biología del Mundo Marino, etc. Socios participantes: Bretaña, Pays de la Loire, Cantabria, Galicia y País Vasco.

- "*El sistema del Camino de Santiago y Roma*", cuyo objetivo era reforzar la cohesión económica y social a través de la creación de redes de cooperación de inspiración cultural entre regiones de la Unión Europea, así como valorizar el patrimonio cultural regional en una prospectiva de cooperación interregional de desarrollo económico. En el proyecto participaron, además de Asturias, las regiones italianas de Toscana, Valle de Aosta, Piamonte, Emilia Romagna y Veneto, las francesas de Alsacia, Loira y Midi Pírense y las Comunidades Autónomas españolas de Galicia, Cantabria, Castilla-León, Navarra y la Rioja.

Dentro de este mismo programa de intercambio de experiencias y, en el marco del Protocolo de cooperación entre el Principado de Asturias y la región de Bretaña, firmado en Lorient el 18 de abril de 1991 por los Presidente de ambas regiones, se cofinanciaron cuatro proyectos específicos: la promoción de la línea marítima Lorient-Gijón, intercambios de experiencias en el ámbito de la ingeniería financiera, intercambio de experiencias en materia de formación en nuevas tecnologías, y otro intercambio de experiencias sobre calidad industrial.

1.2. Conferencia de las Regiones Periférico Marítimas (CRPM)

En junio de 1973, la intención primordial del Comité de Estudio y de Enlace de los Intereses Bretones (CELIB) al invitar a Saint-Malo (Francia) a una treintena de regiones europeas, fue que había que evitar que todas las "Bretañas de Europa" se vieran marginadas respecto a las regiones centrales de la Comunidad Económica Europea. Los bretones pretendían, tras haber luchado durante más de veinte años para corregir la situación de marginalidad de su región en el plano nacional, que no se cuestionaran los logros que habían obtenido en la dimensión europea, y que para ello había que aliarse con las regiones que tenían los mismos intereses que defender.

En un primer momento los dirigentes del CELIB habían pensado invitar a Saint-Malo a todas las regiones periféricas de la Comunidad, formada por nueve países desde el 1 de enero de 1973, pero, finalmente, decidieron limitar las invitaciones únicamente a las regiones marítimas. Esta decisión estuvo motivada por varias circunstancias: la CEE esencialmente continental se volvía marítima con la entrada de tres nuevos países, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; y Bretaña quedaba ya menos aislada en el litoral cantábrico, en espera de la adhesiones de España y Portugal, aunque se invitó como "observadores" a Galicia y a la región Norte Portugal, debido a los vínculos celtas de estas dos regiones. Nace así, a mediados de 1973, la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad Europea, aprobándose su Carta organizativa en Escocia en 1977. Asturias participa en la CRPM por decisión del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 1985.

Los tres temas propuestos en la Primera Conferencia fueron lógicamente los transportes (el hándicap periférico), la industrialización (cómo impulsar el desarrollo industrial de estas regiones) y el mar (cómo explotarlo mejor como factor de desarrollo).

La C.R.P.M. se estructura en los siguientes órganos:

a) La Asamblea General, que se reúne anualmente y que fijas las orientaciones y el presupuesto de la Conferencia.

b) El Buró político, que se reúne dos veces al año y propone las orientaciones políticas de la Conferencia y pone en práctica las decisiones de la Asamblea General.

c) Las Comisiones geográficas, que tienen como objetivo facilitar la descentralización y profundizar en las diferentes acciones a lo largo de las cuencas marítimas. Actualmente, estas Comisiones son seis:

- Arco Atlántico.
- Balcanes/ Mar Negro.
- Comisión de las Islas.
- Intermediterránea.
- Mar Báltico.

- Mar del Norte.

d) El Secretario General que garantiza el funcionamiento de la Conferencia. Cuenta con una antena en Bruselas y una Célula de prospectiva en Oporto.

e) El Consejo de Administración que es el soporte jurídico y administrativo de la Asociación.

Durante los primeros años, la estrategia de la Conferencia se centra en la dimensión marítima, defendiendo una visión europea ambiciosa basada en una aproximación integral. La lucha contra las mareas negras en primer lugar, y la elaboración de la Carta Europea del Litoral más tarde, son las dos actividades más relevantes de esta primera etapa.

La primera Asamblea General en la que el Principado participa como miembro de pleno derecho se celebró en Estrasburgo, los días 22 y 23 de noviembre de 1985, participando en la elaboración de las Resoluciones aprobadas por la Asamblea referidas a los Programas Integrados Mediterráneos (PIM), a la Cultura y al Turismo, a los Transportes y a la Pesca costera y la Acuicultura.

La aprobación del Acta Unica Europea (1986) y el proyecto de reforma de los Fondos estructurales hacen posible que la CRPM se imponga como actor en la escena política. Así, en la Asamblea General de la Conferencia, celebrada en Kilarney (República de Irlanda), entre los días 28 y 30 de octubre de 1986, se presenta un primer estudio llevado a cabo en Escocia sobre la política de desarrollo regional que, posteriormente, se completará con un Informe más ambicioso, elaborado con el apoyo del CEDRE, que se presentó en la Conferencia plenaria celebrada en Saint-Denis (Francia), en octubre de 1987, y cuyas conclusiones y propuestas se remitieron al Presidente de la Comisión, Jacques Delors.

En la mencionada Conferencia de Kilarney, el Principado de Asturias participó en la ponencia y posterior debate sobre “La CRPM frente a los problemas del empleo: la necesidad de una descentralización de las políticas europeas y de un papel más importante de las regiones”, así como en el seguimiento de los trabajos de la Conferencia en relación con los Transportes, el Litoral y el Turismo cultural.

En la XVII Conferencia plenaria, celebrada los días 13 y 14 de octubre de 1989 en Faro-Vilamoura (Algarbe-Portugal), a propuesta de las regiones francesas de Bretaña y de los Países del Loira, se adoptó la decisión, por

unanimidad de todas las regiones de la Fachada Atlántica de Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal, de crear la Comisión "Arco Atlántico", que se constituirá, como luego veremos, en Rennes en abril de 1990. En la misma Conferencia, los representantes del Principado de Asturias participaron en las ponencias presentadas por País de Gales y Central Scotland sobre la reforma de los Fondos estructurales, que era en esos momentos uno de los temas esenciales de la CRPM. Del mismo modo, se participó en el Grupo de trabajo, liderado por la región portuguesa del Algarbe, y en la elaboración de un posterior informe sobre "Efectos del mercado único europeo en las regiones periféricas marítimas".

En la siguiente Asamblea General, celebrada en La Baule (Países del Loira – Francia) los días 4 y 5 de octubre de 1990, se definieron los cinco ejes prioritarios de la CRPM para el período 1991-1992:

1. *Por una política de desconcentración de los transportes en el espacio europeo*, liderado por la Comunidad Autónoma de Cataluña, y de cuyo Grupo de trabajo formó parte el Principado de Asturias.

2. *Por una nueva política del litoral*, animado por la región francesa de Poitou-Charentes, en el que se propusieron actuaciones relacionadas con la Carta Europea del Litoral de la CRPM, la contaminación por hidrocarburos y los problemas relacionados con la pesca.

3. *Por una revalorización del medio rural*, animado conjuntamente por las regiones de Devon (Reino Unido) y Bretaña (Francia), y en cuyo Grupo de trabajo se integró el Principado de Asturias. El centro de interés de este eje de acción fue la evolución de la PAC y la transformación del medio rural. Se reflexionó igualmente sobre la carencia de medios financieros con los que se había dotado el objetivo 5 b) de la política estructural comunitaria.

4. *Por una política de calidad de vida y del medio ambiente*, liderado por la región británica de País de Gales y la Comunidad Autónoma española de Andalucía. Los temas centrales de trabajo en este eje fueron los relacionados con la calidad de vida como baza de las regiones periférico marítimas para la localización de futuras actividades, un nuevo modelo de urbanización, el equilibrio urbano-rural, la proximidad del litoral y la valorización cultural.

5. *Por una aceleración de las transferencias de tecnologías*, liderado por la región francesa de Bretaña y la portuguesa de Lisboa. Su actividad se centró en la presentación de las primeras experiencias desarrolladas en el marco de los proyectos cofinanciados por la Comunidad Europea.

La CRPM ha seguido siempre con especial interés los temas prioritarios y de actualidad de la Unión Europea, especialmente, aquellos que afectan a sus regiones miembros. Así pues, tras dotarse de unos ejes prioritarios para los años 1991 y 1992, en octubre de 1994, en la Asamblea celebrada en Cerdeña (Italia), se abordan otros asuntos que estaban en la agenda de la UE y cuya incidencia en estas regiones era importante: la Agenda 2000, las nuevas Iniciativas Comunitarias y su incidencia en las grandes zonas periféricas y marítimas, la ampliación de la Unión Europea y el reforzamiento de la seguridad marítima. Las aportaciones de las diferentes regiones a cada uno de esos temas se traducen en propuestas concretas que se trasladan a la Comisión Europea para su toma en consideración a la hora de elaborar las políticas comunitarias al respecto.

En el mismo año de 1994, el Principado de Asturias participa en un proyecto de intercambio de experiencias patrocinado por la CRPM en colaboración con el European Centre for Tradicional and Regional Cultures (ECTRAC), "*MARITEC*" en el que se asocian diez regiones del objetivo 1 de Reino Unido, Irlanda, España, Portugal y Grecia, y dos regiones del objetivo 5 b) del Reino Unido, cuyos objetivos eran fomentar la transferencia de proyectos basados en tecnología marítima entre regiones, producir nuevas ideas para el uso de la tecnología marítima en las regiones costeras, investigar nuevas formas de usar las nuevas tecnologías para proteger el medio ambiente marino, e introducir nuevas tecnologías en proyectos de turismo marítimo como un método para garantizar su sostenibilidad.

Años más tarde, en noviembre de 1998, los representantes del Principado en la Asamblea General celebrada en Funchal (Madeira), participaron en la elaboración de las Resoluciones relativas a las "*Cuotas lecheras*" y a la "*Reforma de los Fondos estructurales*", así como a la relacionada con los "*Transportes aéreos de tercer nivel*", aprobadas por la Asamblea. En 1999, el Principado se integró en el Grupo de trabajo intercomisiones "*América Latina*".

En este sentido, en una reunión celebrada en Santiago de Compostela, el 17 de febrero de 1999, el Principado, junto con otras cinco Comunidades Autónomas (Canarias, Galicia, Castilla-León, Murcia y Navarra), la región francesa de Países del Loira y las regiones italianas de Sicilia y Toscana,

adoptaron la propuesta de un programa de trabajo presentado por Galicia, "*CRPM/ CODESUL-CRECENEA*", para la firma de un Convenio de cooperación que se firmó en la reunión conjunta entre los Presidentes de las regiones de la CRPM y los Gobernadores de CODESUL-CRECENEA, en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul (Brasil) el día 14 de mayo de 1999. Los ámbitos de cooperación consensuados se refieren a: la cooperación en el ámbito comercial, la cooperación en el ámbito de la Formación, Universidad y Cultura, y la colaboración en materia de cooperación transfronteriza e interregional.

Al final de los años noventa, y como manifestación de la preocupación de las regiones periférico marítimas de la Unión Europea por la reforma de los Fondos estructurales para el período de programación 2000-2006, la CRPM organizó en Lisboa, entre los días 17 y 19 de junio de 1998, el Seminario *"¿Hacia una política de desarrollo del territorio europeo?",* participando los representantes del Principado de Asturias en la ponencia relativas a "*Logros y limitaciones de una política de desarrollo territorial a escala europea*", y en particular en los aspectos ligados a las limitaciones de la Agenda 2000 sobre los nuevos programas de Iniciativas Comunitarias y sobre los nuevos criterios de asignación de los Fondos estructurales.

Igualmente, se participó en el debate abierto en relación con el futuro de las políticas territoriales en Europa y, en especial, en lo que se refería a las cuestiones de especial importancia para el desarrollo de las periferias marítimas, así como en la elaboración de la posición común que se adoptó abogando por la Europa política en detrimento de la Europa financiera, e insistiendo en la necesidad de reforzar la capacidad de gobierno de la Europa comunitaria.

Desde el inicio del presente siglo, y siempre teniendo presente las prioridades políticas de la Unión Europea así como sus políticas sectoriales con mayor impacto en las regiones periférico marítimas, la CRPM determinó seis ámbitos prioritarios de actividades:

1. Cohesión territorial. Promover un desarrollo más equilibrado del territorio europeo El objetivo de la cohesión territorial es establecer un principio de equilibrio entre los ciudadanos europeos, independientemente del lugar en el que vivan. Su ambición es la de ofrecer condiciones de acceso a los servicios de interés general de forma equitativa y de garantizar condiciones óptimas de competencia a todos los territorios.

En este sentido, las regiones miembros de la CRPM se han movilizado para que realmente exista una política regional europea basada en la cohesión económica y social, por una cooperación territorial que favorezca

la competitividad de las cuencas marítimas, y por normas de competencias guiadas por el principio de cohesión[138].

2. Competitividad equilibrada. Aumento de la competitividad regional mediante intervenciones de las políticas con un fuerte impacto territorial: los transportes, la investigación y el desarrollo, el empleo, la formación, la política de la competencia. La CRPM aborda estas políticas con un doble objetivo: ponerlas al servicio de un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, y asociar las regiones a la elaboración de estas políticas de manera que las particularidades propias de cada territorio puedan tenerse en cuenta. Las acciones que se llevan a cabo en estos ámbitos se realizan, como luego veremos, por diferentes Grupos de trabajo[139].

3. Gobernanza. En este campo la CRPM pretende reforzar la participación de las regiones en la definición y en la aplicación de las políticas comunitarias. En efecto, dos acontecimientos relevantes están en el origen del interés de la CRPM y de sus regiones miembros sobre el papel de las regiones en Europa: la redacción del Libro Blanco sobre la Gobernanza, adoptado en 2001, y la redacción del proyecto de Tratado constitucional. Así, las propuestas de la Conferencia, en colaboración con otras Asociaciones y Plataformas de regiones, permitieron introducir importantes avances en el Tratado en relación con el lugar y el papel de las regiones en Europa:

138 - En el ámbito de la cohesión económica y social, cabe destacar algunas publicaciones e Informes elaborados por la CRPM con aportaciones de las regiones miembros, por su Presidente o por su Buró Político: en enero de 2000: "Por una nueva política regional en 2007"; en julio de 2001: "Para una nueva política regional: 10 cuestiones para el debate"; en diciembre de 2002: "Un año antes de la publicación de Tercer Informe sobre la cohesión: reflexiones de la CRPM sobre el futuro de la política regional post 2006"; mayo de 2003: La política regional: aceptar el desafío de la competitividad"; en octubre de 2003: Carta abierta del Sr. Claudio Martini, Presidente de la CRPM al Presidente de la Comisión Europea, Sr. Romano Prodi, sobre la futura política regional; en febrero de 2004: "Cuatro años de trabajo al servicio de la cohesión económica, social y territorial"; en abril de 2004: Declaración del Buró Político como consecuencia de la publicación de las perspectivas financieras 2007-2013 y a las conclusiones del Tercer Informe sobre la cohesión; en julio de 2004: reacción de la CRPM a la propuestas de la Comisión Europea del Reglamento marco y de los Reglamentos de los Fondos estructurales; en enero de 2005: "Lo que está en juego para las regiones en la negociación de las perspectivas financieras para el período 2007-2013"; en junio de 2005: Dictamen del Buró Político: "Más que nuca, la cohesión".

139 - Algunos de los documentos elaborados por la CRPM o por alguno de sus órganos de dirección en esos ámbitos, en los que de alguna manera ha participado el Principado de Asturias, son: julio de 2002: "Note du Secrétariat General: Action de la CRPM dans le domaine des transports"; julio de 2003: Declaración del Buró Político: "Un réseau Transeuropeen de Transports au service de l'accessibilité et de la cohesión territoriale"; mayo de 2004: Nota técnica del Secretariado General de la CRPM: Revisión du Réseau Transeuropéen de Transports. Bilan des avancées permises par la mobilisation de la CRPM"; septiembre de 2004: Nota técnica del Secretariado General de la CRPM: "Motorways of the Sea – Implementation". Réponse au document de consultation de la DG TREN du 30/7/2004; enero de 2006: Revisión à mi-parcours du Libre Blanc sur la politique européenne des transports – Réponse de la CRPM à la consultation publique organisée par la Comisión Européenne.

- El respeto de las identidades nacionales, regionales y locales.
- El principio de subsidiariedad como interrelación entre el nivel comunitario, nacional, regional y local.
- El principio de democracia de proximidad.
- La consulta de las autoridades regionales y locales por la Comisión Europea.
- La mención de la cohesión territorial en los objetivos y en las competencias compartidas de la Unión.

Aunque el futuro del Tratado constitucional es incierto, la CRPM y sus regiones miembros siguen actuando para que los avances conseguidos se respeten y puedan ponerse en práctica. Actualmente, se trabaja en dos ámbitos importantes: contribuir a la puesta en práctica de un "diálogo territorial" eficaz, y reforzar la noción del subsidiariedad, definiendo nuevas formas de partenariado entre la Unión, los Estados y las Regiones[140].

4. La Mar. En este ámbito de actividad, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas pretende valorizar y profundizar en la dimensión marítima de Europa y en la mar como factor de competitividad. Tres aspectos fundamentales definen la acción de la CRPM en relación con la mar: la contribución a una política europea de la mar, la seguridad marítima y la pesca.

En el primero de los aspectos, la CRPM participa, en efecto, en los trabajos de reflexión sobre la política marítima europea, y ha organizado para ello un partenariado de más de cincuenta colectividades territoriales y centros de investigación especializados en el proyecto "Europa del mar", que más adelante examinaremos con más detalle.

En el apartado de la seguridad marítima, la Conferencia actúa para que se ponga en práctica una verdadera política de prevención a nivel europeo y para que las regiones, hoy excluidas, puedan participar en su concepción y en

140 - Algunos de los documentos de la CRPM o de sus órganos de dirección en este campo son: septiembre de 2001: "Réactions sur le Libre Blanc de la Comisión Européenne "Gouvernance européenne"; mayo de 2003: Réaction au document de travail de la Commssion – "Dialogue permanent et systématique avec les associations de collectivités territoriales sur l'élaboration des politiques"; febrero de 2005: Discurso de Claudio Martíni, Presidente de la CRPM, con ocasión de la jornada de diálogo territorial con el Sr. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea.

su puesta en práctica. Las regiones marítimas son, sin embargo, las primeras en soportar las consecuencias de las catástrofes y las primeras solicitadas a poner remedio a las poluciones que contaminan a menudo sus costas.

Las prioridades de la CRPM son las siguientes:

- Representar a las regiones en los organismos internacionales existentes. Así ya ha obtenido el estatuto de miembro observador cerca del Fondo de Indemnización por los daños debidos a la Polución por los Hidrocarburos (FIPOL).

- Desarrollar la cooperación interregional en este ámbito a nivel de los grandes conjuntos marítimos.

- Asociar las regiones a las acciones de formación y de sensibilización preconizadas por la Comisión Europea y los Estados.

En relación con la pesca, la CRPM pretende favorecer una gestión concertada de la actividad pesquera, convencida de que la pesca, además de su importancia para la economía de las regiones marítimas, representa un elemento de identidad mayor, así como un importante factor de cohesión. Entre sus prioridades en este campo de actividad, cabe destacar:

- Mejorar el nivel de información de las regiones marítimas y promover el intercambio de experiencias entre regiones, profesionales del sector, científicos y los responsables de las políticas.

- Seguir las disposiciones normativas relativas a la Política Pesquera Común (PPC) y contribuir a la redacción de los Reglamentos de aplicación relativos al futuro fondo por la pesca.

- Organizar un partenariado entre las regiones marítimas y las instancias socioprofesionales, en particular a través de los Comités Consultivos de la Pesca[141].

141 - Entre las aportaciones de la CRPM al ámbito de actuación relacionado con la mar, se pueden destacar las siguientes: en mayo de 2004: "For a coherent sea policy in Europe – Proposal for a European Union green paper"; en julio de 2005: creación de la página Web "Europe de la mer"; en octubre de 2005: "Vers une politique maritime de l'Union: Contribution à l'élaboration du Libre Vert".

5. Desarrollo sostenible. Las regiones periférico marítimas gozan de una patrimonio cultural, a menudo, excepcional, y saben bien hasta que punto es difícil explotarlo al mismo tiempo que lo respetan. Quizás por ello estas regiones son más sensibles que otras a la noción de desarrollo sostenible.

Las actuaciones de la CRPM se orientan en cuatro direcciones:

- Promoción en todas las regiones miembros de los principios de la aproximación integrada y de la metodología de la Agenda 21.
- Fomento de la cooperación en este ámbito por medio de los intercambios de experiencias y de buenas prácticas.
- Representación de los intereses de las regiones miembros ante las instituciones nacionales, europeas e internacionales.
- Especial atención a dos ámbitos claves del desarrollo sostenible:
  - *la energía*. Las economías de energía, su mejor utilización y sobre todo el desarrollo de fuentes de energías alternativas, como instrumentos eficaces y creíbles del desarrollo sostenible.
  - *los aspectos agrícolas y rurales*. La agricultura y la silvicultura siguen siendo los principales usuarios de los suelos. Es, por tanto, indispensable estudiar estas actividades para caminar hacia el desarrollo sostenible del territorio comunitario[142].

6. Cooperación externa y vecindad. En una economía mundializada como la actual, no es posible limitar la reflexión a la escena europea sin tener en cuenta el resto del mundo. Por ello, las regiones europeas se presentan cada vez más frecuentemente en la escena internacional:

- para hacer fructíferos lazos históricos o para mantener relaciones de buena vecindad;

142 - Algunos de los pronunciamientos más relevantes de la CRPM en relación con el desarrollo sostenible son: marzo de 2002: "Positions des régions de la CRPM en matière de gouvernance environnementale"; el septiembre de 2002: "La CRPM y la política del Medio Ambiente"; en agosto de 2004: "Réponse de la CRPM à la consultation de la Comisión sur le réexamen de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable".

- para desarrollar estrategias internacionales;

- para tratar de encontrar soluciones a problemas globales cuyas consecuencias padecen.

La CRPM trabaja para que estas acciones regionales puedan inscribirse en instrumentos comunitarios adaptados siempre que ello sea posible, así como llevar a la escena internacional la voz de las regiones en sus ámbitos de competencias[143]. Las actividades de la CRPM, como las que acabamos de reseñar, se llevan a cabo mediante diferentes Grupos de trabajo en los que, con mayor o menor intensidad y dedicación, participa en Principado de Asturias a través de sus diferentes Departamentos sectoriales. Estos grupos de trabajo son:

a) Grupo Investigación

Coordinado por la región de Västra-Götaland y la Comunidad Autónoma de Valencia, este Grupo de trabajo tiene los siguientes ejes de trabajo prioritarios:

- El seguimiento de la preparación del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, con el objetivo de defender una dimensión de cohesión, un adecuado papel para las regiones, así como que se tomen en consideración eventuales propuestas de la CRPM, particularmente en el ámbito de la investigación marina.

- Trabajos de reflexión y de propuestas en colaboración con las Direcciones Generales de la Comisión Europea de Investigación, de Empresas y de Política Regional, sobre buenas prácticas en relación con la utilización por las regiones de los Fondos estructurales en materia de investigación y de innovación.
- La eventual participación de la CRPM en la iniciativa lanzada por la Comisión Europea “Regiones del conocimiento”.

- El seguimiento de los trabajos que realizan instituciones y organismos, la Comisión Europea y Eurostat entre otros, en el ámbito de los indicadores de investigación y de innovación, con el objetivo de conocer la evolución de la situación de las regiones europeas y,

143 - Las principales aportaciones de la CRPM en el ámbito de actuación de la cooperación externa y la vecindad son: julio 2003: “Dictamen del Buró político de la CRPM sobre las Comunicaciones de la Comisión “La Europa ampliada – Vecindad: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur” y “Poner las bases de un nuevo instrumento de vecindad”; en enero de 2005: “La CRPM et la nouvelle politique de voisinage de l’UE”; en noviembre de 2005: “Declaración de Barcelona”, coincidiendo con la celebración del décimo aniversario del proceso de Barcelona.

especialmente, las regiones miembros de la Asociación, en relación con esos indicadores.

- La posible participación en proyectos de investigación y de innovación en el marco de los programas de cooperación transnacionales y/o interregionales en los que participen las Comisiones geográficas o las regiones miembros de la CRPM.

En definitiva, los trabajos de este Grupo pretenden encontrar una respuesta adecuada a una cuestión Fundamental: ¿Qué es preciso hacer y cómo hacerlo para que la política de Investigación e Innovación tenga en cuenta las realidades soioecómicas y las necesidades de los diferentes territorios?

El Espacio europeo de la investigación debe, en efecto, territorializarse.

b) Grupo Energía

Coordinado por la Comunidad Autónoma de Navarra, el Grupo "Energía" organiza sus actividades en torno a los siguientes temas:

- Desarrollar una aproximación de conjunto de la cuestión energética, con especial atención a la balanza energética, así como a la utilización de energías de origen marino.

- ¿Cómo conciliar el desarrollo de las energías renovables con otros imperativos (económicos, sociales, medioambientales)?

- Reflexión sobre la naturaleza de las relaciones entre el lugar de producción y el lugar de consumo de la energía en el contexto de una economía de mercado y en el marco de la Unión Europea.

- A partir de la experiencia de las propias regiones, tratar de comprender mejor los centros de poder y de decisión en materia de energía.

- Sobre la necesidad de adaptar mejor la legislación y las políticas comunitarias al desarrollo del potencial de las regiones periféricas y marítimas en el ámbito de las energías renovables.

Se pretende, en definitiva, fomentar los intercambios de experiencias y de buenas prácticas entre las regiones y poner de relieve la manera en que las regiones periféricas y marítimas pueden y deben contribuir a lograr los objetivos de la UE en materia energética.

c) Grupo Transporte

Este Grupo de trabajo, coordinado por la región francesa de Midi-Pyrénées, parte, para la realización de sus trabajos, de que los territorios periféricos deben compensar la dificultad que para ellos supone el alejamiento de los centros de decisión, de producción y de consumo. La mejora de la accesibilidad es pues una de las prioridades de este Grupo.

Por ello, trabaja para que las políticas europeas de transporte tengan en cuenta la accesibilidad y no sólo la solución de los "cuellos de botella" del centro de Europa. Sus ejes de actuación prioritarios son tres:

- La Red Europea de Transporte (RTE-T) y en especial la financiación de las infraestructuras.

- El desarrollo del transporte marítimo, y en particular las autopistas del mar.

- El lugar de las regiones en el ámbito aéreo europeo.

d) Grupo Pesca

Coordinado por la región de Shetland, sus ejes prioritarios de actuación son los siguientes:

- El seguimiento de las disposiciones normativas relativas a la Política Común de la Pesca y, particularmente, la elaboración de informes y dictámenes sobre las propuestas de reglamento de aplicación sobre el futuro del Fondo para la pesca.

- Las modalidades de participación de las regiones en los Comités Consultivos de la Pesca, instaurados en el marco de la reforma de la Política Común de la Pesca y, más en general, la organización de un partenariado entre las regiones marítimas y las instancias políticas y socio-profesionales en el ámbito de la pesca.

- Acción de "lobbying" mediante la elaboración de posicionamientos y de propuestas de las regiones periféricas marítimas sobre las cuestiones relativas al sector de la pesca y su traslado a las instancias pertinentes de la UE y de los Estados miembros.

- Mejorar el nivel de información de las regiones marítimas y promover el intercambio de experiencias entre las regiones, los profesionales

del sector, los científicos, los expertos y los responsables de las tomas de decisiones.

e) Grupo Empleo-Formación

Coordinado por la región de Estocolmo y por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Grupo de trabajo parte de los objetivos definidos en la estrategia de Lisboa en estos campos y de los escasos resultados obtenidos. Por ello, trabaja con el convencimiento de que la asociación de las regiones a la estrategia de Lisboa es una condición sine qua non para conseguir sus objetivos. Sus trabajos se centran en los temas siguientes:

- El empleo –o la carencia de empleo- en sus aspectos cuantitativos y cualitativos como uno de los principales males de los que adolece la Unión Europea y una preocupación importante de los ciudadanos.

- La cualificación de la mano de obra como elemento clave para alcanzar los objetivos de Lisboa.

- El ámbito regional dispone de importantes competencias en la materia. Es necesario definir concretamente la articulación entre el ámbito regional y el ámbito nacional, en especial en lo relativo a la Estrategia Europea por el Empleo (EEE).

- El intercambio de experiencias entre las regiones como un valor añadido de gran importancia.

f) Desarrollo sostenible

El Grupo de trabajo, coordinado por la Comunidad Autónoma de Cataluña, tiene entre sus ámbitos de actuación fundamentales el seguimiento y análisis de la estrategia de la Unión Europea en favor del desarrollo sostenible, de cómo hacer de la energía un recurso duradero para las regiones periférico marítimas y de las implicaciones territoriales y medio ambientales de la política agrícola común (PAC) y del desarrollo rural.

Entendiendo que el desarrollo sostenible permite responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, el Grupo de trabajo aboga por una aproximación integral de la UE en materia de desarrollo sostenible, y se centra, particularmente, en los seis aspectos prioritarios que constituyen amenazas graves o potencialmente irreversibles para nuestro bienestar: el cambio climático, la salud pública, la pobreza y la exclusión social, el

envejecimiento de la sociedad, la gestión de los recursos naturales y la movilidad y los transportes[144].

En el desarrollo de las actividades de la CRPM que acabamos de mencionar, en el apartado de la "gobernanza", el 23 de junio de 2000, se celebró en Lisboa una Jornada de debate sobre "*The participation of sub-state levels in European governance*", correspondiendo al Presidente de la Comisión del Arco Atlántico en ese momento, Don Manuel Fraga Iribarne, la ponencia, en representación de las Comunidades Autónomas españolas sobre "*Spain and the role of autonomous regions*".

La Asamblea General de la Conferencia, celebrada en Ioannina (Grecia), los días 18 a 20 de septiembre de 2002, se centró en los principales temas al orden del día de las instituciones comunitarias con objeto de fijar la posición de la Asociación en relación con los mismos: el futuro de la política de transportes, el futuro de la política de medio ambiente, la Gobernanza y el Plan de acción de 5 de junio de 2002 y el futuro de la política regional.

En el año 2004, con una decidida participación del Principado, la CRPM organiza, en colaboración con diferentes regiones, dos Seminarios, uno sobre "*Desarrollo Rural*" (Florencia, 30 de abril de 2004) y otro sobre "*La cooperación territorial europea después de 2006: propuestas de las regiones*" (Taormina (Sicilia), 21 y 22 de octubre de 2004). En la Asamblea General anual, celebrada en Stavanger (Noruega) los días 22 al 24 de septiembre, se abordaron tres temas de particular importancia para las regiones periféricas: Energía y desarrollo regional sostenible, la dimensión marítima de Europa y el futuro de la política de cohesión territorial.

El 18 de abril de 2005, el Gobierno del Principado en colaboración con la CRPM, organizó en Oviedo un Seminario sobre "*Ayudas de Estado con finalidad regional y cohesión territorial. Qué futuro después de 2006?",* en el que se analizaron las propuestas de la Comisión sobre este régimen de ayudas y sus repercusiones en las regiones periféricas, y en el que el Presidente del Principado expuso las grandes líneas del Dictamen que sobre este asunto presentaría, meses más tarde, ante el Pleno del Comité de las Regiones, y que fue aprobado por unanimidad. En el mes de julio, el Comité de las Regiones y la Asociación, en colaboración con diferentes regiones, organizaron la Conferencia "*Sea Our Future*: *The Regional Approach to an Integrated*

144 - Entre las aportaciones de la CRPM al debate sobre el desarrollo sostenible se pueden mencionar: en marzo de 2002 "Posición de las regiones CRPM en el ámbito de la gobernanza medioambiental"; en septiembre de 2002: "La CRPM y la política del Medio Ambiente"; en agosto de 2004: "Réponse de la CRPM à la consultation de la Commission sur le réexamen de la strategie de l'UE en faveur du développement durable".

Europeam Maritime Policy", tema, como ya se ha indicado, de especial relevancia e interés tanto para la CRPM como para sus regiones miembros, y en la que la CRPM, a través de su Secretario General, se posiciona firmemente a favor de una política comunitaria de la Mar.

En relación con el tema "Mar", la CRPM ha presentado a la Comisión Europea un ambicioso proyecto, en el que participan más de 50 regiones y ciudades de la Fachada Atlántica, entre ellas el Principado de Asturias y la ciudad de Gijón a través de la Autoridad portuaria, que pretende proponer una serie de orientaciones estratégicas para el desarrollo de una política marítima integrada, a imagen de la que existe en otras zonas del planeta como Canadá, Australia y Estados Unidos. El proyecto está financiado conjuntamente por las regiones y ciudades participantes y por la CRPM[145].

En la Asamblea General de 2005, celebrada en Madeira (Portugal), entre los días 2 a 4 de noviembre, la preparación de una política europea del mar ocupa un lugar preeminente, destacando la primera contribución de la CRPM al Libro Verde de la Comisión Europea sobre la política marítima de la Unión y la movilización de la CRPM sobre la Europa del Mar. Se abordó igualmente la participación de las regiones en las instancias de seguridad marítima, propiciándose una efectiva y eficaz colaboración entre ambas.

Durante el presente año 2006, los centros de interés de la CRPM y de sus regiones miembros seguirán siendo: la negociación de las perspectivas financieras, la puesta en marcha de la política de cohesión, las Ayudas estatales para hacer prevalecer los criterios de diferenciación territorial, la Europa del Mar y la gestión integrada de las zonas costeras, la investigación y la innovación, la formación y el empleo, la pesca, la agricultura, la cooperación territorial, el desarrollo sostenible, la gobernanza y la vecindad, que los diferentes Grupos de trabajo irán desarrollando y completando.

1.3. La Comisión del Arco Atlántico

Como ya se ha indicado, el día 13 de octubre de 1989, en la Asamblea General de la CRPM celebrada en Faro (Portugal), a propuesta de las regiones francesas de Países del Loira y Bretaña, se decidió la creación de la Comisión del Arco Atlántico, que se constituyó formalmente en abril de 1990 en Rennes (Francia), siendo el Principado de Asturias, junto con otras 20 regiones de

145 - Desde el mes de julio de 2005 funciona la página Web del proyecto: www.europedelamer.org / www.europeofthesea.org como instrumento de difusión y documentación al servicio del proyecto, y presenta un conjunto de documentos de referencia y de contactos. Se recoge igualmente la actualidad sobre el proyecto, las principales manifestaciones sobre la Europa del Mar, así como determinados documentos de trabajo.

España, Portugal, Francia y Reino Unido, una de las regiones fundadoras de la misma.

La Comisión Arco Atlántico, teniendo en cuenta tanto sus potencialidades como sus desventajas comparativas en relación con otros grandes espacios europeos, ha pretendido, desde su creación, la emergencia de redes que favorezcan la cooperación interregional para permitir a las regiones que la forman valorizar sus ventajas naturales, desarrollar armoniosamente sus economías y potenciar la formación para favorecer la aparición de nuevas capacidades.

La movilización de las regiones en torno a proyectos comunes se concretizó ya en 1991 con un programa de acción cofinanciado por la Comunidad Económica Europea, que se articulaba en torno a cuatro actuaciones principales:

- Desarrollo de las relaciones entre los puertos de la fachada atlántica –*ARCANTE*L- destinado a poner en red a los principales puertos de la fachada atlántica, con el objetivo de mejorar su comunicación y ofrecer un mejor servicio tanto a los barcos que navegan en el eje norte-sur, como a los operadores en tierra.

- Desarrollo de servicios financieros de alto nivel para financiar las inversiones necesarias al crecimiento de las empresas, y garantizar una mayor sinergia entre los principales protagonistas financieros de estas regiones. Así, en 1992 se creó un fondo de capital riesgo para *PYME –FINATLANTIC*- que contribuyó a la creación y desarrollo de numerosas PYMES en las regiones del espacio atlántico.

- Intercambios de experiencias y de competencias para mejorar la explotación de los recursos marinos, proteger el medio ambiente y desarrollar la acuicultura. La creación de granjas *of shore* es objeto de estudios específicos con la finalidad de desarrollar más la acuicultura y paliar la carencia de recursos haliéuticos.

- Desarrollar los polos de excelencia y aprovechar las complementariedades interregionales atlánticas. El proyecto *ATLANTICA* nace en el seno de 27 asociaciones universidad/empresas (AUEF) para la formación en nuevas tecnologías y para favorecer que las regiones atlánticas tengan acceso a programas de formación y promover su cooperación a partir de un análisis de las necesidades en este ámbito y para desarrollar la formación multimedia. Así, entre otros, se llevaron a cabo intercambios técnico y de estudiantes entre

Asturias y Bretaña.

Simultáneamente al desarrollo del proyecto que acabamos de comentar, se crearon diferentes Grupos de trabajo, cada uno de ellos coordinado por una o varias regiones miembros de la Comisión, con objeto de contribuir al desarrollo socio-económico del Espacio atlántico:

- *Infraestructuras de carreteras*, coordinado por la región de Bretaña.
- *Infraestructuras ferroviarias,* coordinado por la región de Aquitania.
- *Conexiones aéreas interregionales,* coordinado por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- *Conexiones marítimas,* coordinado por País de Gales.
- *Acuicultura,* coordinado por Poitou-Charentes
- *Pesca,* coordinado por la Comunidad Autónoma de Galicia.
- *Turismo,* coordinado por la región de Devon.
- *Servicios financieros,* coordinado por la región de Lisboa y el Valle del Tajo.
- *Medio Ambiente,* coordinado por las regiones de Devon, Poitou-Charentes y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En esta primera fase de desarrollo de la Comisión Arco Atlántico, el Principado de Asturias, junto con la región de Bretaña y Escocia, participó en un proyecto de cooperación interregional, dentro del marco del programa SPRINT, para promover los contactos entre empresas de las regiones participantes en base a intercambios tecnológicos, subcontratación, relaciones comerciales, etc. y para establecer entre las mismas una red permanente de colaboración con objeto de promocionar los intercambios tecnológicos, comerciales y humanos.

Asimismo, en esta primera fase, el estudio presentado por la Comisión Europea el 16 de octubre de 1991 "*EUROPE 2000: les perspectives du territoire communautaire*", reflexión de conjunto sobre los medios que habría que poner en marcha para conseguir un mejor equilibrio de las infraestructuras y de las

actividades en el territorio europeo, pone en evidencia las debilidades de las regiones del Arco Atlántico, al mismo tiempo que el papel predominante del eje Londres/Milán. Las desventajas comparativas de la fachada atlántica en relación con otros espacios europeos se confirman en el estudio de prospectiva realizado por el Centro Europeo de Desarrollo Regional (CEDRE) a petición de la propia Comisión Europea, entre 1992 y 1993.

Por otra parte, el Informe del Señor Thomas MAHER, diputado liberal irlandés en el Parlamento Europeo, pone de manifiesto la necesidad de desarrollar en favor de las regiones atlánticas una estrategia centrada sobre ejes coherentes con los que los Presidentes de las regiones de la fachada atlántica habían puesto ya en evidencia. La adopción por unanimidad del mencionado Informe, bajo la forma de enmienda al proyecto de presupuesto de la Comunidad Económica Europea, la Comisión parlamentaria se pronuncia favorablemente sobre la concesión de una ayuda especial para las regiones atlánticas.

La Comisión Europea, a propuesta del Parlamento Europeo, se pronunció en favor de la concesión a la Comisión Arco Atlántico de la realización, en 1994, de la acción piloto **ATLANTIS,** dotada de una cofinanciación comunitaria de 4 Millones de ECUs, y posiblemente el proyecto más ambicioso realizado por el conjunto de las regiones de la Fachada Atlántica. El 27 de abril de 1993, el Director General de Política Regional de la Comisión confía a la Comisión Arco Atlántico la coordinación de la mencionada acción piloto.

Los temas, los proyectos realizados y las regiones responsables de cada uno de ellos en el marco de ATLANTIS fueron:

Tema 1: "Modernización del Turismo" (Región responsable: Devon)

Este primer tema tiene como objetivo promover una mejor distribución del turismo en el tiempo y en el espacio respetando la calidad del medio ambiente, especialmente promoviendo el desarrollo de alternativas al turismo de masas y el escalonamiento de las vacaciones, así como nuevos destinos y nuevas formas de turismo. La acción piloto ATLANTIS permitió acompañar las actuaciones de las regiones en dos direcciones:

- análisis de la oferta y de la demanda del turismo atlántico;
- creación de nuevos productos:
  - turismo verde,

- turismo urbano

- patrimonio marítimo atlántico.

Proyecto 1: "*Marketing del turismo atlántico*", se desarrolló en torno a tres temas claves: una elección de los mercados prioritarios, una selección de productos y la concentración de los medios.

Proyecto 2: "*Desarrollo de nuevos productos turísticos*". En el proyecto se identificaron tres productos que fueron objeto de propuestas concretas de desarrollo:

- *Turismo verde*:

  - Desarrollo del turismo sostenible (Coordina Devon).

  - Concepción de modelos de turismo sostenible (Coordinan Galicia y el Principado de Asturias).

  - Rehabilitación y protección de los emplazamientos turísticos (Coordinan Cornouailles y Bretaña).

  - Metodología de desarrollo de proyectos turísticos y de su realización.

- *Turismo urbano:*

  - La función receptiva del turismo urbano.

  - La información turística de las poblaciones urbanas.

  - Las operaciones mixtas.

- *El patrimonio marítimo atlántico:*

  - Actividades de restauración.

  - Intercambios de conocimientos en construcción naval.

  - Armazones marítimos.

  - Valorización de museos y centros de documentación y

etnográficos[146].

Tema 2: "Transferencia de Tecnologías" (Región responsable: Aquitania)

De acuerdo con los principios de actuación definidos por la Comunidad Europea (CE), el tema relativo a la transferencia de tecnologías, tiene tres características dominantes:

- asociar las universidades, los centros de investigación y las industrias;
- conjugar los recursos de diferentes disciplinas;
- desarrollarse bajo la forma de proyectos transnacionales.

Los proyectos que se desarrollaron en el marco de este segundo tema fueron:

Proyecto 1: "*Red de las Tecnópolis del Arco Atlántico – T2A*". Las acciones concretas que se realizaron se articulan alrededor de tres ejes:

- Acciones e instrumentos de aproximación al servicio del desarrollo de las empresas y de los centros de competencias tecnológicas.
- Mejora de las cualificaciones de los responsables de las tecnópolis del Arco Atlántico.
- Promoción de una identidad común[147].

Proyecto 2: "*Red de comunicación interactiva multimedia de investigaciones tecnológicas correspondientes*"

La Red constituye un proyecto piloto e innovador en el ámbito de la visiofonía que permite el desarrollo, mediante el apoyo de socios industriales, de una red entre las regiones que aún no explotan estas nuevas tecnologías. La red permitirá asimismo la emergencia de nuevas profesiones, como los de

146 - Participaron en el proyecto todas las regiones de la Comisión Arco Atlántico.
147 - Las regiones participantes en este proyecto fueron las siguientes: Hampshire, Baja-Normandía, Bretaña, Países del Loira, Poitou-Charentes, Aquitania, País Vasco, Asturias, Galicia, Andalucía, Norte Portugal, Lisboa y Valle del Tajo y Madeira.

investigadores y creadores en tecnologías de expresión[148].

Tema 3: "Enlaces marítimos y aéreos" (Regiones responsables: Bretaña y Aquitania)

El objetivo de este tema es el estudio de la viabilidad de los enlaces marítimos y aéreos entre las regiones así como su promoción; las condiciones de la intermodalidad entre determinados puertos y la creación de un sistema de prevención de catástrofes marítimas en las costas atlánticas para combatir las sucesivas agresiones a las que han sido sometidas.

Proyecto 1: "*Desarrollo de enlaces marítimos y adaptación de los puertos del Atlántico a la intermodalidad*"

Las acciones concretas que se desarrollaron fueron, entre otras, la realización de varios estudios de viabilidad que podían, a medio plazo, desembocar en la creación de nuevas líneas, así como el estudio en profundidad de las condiciones óptimas de la adaptación de los puertos de la Fachada atlántica a la intermodalidad[149].

Proyecto 2: "*Seguridad marítima y sistemas de prevención*"

El proyecto se organiza alrededor de tres conceptos aplicados al Arco Atlántico y, en particular, a algunos lugares piloto como Brest, Plymouth, La Coruña, Cádiz, etc.:

- Sistema de vigilancia y alerta en tiempo real del tráfico marítimo (VTS).
- Servicio de información a la navegación marítima.
- Sistema de ayuda a expertos en averías de los navíos con riesgos[150].

Proyecto 3: "*Enlaces aéreos interregionales*"

El proyecto se centra en tres acciones fundamentales:

148 - Participaron en el proyecto las regiones de Países del Loira, Aquitania, País de Gales, País Vasco y Norte Portugal.
149 - Las regiones participantes fueron: Irlanda, Avon, Strathclyde, País de Gales, Devon, Bretaña, Países del Loira, Poitou-Charentes, Aquitania, Asturias, País Vasco, Andalucía, Norte Portugal y Lisboa y Valle del Tajo.
150 - Los socios en el proyecto fueron: Bretaña, Baja-Normandía, Galicia y Shetland.

- La creación de un esquema director del desarrollo del transporte aéreo en el seno del Arco Atlántico.

- Estudio económico de los proyectos de nuevas líneas, cuya creación podría eventualmente decidirse sin esperar los resultados del estudio.

- Apoyo a la promoción de las líneas creadas recientemente.

Entre otros enlaces, se propone la línea Porto-Asturias-Burdeos[151].

Tema 4: "Agua y Medio Ambiente" (Región responsable: Poitou Charentes)

Las prioridades de las regiones atlánticas coinciden con las de la Comunidad europea en este ámbito: preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a la protección de la salud de las personas y garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ello, las regiones del Arco Atlántico pretenden crear un *plan verde atlántico,* destinado a preservar la calidad de su medio ambiente.

Por razones de eficacia y de gestión, se decidió concentrar el trabajo del "Arco Verde" en tres prioridades, cada una de ellas coordinada por una región:

- Residuos (Asturias)

- Agua (Poitou-Charentes)

- Turismo verde y protección del paisaje (Devon).

La coordinación de todos los trabajos la asume un Comité de dirección compuesto por cuatro regiones: Centro Portugal, Asturias, Poitou-Charentes y Devon[152].

Se llevaron a cabo dos proyectos:

Proyecto 1: "*Creación de una red de información y de vigilancia para las regiones atlánticas en relación con el agua y los residuos*":

151 - Las regiones participantes en el proyecto fueron: Hampshire, Baja-Normandía, Países del Lora, Aquitania, Asturias, País Vasco Norte Portugal y Lisboa y Valle del Tajo.
152 - En el "Arco Verde" participaron como socios las regiones de: Devon, Somerset, País de Gales, Bretaña, Países del Loira, Poutou-Charentes, País Vasco, Asturias, Galicia, Andalucía Norte y Centro Portugal y Lisboa y Valle del Tajo.

- Gestión del agua: gestión de los recursos hídricos, agua potable, depuración de aguas residuales, impacto sobre el medio ambiente.

- Gestión de residuos: el marco normativo en el ámbito de la gestión de residuos y elaboración de un cuadro de indicadores sobre residuos para la región.

Proyecto 2: "*Las zonas húmedas y litorales atlánticas*"

Los objetivos fundamentales del proyecto están en relación con:

- La identificación de zonas húmedas y litorales sensibles y no-sensibles.

- El desarrollo de una planificación económica y territorial y de una gestión de los sistemas de zonas húmedas y costeras.

- El desarrollo del potencial económico de esas zonas a través de un turismo adecuado, la diversificación de la agricultura y la gestión de los recursos.

- La puesta en marcha de una red de intercambio de información y de experiencias.

El Principado de Asturias, junto con Poitou-Charentes, País Vasco, Galicia y Centro Portugal, fue una de las regiones en las que se desarrollaron acciones de demostración, como zonas piloto, sobre la gestión y la puesta en práctica de la normativa comunitaria.

Además de la Acción piloto ATLANTIS, que acabamos de comentar, a lo largo de la década de los años noventa del siglo pasado, se desarrollan diferentes proyectos de cooperación interregional en los que participa el Principado con diferentes regiones del Arco Atlántico: *Red BRITT ATLANTIC*, para la transferencia de tecnologías en el campo de la Biotecnología, TECH'ATLANTIC, intercambios de experiencia en Materiales Avanzados y Producción Robótica, etc. En el año 2000, con objeto de conocer mejor las necesidades y prioridades de cooperación interregional, se realiza un "*Etude stratégique de cooperation interregional – Espace Atlantique*", en el que participa el conjunto de las regiones miembros de la Comisión, que dirige la Cellule de Prospectives des Péripheries Maritimes, que orientará las prioridades y actuaciones de las regiones atlánticas desde comienzos del

presente siglo.

En mayo de 2000, se celebró en Oviedo la Asamblea General de la Comisión, abordándose los temas relacionados con la nueva política regional europea en 2007, la cooperación interregional y, especialmente, la participación de las regiones atlánticas en la Iniciativa Comunitaria Interreg, la planificación y desarrollo de los territorios marítimos atlánticos y la participación de los agentes socioeconómicos en la movilización atlántica. En marzo de 2001, nuestra región organiza en Oviedo un Seminario sobre "Ordenación del Territorio", en el que se propusieron y analizaron diferentes proyectos de cooperación relacionados con las costas, las áreas metropolitanas, la creación de redes de actores y agentes de ordenación del territorio y del desarrollo sostenible, así como otros varios relativos a la relación "rural-urbano", la coordinación de sistemas de información geográfica de las regiones del Arco Atlántico o la creación de red de aldeas telemáticas de Europa para la recuperación de aldeas abandonadas.

Con motivo del mencionado Seminario, se crearon cuatro Grupos de trabajo:

- Gestión integrada de las zonas costeras, coordinado por Asturias.
- Áreas metropolitanas, igualmente coordinado por Asturias.
- Interdependencia entre lo urbano y lo rural y ciudades de tamaño medio, coordinado por Alentejo.
- Redes de desarrollo territorial, coordinado por Galicia.

En la Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico celebrada en Burdeos, en junio de 2002, se identificaron como prioritarios para los próximos años los siguientes temas de acción:

- Los transportes: mejora de la comunicación interna y externa, intermodalidad, desarrollo de los enlaces marítimos.
- El desarrollo sostenible y, en particular, la gestión integrada de las zonas costeras.
- La pesca, en el marco de las dificultades impuestas por la política comunitaria.

- La investigación y la innovación al servicio de la competitividad global del espacio atlántico.

En el ámbito de las actividades relacionadas con el transporte, las prioridades se centran en la participación en la revisión de la Red Trans-Europea de Transporte (RTE-T), en la promoción de alternativas al transporte por carretera, sobre todo a través del transporte marítimo y el cabotaje y en la búsqueda de soluciones en materia de transporte que sean más respetuosas con el medio ambiente.

Asturias lidera las actividades relacionadas con el medio ambiente y la gestión integrada de las zonas costeras, y buena parte de sus prioridades se centran en el desarrollo del proyecto "*Coastatlantic*", cuyo objetivo es fijar las bases para una ordenación integrada e imaginativa de las zonas costeras atlánticas, permitiendo identificar las particularidades de esas zonas para la definición de futuras estrategias de desarrollo y conservación sostenible de las mismas. Se desarrollan cuatro áreas temáticas: el acceso a las costas, la herencia cultural, la herencia natural y la interdependencia rural/urbano.

Por lo que se refiere a la pesca, las prioridades de actuación se centran en la conservación de los recursos pesqueros, y la revalorización económica y social de la pesca artesanal. Por lo que respecta a la seguridad marítima, el desarrollo del proyecto *EROCIPS* (Reacción de emergencia ante la contaminación petrolera, química e inerte de las costas, causada por la navegación), que coordina la región de Devon, es una de sus prioridades más importantes.

En los ámbitos de la investigación e innovación, el objetivo fundamental de sus actividades es valorizar las posibilidades de intercambio de experiencias y de colaboraciones interregionales en estos temas en un marco europeo e internacional y dentro de la perspectiva del desarrollo socio-económico de sus territorios confrontados a dificultades similares.

En las Asambleas Generales de la Comisión Arco Atlántico celebradas en Inverness (Highland, Reino Unido), en junio de 2003, en Bilbao, en junio de 2004 y en Oporto, en junio de 2005, al mismo tiempo que se ratifican las prioridades reseñadas y se presentan los avances realizados en el desarrollo de cada una de ellas, se abordan los temas relacionados con las autopistas del mar, el futuro de la cooperación transnacional en el espacio atlántico y los objetivos de cohesión y de competitividad territorial en el marco de la nueva política de cohesión.

Durante el transcurso de la última Asamblea General de la Comisión, celebrada en Gijón en junio de 2006, el Presidente del Principado de Asturias D. Vicente A. Alvarez Areces fue elegido Presidente de la Comisión Arco Atlántico en sustitución del Presidente de la región francesa de Aquitania Alain Rousset. En la presentación de su programa de trabajo para los dos próximos años, el ya Presidente de la Comisión insistió en que el mar iba a seguir siendo uno de los ejes centrales de trabajo. En efecto, el medio marino y costero con todos sus aledaños, constituye la esencia misma del espacio atlántico y debe ser, por tanto, el centro de los esfuerzos comunes, así como la guía para la cooperación reforzada entre las regiones del Arco Atlántico.

La innovación, desde un enfoque transversal y horizontal, la creación de redes entre centros tecnológicos, universidades y empresas de la fachada atlántica, la promoción de los productos autóctonos, la administración pública y la gobernanza, profundizando en los métodos y procedimientos para una cooperación interregional más productiva, son otros tantos ejes de trabajo que el nuevo Presidente de la Comisión pretende desarrollar durante su mandato.

Sin perder de vista las prioridades actuales, que acabamos de reseñar, y con la firme esperanza de crear un espacio europeo policéntrico con un mejor reparto de la riqueza y del empleo en el conjunto del territorio comunitario, las Regiones Atlánticas, orientadas asimismo hacia el futuro, trabajan actualmente para preparar los proyectos estratégicos del mañana.

1.4. La Conferencia de las Regiones del Sur de la Europa Atlántica (SEA)

En virtud de la Carta Interregional para el Desarrollo del Sur de Europa Atlántica, once regiones francesas, españolas y portuguesas de la fachada atlántica y pertenecientes todas ellas a la Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), constituyeron en Burdeos, el 27 de abril de 1990, la Conferencia de las Regiones del Sur de la Europa Atlántica (SEA). El Principado de Asturias fue una de las regiones fundadoras de la Asociación.

La Asociación se dotó de los siguientes órganos:

- Comité Ejecutivo Interregional, compuesto por los Presidentes de las regiones miembros.

- Delegación Permanente: órgano técnico del Comité Ejecutivo.

- Secretaría General, que asumió en ese momento la región francesa de Aquitania.

En la Conferencia constitutiva se aprobaron varios informes preparados por diferentes comisiones encargadas de las infraestructuras ferroviarias, infraestructuras viarias, transporte de energía e infraestructuras de telecomunicaciones, que dieron lugar a una Declaración Común relativa al desarrollo de las infraestructuras de comunicación del Sur de la Europa Atlántica. El Principado de Asturias fue una de las regiones fundadoras del SEA.

A pesar de su corta existencia, su disolución se acordó en 1996, como luego veremos, la Conferencia SEA desarrollo una intensa actividad, en particular en el ámbito de la cooperación interregional. Así, el mismo año de su constitución se creo en su seno la Asociación "TGV Aquitania-Sur de Europa Atlántico", con la participación de todas las regiones miembros de la Asociación, el objetivo de concretar desde su creación hasta el año 2000 el carácter prioritario de la costa atlántica como línea de la Alta Velocidad Europea.

El 8 de octubre de 1991, en una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Bruselas se acordó presentar cuatro proyectos de cooperación interregional para su cofinanciación por la Comunidad Europea en el marco de los programas de cooperación interregional:

- *Promoción europea del Camino de Santiago (Red Compostela*).
  El objetivo del proyecto, liderado por Galicia, era la promoción del Camino de Santiago desde diferentes ámbitos: cultural, turístico, socio-económico, etc.

- *Investigación y desarrollo tecnológico de las regiones SEA*.
  Se trataba de un proyecto de intercambio de experiencias, transferencia de tecnologías y realización de proyectos de investigación comunes en los ámbitos de los materiales avanzados, la biotecnología, la producción robótica y la biología marina[153].

  Al mismo tiempo, se creó el "Conseil Supérieur Consultatif pour la Recherche et le Développement Téchnologique" (CSCRDT) para unir esfuerzos en torno a la tecnología y a la investigación científica. En este sentido, se participó en sendos Seminarios, en Bilbao y Bourges, en junio y noviembre de 1995, sobre el impacto de las biotecnologías en el desarrollo económico de las regiones SEA y la Prodúctica y

153 - Participaron en el proyecto las regiones de Oporto, Lisboa y Valle del Tajo, Asturias, País Vasco, Aquitania, Países del Loira y Bretaña.

Robótica, respectivamente.

- *Observatorio de Formación*.
  El desarrollo de este proyecto se concretizó fundamentalmente en la realización conjunta de todas las regiones participantes en el mismo de diferentes cursos de formación de Agentes de Desarrollo Comunitario, en diferentes regiones.

- *Compostela-Fôret*.
  Este proyecto, en el que participaron diez regiones SEA[154] y que se desarrolló entre los años 1992 y 1994, tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias entre las regiones participantes con el fin de crear un verdadero mercado en el sector maderero, ya que actuando aisladamente difícilmente podrían rivalizar con la producción bien estructurada de la Europa septentrional.
  Se trata, pues, de aumentar la productividad silvícola, para hacer frente a la competencia e integrarse en el mercado europeo de la madera.
  El proyecto comprende la realización de acciones concretas como la creación de una red experimental de silvicultura, la realización de un estudio comparado sobre la economía de la producción forestal, la ejecución de estudios sobre la protección contra los incendios, y la realización de diferentes experiencias piloto.

Como continuación del proyecto "Compostela-Fôret", las regiones participantes en el mismo presentaron al programa RECITE II el proyecto "*EURO SILVASUR*", con el objetivo de reforzar el entramado "Fôret/Bois" en el Sur de Europa Atlántica actuando sobre un conjunto de factores claves:

1. La reagrupación de los propietarios forestales por medio de la cooperación, la prestación de servicios y la venta de la madera.

2. La elaboración de información fiable sobre todos los aspectos de la economía de la madera, incluido el empleo.

3. La aplicación de nuevos métodos de fabricación para las PYMES en el ámbito de la aserradura en las regiones, con la finalidad de aumentar su competitividad.

4. La transferencia de un sistema financiero que tenga en cuenta la duración de los ciclos de producción específicos de los bosques privados de una región, Aquitania, a las otras regiones participantes.

154 - Aquitania, Asturias, Centro (Francia), Centro (Portugal), Castilla y León, Galicia, Navarra, Norte (Portugal), País Vasco y Poitou Charentes.

5. La definición y la puesta en práctica, a través del "Institut Européen de la Fôret Cultivée", de un polo de investigación y desarrollo capaz de acompañar los entramados regionales en la puesta en práctica de una economía forestal creadora de empleo, respetando siempre los principios del desarrollo sostenible.

6. La mejora de la comunicación a los ciudadanos de los `problemas y retos del bosque cultivado.

En definitiva, se trata de poner las bases de una economía próspera del bosque y de la madera del Sur de Europa Atlántica, capaz de dialogar con la poderosa organización de Europa del Norte.

A pesar de la importante actividad desarrollada por las regiones miembros del SEA y de la activa participación de las mismas en programas y proyectos de cooperación interregional, la propia existencia de la Asociación no era especialmente considerada por las restantes regiones del Arco Atlántico. Por ello, en la reunión de la Delegación Permanente de la Conferencia de las Regiones del Sur de Europa Atlántica, celebrada en Vitoria-Gasteiz el 23 de enero de 1996, se propuso:

- Que la Delegación Permanente se manifieste a favor de la disolución del SEA.
- Que los proyectos se integren en el Arco Atlántico manteniendo el "espíritu del SEA".
- Que debe continuar la Asociación "TGV-Sur de Europa Atlántica".

Estas propuestas fueron adoptadas por unanimidad con la abstención de Aquitania y de los Países del Loira. Posteriormente, en una Asamblea General Extraordinaria se aprobaron las propuestas de la Delegación Permanente, lo que conllevó la disolución del SEA, manteniéndose la Asociación TGV-SEA, cuya última reunión, ya disuelto el SEA, se ha celebrado en Burdeos, el día 13 de enero de 2004.

1.5. La Asociación de Regiones de Tradición Industrial (RETI)

La Asociación de Regiones de Tradición Industrial (RETI), posteriormente denominada Regiones de Tecnología Industrial, fue creada en 1984 con motivo de una reunión de regiones con estas características

en Lille (Nord-Pas de Calais)[155]. El Parlamento Europeo, en una Resolución sobre las Regiones de Tradición Industrial de la Comunidad Europea, de 9 de septiembre de 1986[156], recoge las características comunes de estas regiones:

- "una elevada dependencia histórica de un número limitado de industrias tradicionales que han desparecido o se han visto obligadas a reducir fuertemente su mano de obra,
- fuentes limitadas de empleo alternativo en la región,
- un alto nivel y larga duración del desempleo estructural,
- cifras del PNB per cápita en declive, respecto a las regiones más prósperas,
- una herencia de enclaves abandonados y viviendas de calidad deficiente".

En la misma Resolución, el Parlamento Europeo "celebra la iniciativa adoptada por algunas Regiones Europeas de Tradición Industrial de constituir la organización RETI que proporciona una tribuna en la que éstas pueden reunirse regularmente para debatir y proponer soluciones a sus dificultades comunes". El Principado de Asturias se adhirió a la Asociación RETI a comienzos de 1986.

Los órganos de RETI son: la Asamblea General, que se reúne anualmente, el Comité Ejecutivo y la Secretaría, que tiene su sede primero en Lille y posteriormente en Bruselas. Desde su adhesión a la Asociación y hasta que dejó de pertenecer a la misma, al inicio de la 5ª Legislatura en 1999, el Principado de Asturias asumió una de las Vicepresidencias de la Asociación y formó parte de su Comité Ejecutivo.

Desde sus primeros años de existencia, la actividad de la Asociación se centró en el intercambio de experiencias sobre esos problemas comunes. Así, los primeros proyectos que presentó la Asociación al Programa RECITE de intercambio de experiencias para su cofinanciación por la Comunidad Europea, y en los que participaron el conjunto de las regiones miembros de la Asociación, se refieren a *la recuperación de Ruinas Industrias*, en una primera fase mediante los correspondientes intercambios de experiencias, y en una segunda fase a la realización de proyectos pilotos.

155 - Las regiones fundadoras de RETI fueron, entre otras, Nord-Pas de Calais, Lorena, La Sarre, Strathclyde, Merseyside, West Midlands, Limburg, Toscana y Lancashire.
156 - D. O. C255, de 13 de octubre de 1986.

En este mismo sentido, y con la participación igualmente del conjunto de las regiones miembros de la Asociación, se crea un "*Fondo Europeo de Desarrollo de las PYME*", con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los territorios especialmente afectados por las reconversiones industriales. Al mismo tiempo, se pone en marcha la iniciativa *RETInet,* con el fin de estimular y apoyar la transferencia interregional de tecnología como instrumento fundamental del desarrollo regional.

En el ámbito del empleo y la formación de los recursos humanos, diferentes regiones RETI[157], presentan al programa RECITE II un proyecto relativo a los "*Pactos Territoriales por el Empleo*" cuya finalidad última era la creación de empleos alternativos a los puestos de trabajo perdidos a causa de las reconversiones industriales, y a la necesidad de una formación específica para los excedentes laborales de las reestructuraciones que facilitase su reintegración en el mercado de trabajo.

En el propio ámbito de la valorización de los recursos humanos, los días 12 y 13 de julio de 1995, se organizó en Bruselas el "*RETI seminar on the valorisation of the human resource in the industrial regions*", en el que junto con los responsables regionales en los ámbitos de la formación profesional y el empleo, participaron representantes de las Direcciones Generales de formación y empleo de la Comisión Europea así como del Fondo Social Europeo. Entre las conclusiones del Seminario se insistió en la importancia que para las regiones RETI tienen los intercambios de experiencias con regiones que ya han experimentado procesos de reconversiones industriales y se encuentran en fases más avanzadas.

En mayo de 1993, comienza a desarrollarse un ambicioso proyecto en el ámbito de la educación entre Asturias y Strathclyde "*Education links between Asturias and Strathclyde*", con intercambios entre centros escolares, intercambios de profesores, formación profesional, intercambios de jóvenes y educación de la comunidad, en el que se desarrollan importantes vínculos de cooperación entre las Comunidades educativas de ambas regiones.

Ya en 1996 RETI comienza a reflexionar sobre el después de 1999 y la repercusión de la reforma de los Fondos estructurales en estas regiones. Así, el 22 de noviembre de 1996, RETI organiza en Bruselas, en la Sede del Parlamento Europeo y con su total apoyo, una Conferencia sobre "*Mutations Industrielles et Politique Régionale: l'après 1999*", con una importante participación del Principado de Asturias. El objetivo de la Conferencia era

157 - West Midlands, Merseyside, Navarra, Toscaza, Emilia Romana, Tampere, Lancashire, Limburg, La Rioja y el Principado de Asturias.

promover y estimular el debate sobre la reforma de los Fondos estructurales y poner de manifiesto los ámbitos en los que las regiones industriales tienen intereses comunes que defender.

Esta Conferencia/Encuentro se concibió como una primera etapa en un proceso de consulta y de discusión entre las regiones industriales de Europa, teniendo en cuenta los importantes retos que se presentaban para los próximos años: la realización de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación de la Unión y el cuestionamiento del presupuesto global comunitario.

El día 6 de febrero de 1997, el Vicepresidente del Principado de Asturias y Vicepresidente de RETI, Don José Ramón García Cañal, presentó en el Comité de las Regiones, en representación de la Asociación, el proyecto de cooperación interregional *REGENA,* sobre el medio ambiente en las regiones de Europa, consistente en el análisis e investigación de buenas prácticas en la realización de Informes medioambientales por parte de las Administraciones regionales[158].

El proyecto puso de manifiesto que los Informes medioambientales a nivel regional era una actividad relativamente nueva y que pocas regiones podían beneficiarse de una experiencia a largo plazo. En el mismo, se constató una gran variedad en los planteamientos hechos por las regiones, tanto en el proceso de confección de los Informes medioambientales como en lo relativo a su contenido e incluso en sus objetivos, si bien todas las regiones estaban de acuerdo en la conveniencia de su preparación.

El 23 de abril del mismo año, se celebró en Oviedo la Asamblea General Anual de RETI, en la que se aprobaron dos importantes documentos de posición de RETI que se remitieron tanto a la Presidencia de Turno de la UE como al Presidente de la Comisión Europea: "*Gestión del cambio industrial: el futuro de la política regional después de 1999*" y la relativa a "*Cambio industrial y cohesión*", que además se presentaría en el Foro sobre la Cohesión que se celebró en Bruselas del 28 al 30 de abril de 1997.

En julio de 1997, representantes del Gobierno regional participaron en Glasgow, con la presentación de una ponencia sobre el desempleo juvenil, en la Conferencia organizada por RETI sobre "Employment and Structural Funds", en cuya Resolución final se pedía una mayor implicación de las regiones en la elaboración y desarrollo de los planes nacionales de empleo y que se tuvieran en consideración la diversidad de las condiciones del mercado de trabajo en

158 - En la realización de este proyecto participaron las regiones de Greater Manchester, Verona, West Midland y el Principado de Asturias.

cada Estado miembro y en cada región, destacándose el importante papel que deben desempeñar los Fondos Estructurales en la creación de más y mejor empleo.

El 31 de julio del mismo año, la Comisión Europea aprobó la cofinanciación del proyecto de estudio y conferencia presentado por RETI, con la participación de todas las regiones miembros de la Asociación, sobre "*Préparer le changement industriel après l'an 2000 – impact de l'élargissement de l'Union Européenne sur les régions industrielles en Europe et ses implications pour l'avenir de la politique structurelle européenne*". La participación del Principado en el proyecto se centró, fundamentalmente, en lo relativo a las intervenciones de los instrumentos financieros comunitarios en las regiones del objetivo 1.

El 11 de noviembre de 1997, las regiones RETI, en la reunión celebrada en Halle (Sachsen-Anhalt), adoptaron un Documento de posición sobre la *Reforma de los Fondos Estructurales después de 1999*, en el que se insistía en la necesidad de abordar los procesos de reconversión de las regiones industriales de Europa mediante una adecuada intervención de los Fondos Estructurales, tanto en el ámbito de las infraestructuras y de los servicios a las empresas como en la formación de los recursos humanos, así como en la oportunidad de adoptar una iniciativa comunitaria específica que abordará los asuntos derivados de las diferentes reconversiones industriales que venían padeciendo estas regiones.

En este sentido, a lo largo de 1997 y la primera mitad de 1998, las Regiones RETI trabajaron conjuntamente en un proyecto de nueva Iniciativa Comunitaria para el período de programación 2000-2006, que llamaron *RESTRUCT*, y cuyo objetivo era incidir en cuatro temas con especial incidencia en estas regiones:

- ✓ *Entorno productivo* (PYME, diversificación, Desarrollo Local, iniciativas de empleo y desarrollo económico comunitario).

- ✓ *Recursos Humanos* (formación profesional y ayudas al empleo, I+D particularmente ligada a la formación para los empleos de futuro).

- ✓ *Planificación y regeneración* (rehabilitación de ruinas industriales abandonadas, incluida la recuperación de terrenos contaminados).

- ✓ *Medio ambiente* (promoción de tecnologías limpias, tratamiento

y reciclaje de residuos industriales y de las aguas residuales).

La Comisión aunque apreció la constructiva propuesta de RETI consideró que los objetivos propuestos para RESTRUCT se incluían entre las acciones que se podían ejecutar tanto el marco del objetivo 1 como del objetivo 2 de la política comunitaria de desarrollo regional.

En 1998, la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos de Europa Central y Oriental constituía, sin duda, un importante reto para los ciudadanos de los países miembros entonces de la Unión. Con la constitución de un "*Comité de Pilotage Est/Ouest*", el 3 de marzo de 1998, la organización RETI pretendía poner a disposición de los actores regionales un forum permanente y flexible en cuyo seno tendrían la posibilidad de manifestar sus expectativas y comunicar sus proyectos. El *Comité de Pilotage,* del que formó parte el Principado de Asturias como miembro fundador del mismo, quería ser un lugar de encuentro privilegiado entre las regiones industriales del Este y del Oeste en el seno de RETI.

Previamente, en la Asamblea General de 1996, las regiones miembros de RETI habían decidido modificar sus estatutos para poder acoger en su seno al conjunto de las regiones industriales de Europa, ""estén situadas geográficamente en el Este, en el Centro o en el Oeste de Europa".

En relación igualmente con la ampliación de la UE, las regiones de tradición industrial de Asturias, Sachsen-Anhal, Renania del Norte Westfalia, Nord-Pas de Calais, Toscana y West of Scotland, participaron, a comienzos de 1999, en la realización de un estudio sobre "*El impacto de la ampliación en las regiones industriales de la Unión Europea*" , en el que se pusieron de relieve las debilidades y fortalezas de estas regiones y la necesidad que tenían de seguir contando con las ayudas de la Unión para concluir sus respectivos procesos de reconversión y fortalecer y diversificar sus tejidos productivos.

1.6. La Asociación de las Comarcas Mineras de la Comunidad Europea (EUR-ACOM)

EUR-ACOM es la Asociación que agrupa a las autoridades locales y regionales de las zonas mineras de la Comunidad Europea. Se creó formalmente en 1991, tras cuatro años de contactos informales entre las autoridades regionales y locales de las comarcas mineras de la Comunidad Europea. Los objetivos que persigue la Asociación son:

- "Aumentar la aportación de recursos a las comunidades mineras de la CE, con el objeto de ayudar a su recuperación económica, social y

medioambiental.

- Ejercer presión a favor de la adopción de políticas energéticas que estimulen la utilización del carbón de la CE.

- Fomentar el intercambio de información y de experiencias y la mutua cooperación entre las autoridades de las comunidades mineras del carbón en toda la Comunidad Europea.

- Trabajar en estrecha colaboración con el Intergrupo de diputados del Parlamento Europeo procedentes de las zonas mineras para garantizar la debida representación de las comunidades mineras".

EUR-ACOM está formada por las organizaciones nacionales representativas de las entidades locales y regionales de las zonas mineras de los distintos Estados miembros de la Comunidad Europea. A estos efectos, en los propios Estatutos de la Asociación, se especifica que las organizaciones nacionales pertinentes serán:

Bélgica: ACOM Belgique.

Francia: ACOM France

Alemania: Zukenftsaktio Kohlegebiete (ZAK)

España: ACOM España

Reino Unido: Coalfield Communities Campaign (CCC).

"La afiliación a la Asociación estará abierta a las organizaciones nacionales de las zonas de la minería del carbón que se constituyan en los demás Estados miembros de la Comunidad Europea".

En sus inicios, EUR-ACOM estuvo presidido por la Eurodiputada asturiana Doña Ludivina García Arias, y Don José Manuel González, Diputado nacional por Asturias, fue uno de los dos vocales que le corresponden a España dentro del Comité Ejecutivo. El Principado de Asturias fue miembro asociado de la organización desde su fundación[159], y los municipios mineros asturianos son miembros de pleno derecho a través de ACOM-España, cuyo primer Presidente, tras su constitución, fue Don Francisco González Zapico. El Secretariado General lo desempeñaba la Coalfield Communities Campaign.

159 - El Principado dejó de ser miembro de ACOM-España y, en consecuencia, de EUR-ACOM, desde el comienzo de la 4ª Legislatura, en 1995.

Desde los primeros contactos mantenidos con el Presidente y el Secretario General de la Coalfield Communities Campaign durante su visita a Asturias, el día 20 de octubre de 1987, y la posterior participación de tres representantes asturianos a la Tercera Conferencia anual de la mencionada Asociación, celebrada en Edimburgo durante los día 23 al 26 de febrero de 1988, el Principado de Asturias se implicó activamente en la preparación de la Primera Conferencia de las Comarcas mineras, celebrada en Estrasburgo, en octubre de 1989 y, posteriormente, participó tanto en el Grupo de Trabajo creado tras la celebración de esa Primera Conferencia de las Comarcas mineras, como en las reuniones del Comité Ejecutivo de EUR-ACOM-, después de constituirse la Asociación, como miembros asociados tal y como se prevé en sus Estatutos, como ya se ha señalado.

EUR-ACOM fue el principal impulsor de la Iniciativa Comunitaria RECHAR, aprobada por la Comisión Europea para promover la modernización y la reconversión de las Comarcas mineras, mediante intervenciones que tenían por objetivo diversificar el tejido productivo de esas comarcas, favorecer la creación de nuevas empresas, en particular PYME, mejorar y/o restaurar el entorno medioambiental, mejorar las prestaciones en servicios a las comunidades mineras, etc.

Finalizado el período de vigencia de la Iniciativa Comunitaria RECHAR, en febrero de 1994, EUR-ACOM creó un Grupo de trabajo, formado por representantes de las Asociaciones nacionales y en el que participó el Principado de Asturias a través de la Oficina de Asesoramiento sobre Comunidades Europeas, para formular observaciones al documento de consulta presentado por la Comisión Europea relativo a *"The future of Community Iniciatives. A first reaction to the draft proposals from D.G. XVI"*, en el que se recogían los seis grandes temas que podrían ser objeto de las próximas iniciativas Comunitarias.

En la propuesta de la Comisión, figuraba una macro Iniciativa, con una asignación de cinco millones de ECU, *"Employment, industrial changes and Small and Médium Size Entreprises"*, en la que se podrían incluir los diferentes sectores en declive, entre los que podría incluirse un RECHARII. Ante esta propuesta, el Grupo de trabajo solicitó la inclusión específica de un nuevo RECHAR con un soporte financiero adecuado, aduciendo que los Gobiernos nacionales podrían optar por otros sectores que no fueran el carbón, como el sector armamentístico, el sector del automóvil, etc., lo que redundaría en perjuicio de las zonas mineras.

El mismo Grupo de trabajo abordó otros temas de interés para las zonas mineras y, en particular, el nuevo Código de ayudas al sector del carbón,

las medidas sociales de la CECA y la cooperación con los países de Europa Central y del Este. En relación con el Código de Ayudas, el Grupo de trabajo había propuesto la inclusión de la "seguridad de aprovisionamiento" entre los objetivos que se pretendían conseguir, así como el mantenimiento de los criterios de competitividad del carbón europeo en el mercado mundial, que no fue tenido en cuenta por la Comisión en la normativa adoptada.

Por lo que se refiere a las medidas sociales de la CECA, el Grupo de trabajo propuso la necesidad de preservar los campos de intervención de la CECA en cuanto a medidas sociales se refiere: readaptación profesional, viviendas sociales, etc. y que en el futuro, una vez expirase el Tratado CECA, estas medidas pudieran incluirse en el Tratado de la Comunidad Económica Europea.

Posteriormente, los días 4 y 5 de julio de 1994, se celebró en León una Conferencia para la constitución de los Grupos Consultivos de Acción Social. Estos Grupos se concibieron como un intento de coordinar la acción de los distintos fondos que operan en las Comarcas mineras y de hacerlos más transparentes y operativos, a la vez que se centra su atención en las propias comarcas mineras. Estos Grupos integran a los Agentes sociales presentes en las comarcas mineras, y se le atribuyen funciones consultivas. Por lo que respecta a España, se propuso la creación de estos Grupos Consultivos de Acción Social en Asturias, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Los grupos regionales se coordinan a través de un Comité Consultivo Nacional que permita el intercambio de experiencias para un mejor aprovechamiento de esta iniciativa[160]. La ratificación de la existencia de estos Grupos Consultivos se ratificó en la Conferencia anual de la Asociación celebrada en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo en noviembre del mismo año.

En el mismo mes de noviembre, representantes del Principado de Asturias junto con los de otros países de la UE y de la Europa Central y Oriental participaron en un Seminario relativo a *"Regenerating Europe's Coalfields"*, celebrado en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, en el que se puso de manifiesto la existencia de una cultura y una herencia común en todas las comarcas mineras de Europa, al mismo tiempo que se demandaba a la instituciones comunitarias un apoyo sostenido para mejorar las oportunidades de vida y de trabajo en las comunidades carboneras. Los representantes de Europa Central y Oriental, por su parte, solicitaron a los de los países de la Unión Europea una mayor cooperación en el ámbito

160 - El Comité Consultivo de Acción Social de Asturias está formado por: 1 Representante de los Ayuntamientos miembros de ACOM España; 1 Representante del Principado de Asturias; 1 Representante de la Empresa Nacional HUNOSA; 1 Representante del SOMA-FIA-UGT; 1 Representante de CCOO de la Minería de Asturias; y 1 Representante de FUCOMI.

energético, particularmente en lo relativo a las tecnologías limpias del carbón, y en lo relativo a los planes de regeneración y desarrollo de las comunidades carboníferas.

1.7. La Asociación de Regiones con Poderes Legislativos (REGLEG)

El significado de "región" es muy controvertido y no existe una única definición al respecto. La inexistencia de una noción europea uniforme no es sino la consecuencia de la dificultad tipológica de resumir en un concepto unitario entidades absolutamente dispares.

La Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) en su Declaración sobre el regionalismo[161], aunque en el preámbulo de la misma considera que "*las regiones tienen estatus diferentes en función de la historia, de la cultura y los principios constitucionales que marcan la organización territorial de cada Estado. (...)*", que las diversas "*regiones tienen orígenes y funciones diferentes, en el sentido de que algunas albergan desde hace mucho tiempo comunidades, etnias e, incluso, naciones diferenciadas, mientras otras han sido creadas como distritos administrativos que ejercen funciones delegadas por el Estado*", define la región como "*el Ente Público territorial de nivel inmediatamente inferior al Estado, dotado de autogobierno político*"[162], quizás con la sola pretensión de promover y profundizar el regionalismo en Europa, y al mismo tiempo evitar agravios comparativos en el funcionamiento institucional en el marco del asociacionismo europeo de regiones, e incluso en el ámbito de ciertas organizaciones europeas y propiamente comunitarias, como podría ser el caso del propio Comité de las Regiones.

Sin embargo, en la Europa de hoy es evidente la coexistencia de regiones con una organización y unas funciones de orden exclusivamente administrativo, inspirado en el régimen local aunque llevado a una escala superior, y regiones que conforman un territorio basado en una autonomía política, con sus correspondientes estructuras y sus funciones bien delimitadas. Esta última realidad es la que ha dado lugar a que las "regiones con competencias legislativas" se hayan convertido en un tipo cualificado de "región"[163].

161 - Adoptada en Basilea por la Asamblea General de la Asociación el 4 de diciembre de 1996.
162 - Artículo 1 de la Declaración sobre el Regionalismo en Europa.
163 - Sobre las regiones con competencias legislativas es muy esclarecedor el trabajo de Alberto Arce Janáriz, "*Las Regiones Legislativas de la Unión Europea*", Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, número 7, diciembre 2002, pp. 3-16.

En este contexto, REGLEG tiene sus raíces en el reconocimiento del concepto de "*región con poderes legislativos*" recogido en un importante documento del Consejo Europeo: la Declaración de Laeken, así como en el empeño de cooperación regional de las regiones con poderes legislativos para implicarse decididamente en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental (CIG) del año 2000 sobre el futuro de la Unión Europea.

Así, REGLEG es una Asociación informal de cooperación de 74 regiones con poderes legislativos en el interior de la Unión Europea, de Bélgica, Alemania, Austria, Italia, España, Portugal, Finlandia y Reino Unido. Su objetivo es el de desempeñar un mayor papel en la UE; es decir, incrementar el estatuto legal y político de las regiones con poderes legislativos en todos los ámbitos de la gobernanza de la Unión Europea, legislativo, ejecutivo y judicial, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. Esto conlleva, entre otras cosas, una mayor participación en el Consejo, una participación más adecuada de los Parlamentos regionales y el derecho de recurrir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea para garantizar sus prerrogativas.

El 15 de noviembre de 2001, se aprueba en Lieja una Resolución sobre la organización de la cooperación entre las regiones con poderes legislativos, que ya se había esbozado en una precedente reunión en Barcelona, el 24 de noviembre de 2000, donde se celebró la primera Conferencia de los Presidente de las Regiones con Poderes Legislativos. En la mencionada Resolución se crea un Comité de Coordinación formado por entre una y cuatro regiones con poderes legislativos: 4 Regiones por Alemania, España e Italia; 2 Regiones por el Reino Unido, Austria y Bélgica; y 1 Región Portugal y Finlandia[164]. Este Comité de Coordinación es el encargado de la organización de la Conferencia Anual de los Presidentes, que tienen un papel predominante en la orientación política de la Asociación, y garantiza la continuidad de los trabajos que se llevan a cabo por la misma. Puede, igualmente, organizar Conferencias temáticas sobre temas de especial interés y relevancia.

El Presidente de REGLEG se elige por un período de un año, de noviembre a noviembre, y suele ser el Presidente de la región en la que se celebra la Conferencia anual. La "Troika" es la reunión del Presidente en ejercicio, el que le precedió en el cargo y el que será el nuevo Presidente, y tiene el cometido fundamental de dinamizar la cooperación política entre las regiones miembros en todos aquellos temas relacionados particularmente con la actualidad de la Unión Europea, para promover e impulsar la toma de posición de las regiones con poderes legislativos.

164 - Por España, forman parte del Comité de Coordinación las Comunidades Autónomas de Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco.

La primera manifestación pública de las regiones con poderes legislativos tiene lugar en Bruselas, el día 20 de septiembre de 2000, mediante la difusión del documento "*Common position paper of the constitucional regions regarding the IGC*"[165], en el que, con motivo de la Conferencia Intergubernamental (CIG) se presentan una serie de propuestas para modificar el Tratado de la Comunidad Europea, entre otras: reconocimiento del Comité de las Regiones como institución de la Unión Europea; posibilidad de recurso del Comité de las Regiones ante el Tribunal de Justicia, en las mismas condiciones que lo hace el Parlamento Europeo o el Tribunal de Cuentas; que si el Consejo o la Comisión no toman en consideración los dictámenes del Comité de las Regiones, deban razonar adecuadamente su negativa; que todos los ciudadanos de la Unión puedan escribir a las instituciones, órganos o agencias establecidos en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE y recibir una respuesta, en un plazo razonable, en esa misma lengua.

Como ya se ha indicado, la Primera Conferencia de Presidentes tuvo lugar en Barcelona, durante los días 23 y 24 de noviembre de 2000. En la Declaración final de la Conferencia, además de poner las bases para una más estrecha cooperación entre las regiones con poderes legislativos, se alude al papel de estas regiones en el proceso de unificación europea, aludiendo al riesgo que supone la fuerte descentralización a nivel europeo tanto en el proceso de toma de decisiones como en la distribución de responsabilidades, a la lejanía de los ciudadanos por parte de los responsables de la toma de decisiones, a la consiguiente creación de un déficit en el control democrático.

Se alude, igualmente, a la necesidad del reconocimiento de las múltiples identidades nacionales, preservando la identidad nacional y respetando las identidades regionales o de las propias minorías, así como a un mayor respeto del principio de subsidiariedad a todos los niveles, en particular en las relaciones entre las instituciones europeas, los Estados y las regiones con poderes, y a una mayor implicación de las regiones con poderes legislativos en el proceso de toma de decisiones, cuando estas afecten a sus intereses o a sus responsabilidades.

El desafío de la globalización para las regiones con poderes legislativos es otro de los puntos recogidos en la Declaración final, señalándose que sería un grave error preconizar una mayor centralización, cuando la globalización se basa en una economía de mercado no centralizada, lo que supone para estas

165 - **Esta posición común fue apoyada por las siguientes regiones: Cataluña, País Vasco, Lower** Austria, Upper Austria, Salzburg, Steiermark, Viena, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Burgenland, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Lower Saxony, Rheinland_ Pfalz, Saarland, Thüringen, the German-speaking Community, the French-speaking Community, the Wallon Region, the Brussels Capital Region and Flanders.

regiones importantes posibilidades para la acción.

La Segunda Conferencia de Presidentes de regiones con poderes legislativos se celebra en Lieja, el 15 de noviembre de 2001, con el título "*Towards the reinforced role of the Regions with legislative power within the European Union*", con su presencia en esta Conferencia, el Principado de Asturias se integra como miembro de pleno derecho en la Asociación REGLEG.

En la Declaración final de la Conferencia, además de acoger favorablemente el debate en curso sobre el futuro de Europa y apoyar los objetivos que con el mismo se persiguen –más eficacia, más transparencia, más responsabilidad, mayor legitimidad democrática-, las regiones con poderes legislativos piden tener una plaza en los foros europeos de toma de decisiones y participar activa y directamente en los procesos de toma de decisiones comunitarios, así como que se incremente la participación regional en la definición y gestión de las políticas de la Unión Europea, como signo de una mejor gobernanza en Europa.

Se pronuncian, asimismo, a favor de una delimitación más precisa de las competencias a todos los niveles, en base a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y del respeto de la identidad nacional de los Estados miembros. Piden igualmente que el mandato de la Convención incluye el tema del papel de las regiones con competencias legislativas en tres categorías de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se insiste en particular en el reconocimiento del derecho a poder recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de violación de sus derechos, respetando la Constitución de cada uno de los Estados.

Por otra parte y en relación con el Comité de las Regiones, la Declaración final demanda que se refuerce su papel en el marco del proceso de toma de decisiones comunitarias, así como que el Comité participe como miembro de pleno derecho en los trabajos de la Convención.

En las Declaraciones finales de la Tercera Conferencia de Presidentes, celebrada en Florencia los días 14 y 15 de octubre de 2002, y de la Cuarta Conferencia, celebrada en Salzburgo, los días 11 y 12 de noviembre de 2003, se recogen, respectivamente, las expectativas, las propuestas y las oportunidades que para las regiones con poderes legislativos supone la propuesta de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, tanto en los aspectos políticos como institucionales y, en particular, por lo que respecta a los mecanismos que se arbitran en la propuesta de Tratado para controlar el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, así como

el reconocimiento de las diferentes identidades nacionales, incluidas las regionales y locales.

La Quinta Conferencia de Presidentes se celebró en Edimburgo, los días 29 y 30 de noviembre de 2004, y la Declaración final se aprobó con el sólo voto en contra del Principado de Asturias. En la misma, los Presidentes de las regiones con poderes legislativos se felicitan por la firma, el 20 de octubre de 2004, del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, recogiéndose casi exhaustivamente las disposiciones del mencionado Tratado Constitucional que hacen referencia al papel que se le asigna a las regiones y, en particular, a las regiones con poderes legislativos.

Sin embargo, considerando las disposiciones del Tratado un paso positivo importante para una mayor implicación de las regiones en los asuntos europeos, ven necesario nuevos avances, tales como: que los Estados miembros designen a determinadas de sus regiones como "Partners of the Union", con específicos derechos a nivel europeo, ya que estas regiones tienen competencias exclusivas y competencias compartidas con los Estados miembros; el derecho de las regiones con poderes legislativos de recurrir directamente al Tribunal de Justicia para proteger sus prerrogativas o cuando las instituciones europeas se excedan en sus competencias; que el Comité de las Regiones sea una institución de pleno derecho; el establecimiento de normas básicas para la cooperación transfronteriza e interregional, etc.

En la Declaración de Munich, ciudad en la que se celebró la Sexta Conferencia, los Presidentes toman nota del rechazo al Tratado Constitucional en los referendos celebrados en Francia y los Países Bajos, se remiten a la decisión del Consejo Europeo de junio de 2005 de abrir un período de reflexión para organizar "amplios debates sobre el Tratado Constitucional y el futuro de Europa y, al mismo tiempo, manifiestan que "ahora, igual que antes" apoyan el Tratado Constitucional que incluye disposiciones beneficiosas no sólo para las regiones con poderes legislativos sino también para el conjunto de los europeos".

Por otra parte, sobre la situación política actual de la Unión Europea, señalan que la crisis en estos momentos de la UE "refleja una inquietud profundamente instalada en muchos ciudadanos de la UE" y, por tanto, consideran que para reestablecer la confianza de los ciudadanos en la Unión, se requiere, en particular: afirmar el respeto por el principio de subsidiariedad y la ampliación del mecanismo de alerta temprana de forma voluntaria, lo que implicaría, por principio, que la Comisión Europea consultase a las regiones con poderes legislativos cuando proponga normas que afecte a sus competencias.

Del mismo modo, consideran que la legislación y las iniciativas políticas que se adopten respondan a las circunstancias regionales y locales para que tengan la máxima legalidad posible. Así, la Comisión debería hacer el máximo uso posible de la legislación marco, dejando a las autoridades nacionales, regionales y locales la opción en cuanto a la forma y el método para alcanzar los resultados deseados.

Por lo que se refiere, finalmente, al Comité de las Regiones, los Presidentes consideran que tiene un importante papel que jugar a la hora de evaluar la conformidad de las propuestas legislativas con el principio de subsidiariedad, y abogan por que se establezcan las disposiciones internas pertinentes que les permitan dar una respuesta efectiva a las propuestas de la Comisión. Preconizan, al mismo tiempo, la creación de un grupo interregional de las regiones de las regiones con poderes legislativos, según el artículo 10 del Reglamento interno del CdR, que realzaría la visibilidad de estas regiones en el seno del Comité.

2. OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL

Además de los programas y proyectos en los que ha participado y participa el Principado de Asturias en el ámbito de la cooperación interterritorial europea, a alguno de los cuales ya hemos hecho mención anteriormente, existen otros programas y proyectos en lo que esta Comunidad Autónoma ha participado o participa, y que merecen algunas consideraciones.

2.1. El programa "OUVERTURE"

El programa OUVERTURE se gestó durante los últimos meses de 1990, y tras ser aprobado por la Comisión Europea, se autoriza la participación del Principado de Asturias mediante un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de abril de 1991. En efecto, este ambicioso proyecto de cooperación interregional financiado por la Comunidad Europea, y dirigido a promover la cooperación entre las entidades regionales y locales de la Comunidad con sus homólogos de los países de Europa Central y Oriental, se gestionó por las regiones de Strathclyde (Reino Unido), que desempeñó el papel de región directora, Principado de Asturias (España), Piamonte (Italia) y Sarre (Alemania).

Cada una de esas cuatro regiones tiene asignadas para su coordinación, dentro de la red, ciertas áreas geográficas. A Asturias le correspondió la gestión del programa en relación con Portugal y España, teniendo asignada Bulgaria entre los países de Europa Central y Oriental. Aunque en principio estaba previsto que tuviera carácter trianual, concluyendo a finales de 1993, el éxito conseguido en la promoción de proyectos provocó que la Comisión Europea lo prorrogase por un año, hasta finales de 1994, a la vez que se ampliaba su dotación. El acuerdo entre las cuatro regiones para continuar con la ejecución del programa se firmó en Oviedo, el día 22 de abril de 1993.

Se organizaron cuatro jornadas de información combinando la promoción del programa con la difusión de la información sobre la cooperación con los países de Europa Central y Oriental, que se celebraron en Madrid, Oviedo, Murcia y Mérida. Igualmente, desde el lanzamiento del programa, se organizaron diferentes seminarios dirigidos al personal técnico de las diferentes Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y Municipios en España y Portugal con el fin de familiarizarlos con los métodos de trabajo, la búsqueda de socios, el diseño, seguimiento y evolución de los proyectos.

Por otra parte, se establecieron contactos con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y con el programa PHARE con el fin de

canalizar hacia ellos los proyectos que el programa OUVERTURE no podía financiar y, en general, para suministrarles la información que OUVERTURE podía recopilar sobre el terreno. Además, las cuatro regiones gestoras del programa difundieron entre la comunidad empresarial los objetivos y el contenido del mismo, con objeto de promover e impulsar los intercambios entre el Este y el Oeste y las inversiones directas en aquellos países

El programa prestaba apoyo financiero a iniciativas de cooperación en múltiples campos, agrupados en cuatro grandes capítulos: desarrollo económico local, incluida la promoción de la exportación; organización de la administración local y regional; planificación y ordenación del territorio; y gestión del medio ambiente. Estas iniciativas podían ser presentadas por cualquier entidad local o regional comunitaria. En las primeras convocatorias se presentaron un total de 176 solicitudes que pedían subvenciones por valor de casi diez millones de Ecus.

El programa desarrolló asimismo diversas iniciativas, como una base de datos con más de 1.000 referencias de entidades locales y regionales de la Comunidad Europea y los países de Europa Central y Oriental, o actividades de investigación sobre la situación política y económica en estos últimos países.

El Principado de Asturias, como coordinadora del programa en relación con Bulgaria, estableció una especial relación con el Ministerio de Desarrollo Regional de la República de Bulgaria, que se reforzó con la visita del Ministro, Señor Karadimov, a Asturias en junio de 1992, que se continuó y reforzó con la celebración en Sofia, en marzo de 1993, de un Seminario sobre organización administrativa y desarrollo económico regional, con el fin de proporcionar a las autoridades búlgaras elementos de juicio para la puesta en marcha de sus reformas.

Además de la gestión del programa, el Principado de Asturias participó en diferentes proyectos concretos cofinanciados por OUVERTURE, entre otros, cabe destacar los siguientes:

- ✓ Intercambios de experiencias en los ámbitos de la ordenación del territorio y el medio ambiente, fundamentalmente en la gestión de los recursos naturales. Fueron socios en el proyecto: Condado de Mid Glamorgan (Gales), Ayuntamiento de Burgas (Bulgaria) y Principado de Asturias.

- ✓ Intercambio de experiencias en materia de selección y formación de personal al servicio de las administraciones públicas. Socios: Las regiones italianas de Molise y Piamonte, la región de Patras,

Pest y Principado de Asturias.

- ✓ Establecimiento de lazos comerciales, preparación para la asistencia a ferias y períodos de formación en prácticas. Los socios fueron, en este caso, la región inglesa de Warsall, la región de Ustinad Labem en la República Checa y el Principado de Asturias.

Por último, cabe reseñar que, como consecuencia de la participación del Principado en la red OUVERTURE, se recibieron numerosas ofertas de cooperación en campos diferentes de los específicos del programa. Estas ofertas, algunas de la cuales se realizaron con o sin la participación de la Comunidad Autónoma, procedían tanto de las regiones socias de OUVERTURE como de otras entidades locales y regionales europeas que buscaban socios para la realización de proyectos de cooperación, no sólo en Asturias sino en el resto de España.

Entre otras, se pueden destacar las siguientes: creación de una Red de autoridades locales dependientes de la industria química, recibida de Cleveland Couty Council; Cooperación lingüística entre escuelas de hostelería, recibida de Strathclyde Regional Council; Cooperación entre ciudades "encrucijada" en materia de logística de transportes, enviada por Triade Consultores, en representación de las ciudades de Le Havre, Southamton, Pisa, etc.; Red de Tribunales Arbitrales para las PYME, promovida por diversas Cámaras de Comercio Comunitarias; etc.

2.2. Iniciativa Comunitaria INTERREG

Desde la reforma de los Fondos estructurales de 1988, con motivo de la entrada en vigor del Acta Unica Europea, la Comisión Europea puso especial énfasis en los programas de cooperación interterritorial, fundamentalmente a través de la Iniciativa Comunitaria INTERREG. Sin embargo, ya al comienzo de los años noventa del pasado siglo, la Comisión Europea lanzó el programa RECITE con objeto de fomentar la cooperación interregional mediante intercambios de experiencias y buenas prácticas entre las regiones de la Comunidad, que hemos comentado más arriba.

En efecto, las Iniciativas Comunitarias son definidas por la propia Comisión Europea con el objetivo de completar las intervenciones de los Fondos estructurales en determinados ámbitos. Así, la Iniciativa INTERREG, que se ha ido prorrogando en los últimos períodos de programación, aunque con algunas modificaciones, tiene como objetivo fundamental estimular la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional

La Iniciativa Comunitaria INTERREG fue adoptada en 1990 y su objetivo era el de preparar las zonas transfronterizas para un mercado interior sin fronteras. Por otra parte, la Iniciativa REGEN, adoptada el mismo año, tenía como objetivo ayudar a completar algunas de las conexiones que faltaban en las redes transeuropeas de transporte y de distribución de la energía en las regiones del objetivo 1. INTERREG II, aprobada para el período de parogramación1994-1999, combina las funciones de INTERREG I y de la Iniciativa REGEN y consta de tres capítulos:

- INTERREG II A (1994-1999): para la cooperación tranfronteriza.

- INTERREG II B (1994-1999): para la finalización de las redes transeuropeas de distribución de energía.

- INTERREG II C (1997-1999): para la cooperación en el ámbito de la planificación regional y, en particular, para la gestión del agua.

Por lo que respecta a INTERREG II, sin pretender ser en modo alguno recoger todos los proyectos en los que ha participado el Principado de Asturias en el marco de esta Iniciativa, nos referiremos únicamente al programa de iniciativa comunitaria aprobado por la Comisión para el "Espacio Atlántico", que es, en nuestra opinión, el de mayor proyección y entidad de los aprobados con participación de nuestra Comunidad Autónoma.

Este programa cubre el período 1997-1999 y contribuye a la ejecución de la IC INTERREG II apartado C, destinada a fomentar una ordenación armoniosa del territorio europeo a través de la cooperación transnacional. El programa cubre la totalidad del territorio de dos Estados miembros (Portugal e Irlanda) y parte del territorio de otros tres Estados miembros (España, Francia y Reino Unido), lo que supone una superficie de más de 900.000 km2 con una población de más de 90 millones de habitantes.

Su objetivo consiste en consolidar la cohesión económica y social en las regiones afectadas y fomentar el desarrollo sostenible a través de medidas de cooperación transnacional que permitan paliar las desventajas a escala regional (especialmente las derivadas del carácter periférico) y aprovechar las posibilidades que ofrece el conjunto de este territorio. La cofinanciación comunitaria, que corre a cargo del Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER), cubre el 55,7% del total de la inversión, mientras que el resto, 44,3%, corre a cargo de las autoridades nacionales y regionales y del sector privado.

El programa consta de cinco subprogramas:

- ✓ Modos e infraestructuras de transporte (estudios estratégicos sectoriales destinados a facilitar el acceso a las redes y la conexión de estas; medidas específicas para el transporte marítimo y aéreo).

- ✓ Investigación y transferencia de tecnología (apoyo a la cooperación técnica y a la creación de redes transnacionales de R&D, sobre todo en el sector de la comunicación).

- ✓ Turismo (diversificación de la oferta y mejora cualitativa de los servicios turísticos).

- ✓ Medio ambiente (promoción de la gestión integrada de las zonas costeras y de la protección de los espacios naturales y de las especies sensibles).

- ✓ Asistencia técnica.

Como ya hemos señalado anteriormente al referirnos al Arco Atlántico, Asturias está especialmente implicada en los proyectos relacionados con la gestión integrada de las zonas costeras y la protección ambiental, liderando en estos ámbitos el Grupo de Trabajo del Arco Atlántico.

Para el actual período de programación (2000-2006), la IC INTERREG III cuenta con tres capítulos y con un presupuesto de 4.875 millones de euros:

- *Capítulo A*: *Cooperación transfronteriza.*
  El objetivo de la cooperación entre zonas contiguas es el desarrollo de centros económicos y sociales transfronterizos mediante la aplicación de estrategias comunes de desarrollo.

- *Capítulo B*: *Cooperación Transnacional.*
  El objetivo de la cooperación transnacional entre las autoridades nacionales, regionales y locales es fomentar una mayor integración territorial en la Unión gracias a la formación de grandes grupos de regiones europeas.

- *Capítulo C*: *Cooperación Interregional.*
  El objetivo de la cooperación interregional es mejorar la eficacia de las políticas y de los instrumentos de desarrollo

regional mediante un amplio intercambio de información y la participación mutua de las experiencias (integración en redes).

El Principado de Asturias, por su propia posición geográfica, sólo puede evidentemente participar en los Capítulos B y C de la Iniciativa INTERREG. A ellos nos referimos a continuación.

Los ejes prioritarios y las medidas del Capítulo B de INTERREGIII deben contribuir, en el contexto del fomento de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible, a la integración económica y social y al desarrollo de los ámbitos de cooperación de que se trate. Estos ejes son[166]:

- ✓ Estrategias de ordenación territorial, incluida la cooperación entre ciudades y entre zonas rurales y urbanas con el fin de fomentar el desarrollo polimétrico y sostenible (entre otras medidas, se propone la elaboración de perspectivas de ordenación territorial para el territorio transnacional; el desarrollo de la cooperación entre las zonas metropolitanas y las "ciudades portal"; cooperación en temas de investigación y desarrollo y acceso a la innovación; etc.).

- ✓ Desarrollo de sistemas de transporte eficientes y sostenibles y mejora del acceso a la sociedad de la información (medidas relacionadas con la mejora del acceso a las redes y centros de transporte nacional y transnacional; fomento de la intemodalidad y la transición hacia modos de transportes más compatibles con el medio ambiente; desarrollo de aplicaciones y servicios telemáticos; desarrollo de las conexiones en redes y las agrupaciones virtuales; etc.).

- ✓ Promoción del medio ambiente y de la buena gestión del patrimonio cultural y de los recursos naturales, concretamente de los recursos hídricos (en este tercer eje, se proponen medidas como contribuir al crecimiento de la Red ecológica europea Natura 2000; rehabilitación creativa de los paisajes culturales degradados por la actividad humana; promoción innovadora de la riqueza natural y cultural de las regiones rurales; gestión concertada de las aguas litorales; promoción de las energías renovable; etc.).

- ✓ Prioridades específicas. Entre otras medidas se propone la cooperación integrada entre las regiones marítimas e insulares, la cooperación integrada entre las regiones ultraperiféricas, etc.

166 - Comunicación de la Comisión s los Estados miembros de 28 de abril de 2000, por la que se fijan las orientaciones para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo – INTERREG- y DOUE C 226, de 10 de septiembre de 2004.

En este apartado B de la Iniciativa INTERREG, y en el marco del "Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE)", alguno de los proyectos en los que ha participado el Principado de Asturias son:

- *ECOVERGER. Desarrollo económico y medioambiental de las plantaciones de tallo alto en el SUDOE*[167].

Su objetivo es la elaboración de una estrategia común de acciones, a escala del Sudoeste europeo, pensando en la preservación sostenible de los huertos frutales de pleno viento y los sistemas agrícolas forestales tradicionales mixtos.

- *REPPARP. Rede de desarrollo territorial para la gestión y la valorización de los yacimientos arqueológicos de arte prehistórico y de las primeras civilizaciones*[168]

El objetivo de este proyecto es valorizar la riqueza del arte prehistórico en el Sudoeste europeo.

- *CYBER@L. Banda ancha para las zonas rurales*[169].

El objetivo del proyecto, que lidera el Instituto de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, consiste en examinar simultáneamente las consecuencias, sobre varios territorios rurales, de un servidor de banda ancha recurriendo a diferentes técnicas como el satélite y el hilo telefónico.

Por lo que se refiere al "Espacio Atlántico" y dentro del mismo apartado B de INTERREG, el Principado de Asturias participa, entre otros, en los siguientes proyectos:

- *EDEA. Estudio para la elaboración de un Esquema de Desarrollo*

167 - Participan en el proyecto, entre otros entes, la Fundación 2001 Global Nature (ES), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Asturias-ES), la Fédération RENOVA (FR), la Intercomunalidad de la Comarca de la Sidra (ES), la Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica (ES), etc.
168 - Son socios en el proyecto, entre otros, Consejería de Cultura y Turismo-Gobierno de Aragón (ES), Asociación para el Desarrollo Rural de Castilla la Mancha (ES), Conselleria de Cultura y Educación-Generalitat Valenciana (ES), Red Asturiana de Desarrollo Rural (ES), Conseil General de l'Ariège (FR), Junta de Andalucía-Consejería de Cultura (ES), etc.
169 - Son socios en el proyecto el Conseil General du Lot (FR), Universidade de Aveiro (PT), Agence Lotoise de Développement (FR) y el Instituto de Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

policéntrico del Espacio Atlántico[170].

El objetivo del estudio es aportar una visión territorializada del policentrismo atlántico identificado sus condiciones de puesta en práctica y sugiriendo orientaciones estratégicas y medidas que sean compartidas por el conjunto de los entes territoriales. Se trata así de evaluar los posibles contornos de un modelo policéntrico atlántico, su pertinencia, sus posibles declinaciones territoriales y la identificación de las condiciones políticas de puesta en práctica en los diferentes niveles de responsabilidad.

- *COASTATLANTIC. Ordenación integrada de las zonas costeras*[171].

El objetivo del proyecto, que lidera la Dirección General de Ordenación del Territorio del Principado, es estimular un crecimiento saludable y sostenible de las zonas costeras desde el punto de vista medioambiente, económico y social, por medio de la promoción de una planificación integrada espacial y poniendo en práctica su ordenación.

- *EURATLANTIC. Promoción económica común en América del Norte de las regiones atlánticas francesas, españolas y portuguesas.*

El proyecto, en el que participan prácticamente todas las regiones de la facha Atlántica de Francia, Portugal y España, pretende la promoción económica en común, en todos sus aspectos, de estas regiones en relación con América del Norte, mediante la realización de actividades conjuntas.

En el aparto C de INTERREG III los ejes prioritarios de intervención[172] pueden resumirse en los siguientes:

- Todas las actividades subvencionadas en virtud de los objetivos 1 y 2 de los Fondos Estructurales, fomentando la cooperación directa entre las autoridades públicas u organismos equivalentes de toda Europa, en particular, mediante el intercambio de información y de experiencias.

- La cooperación interregional que vincule a autoridades públicas

170 - Participan en el proyecto las regiones de Baja Normandia, Bretaña, Aquitania, Países del Loira, Poitou-Charentes, Centro Portugal, Alentejo, Lisboa y Valle del Tajo, Andalucía, Galicia, Principado de Asturias, Navarra, Castilla y León, Cornwal County Council, Mid-West Regional Authority, Argyll & Bute, Welsh Assembly.
171 - Son socios del proyecto los siguientes entes: Conseil Regional de Aquitania, Conseil General de la Gironde, Cornwall County Council, The Highland Council, Galway, Cardiff University, The Nacional University of Ireland, Principado de Asturias, Xunta de Galicia, Mancomunidad de Aguas "Costa de Huelva", DRAOT – Alentejo, Area Metropolitana de Lisboa.
172 - DOUE C 141, de 15 de mayo de 2001.

u organismos equivalentes en otros programas de INTERREG. El objetivo de este eje es permitir los intercambios de experiencias y la conexión en redes entre zonas transfronterizas o transnacionales.

- La cooperación interregional en el ámbito del desarrollo urbano.

- La cooperación interregional que vincule a regiones que participan en uno o varios de los tres temas de las acciones regionales innovadoras: economías regionales basadas en el conocimiento, e-EuropaRegio: la sociedad de la información al servicio del desarrollo regional, y identidad regional y desarrollo sostenible.

- Otros temas, como la cooperación marítima y costera, la planificación territorial, etc.

En este apartado, el Principado de Asturias participa en proyectos tales como la "*Red Europea de Regiones Químicas (ECRN)*", "*Transferencia de estrategias económicas y de acceso al mercado en regiones europeas (EURBEST)*", o el relativo a "*Impulsar el uso de la tecnología, la innovación y la sociedad de la información a favor de la competitividad (ESTIIC)*".

En todo caso, con este tipo de proyectos de cooperación interregional se pretende mejorar la eficacia de las políticas e instrumentos de desarrollo y cohesión regionales mediante la conexión en redes, particularmente para las regiones menos desarrolladas y las que sufren procesos de reconversión.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Europa comunitaria fue, durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, un referente para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país en los ámbitos político, económico, social o cultural. Y lo fue, precisamente, porque los Estados miembros de la entonces Europa de los "seis" compartían unos valores basados en la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales y en la profundización de la democracia, los mismos valores cuyo ejercicio el régimen del General Franco nos negaba a los españoles.

Por ello, no es de extrañar que sólo unas semanas después de las primeras elecciones generales de 1977, el 26 de julio de ese año, el Presidente del Gobierno español solicitara formalmente, al entonces Presidente del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, Henri Simonet, la apertura de negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, "negociaciones que conduzcan en un plazo de tiempo razonable a resultados satisfactorios para la Comunidad Económica Europea y para España".

Cuando el 5 de febrero de 1979 se inauguran formalmente en Bruselas las negociaciones para la adhesión de España, en nuestro país se está comenzando a desarrollar el Estado de las autonomías que se establecía en la Constitución de 1978.

Si bien la Unión Europea es una organización internacional formada por Estados, basando el funcionamiento de su sistema jurídico "en la relación entre la Comunidad y el Estado", es igualmente una organización de integración que se nutre de competencias atribuidas por los Estados miembros, muchas de las cuales en aquellos Estados con estructura compleja – sean Estados federales, regionales o autonómicos -, y de acuerdo con sus respectivos ordenamientos internos, son de competencia federal, regional o, en nuestro caso autonómica.

En este sentido, responsables políticos de algunas de las Comunidades Autónomas, aunque no sólo ellos, alertaron, desde el inicio del proceso de negociación, del "efecto bumerán" que podría suponer la integración en las Comunidades Europeas en la medida en que podía representar una involución, una vuelta a la "renacionalización", a la centralización de las competencias que las Autonomías habían asumido en virtud de sus respectivos Estatutos de autonomía. Incluso en los primeros años de la pertenencia de España a las Comunidades Europeas, se dudaba de la capacidad y del papel que las recién constituidas Comunidades Autónomas podían desempeñar en el proceso de integración europea, más preocupadas, en efecto, por diseñar su estructura institucional y por asumir las competencias que les habían sido transferidas.

No obstante, bien pronto se hizo patente que no sería posible la plena y completa integración de nuestro país en la Europa comunitaria sin la implicación activa de las Comunidades Autónomas.

En Asturias, para hacer efectiva, eficaz y lo más transparente posible para los ciudadanos la participación del Principado en los asuntos relacionados con la Unión Europa, la participación de las instituciones autonómicas ha sido de trascendental importancia. Aunque no sea objeto de este trabajo, es preciso señalar el destacado papel de la Junta General del Principado contribuyendo a la creación y al desarrollo de la Conferencia de las Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE), que se constituyó en Oviedo en 1997. Es igualmente relevante tanto su participación en el proyecto piloto del Comité de las Regiones, en representación del conjunto de las instituciones autonómicas españolas, para el control de la aplicación del principio de subsidiariedad, como el haberse adherido a las legítimas pretensiones de los Parlamentos nacionales para participar en los procedimientos de tomas de decisiones de la Unión Europea.

Por lo que respecta a la participación del Principado de Asturias en los asuntos comunitarios europeos, objeto de este trabajo, el Gobierno regional, desde el inicio de la primera legislatura en 1983, fue consciente de la transcendencia que tendría para Asturias la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Aunque las Comunidades Autónomas apenas pudieron participar en las negociaciones de adhesión, limitándose el Gobierno de la Nación a informar de los avances de las condiciones del Tratado de adhesión en reuniones habidas en 1984 y 1985, el Gobierno asturiano creó ya en 1984, con perspectiva de futuro, la Comisión de Seguimiento y Estudio de las Negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

La mencionada Comisión, compuesta por representantes de los grupos políticos de la Junta General de Principado y por los interlocutores sociales, no tenía otro objetivo que el de evaluar el impacto de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en los diferentes sectores de actividad en nuestra región. De hecho, las conclusiones del estudio que se realizó sobre el impacto de la adhesión en Asturias, por encargo de la Comisión, pusieron de manifiesto la especial incidencia que tendría en los sectores tradicionales de la industria asturiana, el carbón, la siderurgia y el sector naval, así como en los sectores de la producción de leche y carne de vacuno, lo que requería, entre otras cosas, acelerar los procesos de reconversión y diversificar el tejido productivo asturiano.

A comienzos de 1985, con el objetivo de ir dotando a la Administración regional de la estructura orgánico-administrativa necesaria para hacer frente a las exigencias de la ya inminente adhesión de España a las Comunidades Europeas, se crea la Oficina de Asesoramiento del Principado de Asturias en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas (OFACE), pionera en nuestro país, que fue el antecedente de lo que hoy es la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Las competencias, no obstante, siguen siendo básicamente las mismas: asesoramiento, información, formación y coordinación de los asuntos jurídicos e institucionales relacionados con la Unión Europea.

La coordinación de lo asuntos europeos no ha sido nunca en el Principado tarea fácil; sobre todo cuando se ha concebido la función del órgano de coordinación como la de asumir o "usurpar" las competencias de otros departamentos. Sin embargo, cuando se ha entendido en sus justos términos, como "la concertación de medios, esfuerzos, información, etc. para una acción común" sin ningún tipo de subordinación y cada uno asumiendo y ejerciendo sus propias competencias, los resultados han sido muy satisfactorios.

Nos referiremos, a título ejemplarizante, a dos actuaciones del Principado de Asturias, una de 1986, el año mismo de la adhesión, y la otra de 2006, cuando celebramos el 20º aniversario de la misma, en las que la actuación conjunta y coordinada de diferentes departamentos de la Administración regional obtuvo excelentes resultados.

En el segundo semestre de 1986, una delegación del Principado, presidida por el entonces Consejero de la Presidencia y con participación de representantes de la OFACE (en este caso el órgano coordinador), de las Consejerías de Hacienda y Economía, de Industria, de Trabajo y del Instituto de Fomento Regional, se desplaza a Bruselas para mantener los primeros contactos con los responsables comunitarios de política regional, de la política agrícola común (PAC) y, en particular, del FEOGA-Orientación, del Fondo Social Europeo y con el Director de los asuntos sociales de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Toda la delegación conocía y compartía los objetivos que se perseguían, interviniendo cada Departamento en los ámbitos de sus competencias.

El resultado de esta actuación conjunta y coordinada fue, por una parte, la aprobación, en 1987, del Programa Nacional de Interés Comunitario (PNIC) de Asturias, el primero que se aprobó para nuestro país, y que fue un ensayo piloto en Europa de lo que sería la nueva programación y financiación comunitaria de los Fondos estructurales tras la reforma de 1988. Por otra parte, tras la necesaria creación del Comité Regional de Viviendas Sociales

CECA, se comienza a participar en los diferentes programas de construcción o de rehabilitación de viviendas para los trabajadores del carbón y del acero con cofinanciación comunitaria.

En todo caso, la coordinación de los diferentes departamentos de la Administración regional en lo relativo a los asuntos europeos, entendida como la concertación de medios, esfuerzos, información, etc. para una acción común sin ningún tipo de subordinación y cada uno asumiendo y ejerciendo sus propias competencias, reviste en nuestros días mayor importancia. En efecto, la aplicación efectiva y el control de principio de subsidiariedad conlleva una mayor implicación de los entes territoriales en el diseño, seguimiento, evaluación y aplicación de las diferentes políticas de la Unión y ello exige una concertación efectiva de los diferentes departamentos de nuestra administración para que las medidas que se adopten sean realmente eficaces.

En este sentido, la Comisión de Coordinación para los Asuntos Europeos que, de hecho, ya existe en el Principado, puede desempeñar un papel de especial importancia. Sería pues necesario reforzar institucionalmente el papel de esta Comisión para que realmente sea el foro en el que se pongan en común la información, las actuaciones que se estén realizando o los proyectos que se pretendan ejecutar, la participación del Principado en los mecanismos existente para la participación de nuestra Comunidad Autónoma en los procesos de toma de decisiones comunitarios así como el intercambio de experiencias en relación con las políticas o los programas europeos, siempre respetando las competencias de cada departamento en sus ámbitos de actuación pero colaborando lealmente y avanzando todos en la misma dirección.

En el Comité de las Regiones, hoy por hoy el único órgano de la Unión con participación de los Entes regionales y locales, el Presidente del Principado o, en su caso, su miembro suplente, desde su puesta en funcionamiento en 1994, ha participado de forma activa tanto en las sesiones plenarias como en las Comisiones de las que en cada momento ha formado parte el Principado, canalizando las iniciativas y las propuestas de interés para el Principado de Asturias.

Aunque sea un órgano meramente consultivo, el Comité de las Regiones está sabiendo reflejar la necesidad y la importancia de los poderes locales y regionales en la construcción europea, y su influencia en el proceso de toma de decisiones de la Unión, especialmente en defensa de los intereses regionales y locales, es cada día más relevante. Como ejemplo de lo que decimos, se puede señalar el proyecto de Dictamen sobre las Ayudas de Estado con finalidad regional para el período de programación 2007-20013,

recientemente presentado y defendido eficazmente por el Presidente del Principado, y aprobado por unanimidad por el Pleno del Comité, que indujo a la Comisión Europea a modificar su propuesta originaria de Directrices para este tipo de ayudas, en aquellos aspectos que eran especialmente perjudiciales para las regiones afectadas por el "efecto estadístico", como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma.

No obstante, si el balance de nuestra participación durante los últimos quince años en este órgano consultivo es bastante satisfactorio, es necesaria o quizás imprescindible, una mayor implicación de las distintas Consejerías en los trabajos del Comité. En efecto, en todos los ámbitos que afectan directamente al desarrollo local y regional es preceptivo, aunque no sea vinculante, un Dictamen del Comité de las Regiones. La posibilidad de realizar enmiendas y modificaciones a las propuestas de la Comisión en materia de educación, cohesión, salud, empleo, transportes, medio ambiente, sociedad de la información, etc., cuando estas pueden perjudicar los intereses regionales o locales y, en especial, los de nuestra Comunidad, pueden ser especialmente relevantes a la hora de la adopción de las normas o de los programas pertinentes.

Si desde las propias instituciones de la Unión Europea se nos dice que "las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos", nadie mejor que los distintos departamentos de nuestra administración, por el conocimiento que cada uno de ellos tiene de nuestra realidad regional en el ámbito de sus respectivas competencias, para proponer aquellas medidas que serán las más beneficiosas para el desarrollo integral del Principado. Por ello, la participación y la implicación de cada uno de ellos en los trabajos del Comité de las Regiones adquiere una mayor dimensión en un momento en el que se pretende reforzar y controlar la aplicación del principio de subsidiariedad en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

Lo mismo podemos decir en relación con la participación en los trabajos de las Asociaciones de regiones de las que forma parte el Principado y en los diferentes programas de cooperación interterritorial. Es evidente que ni de la participación en los Grupos de trabajo de esas Asociaciones ni de la participación en proyectos de cooperación interterritorial se van a obtener recursos comparables a los que se obtienen a través de los Fondos estructurales; pero es igualmente cierto que de nuestra participación en esas actividades de intercambio de experiencias y de "saber hacer" se obtienen resultados muy positivos tanto para la realización profesional del personal directivo o técnico que participa en los mismos, como en la mejora o desarrollo de nuevas actuaciones en nuestra Comunidad Autónoma que ya se han realizado con éxito en otras regiones de la Unión.

La creciente importancia que desde la instituciones comunitarias se da tanto a la cooperación territorial como a los trabajos de las Asociaciones de regiones se refleja en el hecho, por una parte, de que la cooperación territorial es uno de los tres objetivos de la política de cohesión económica y social para el período de programación 2007-2013 y, por otra, la paulatina asociación de las Asociaciones de regiones en el diseño de las políticas comunitarias como es el caso, por ejemplo, de la "Europa del mar" o del desarrollo sostenible del litoral.

En estos como en otros ámbitos de actuación es imprescindible, y lo será cada día más, la implicación y participación de los diferentes departamentos en el diseño, seguimiento, gestión y evolución de los diferentes programas y proyectos que inciden en un desarrollo socioeconómico armonioso y equilibrado de nuestra región. Esta implicación debería ser una apuesta decidida del conjunto de la Administración del Principado de Asturias.

El reto, sin embargo, más importante que tenemos para los próximos años es la participación eficiente y eficaz en las formaciones del Consejo de Ministros de la UE y en sus órganos auxiliares, y esto no sería posible sin el concurso decidido de todas las Consejerías implicadas. En efecto, los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004 entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas sobre la participación directa de las Autonomías en el Consejo de la Unión Europea y en sus órganos auxiliares son de trascendental importancia para la defensa de los intereses del conjunto de las Autonomías y de cada una de ellas en la Unión Europea.

Si casi durante veinte años las Comunidades Autónomas han venido reclamando a la Administración del Estado la participación directa en el máximo órgano de decisión de la Unión Europea, en los Grupos de trabajo del Consejo y en el COREPER, con objeto de defender mejor sus intereses en Europa, ahora que es una realidad, hay que poner todos los medios a nuestro alcance para cumplir de forma solvente los Acuerdos firmados. Aunque con honrosas excepciones, la participación de las Comunidades Autónomas en los trabajos de los Comités de gestión de la Comisión no ha sido precisamente brillante, y era, por llamarlo de alguna manera, "un banco de pruebas" para calibrar la disposición y la capacidad de las Autonomías para integrarse en la delegación española, como miembros de pleno derecho, en los trabajos del Consejo y de sus órganos auxiliares.

La trascendencia de la participación en el Consejo propiamente dicho como en los Grupos de Trabajo del Consejo, como miembros de pleno derecho de la delegación española, es muy superior a la que tiene nuestra participación en los Comités de la Comisión, aunque esto no quiere decir que

no haya que hacer un esfuerzo suplementario para que nuestra participación en esos Comités sea la adecuada y responda a los compromisos que hemos adquirido. No es aceptable decir, como se ha dicho por algunos de los que debían participar en los mismos: "aunque no estemos nosotros, ya están los representantes de Estado que hacen bien su trabajo". Para eso, no valía la pena firmar ningún Acuerdo.

Un día u otro, todas las Consejerías del Principado de Asturias deberán asumir la representación del Conjunto de las Autonomías en el Consejo y en los Grupos de Trabajo, conformar la posición común de las Comunidades Autónomas en el ámbito de que se trate y consensuarla con la del Estado, como ya lo han hecho la Consejería Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ámbito del Medio Ambiente, y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con resultado satisfactorio. Para ello, la implicación de cada una de las Consejerías afectadas vuelve a ser de trascendental importancia

En este ámbito de participación, la coordinación interna entre el departamento correspondiente, la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas y la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, así como con los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) reviste especial importancia. No hay que olvidar que, aunque la Autonomía que ostenta la representación directa en el Consejo y en los Grupos de Trabajo lo hace en nombre del conjunto de las Comunidades Autónomas y en defensa del conjunto de sus intereses, es evidente que nunca se pueden olvidar los intereses específicos, diferenciados y propios de nuestra Comunidad Autónoma.

Con el mayor compromiso posible del conjunto de nuestra Administración, sumando esfuerzos, medios, información y respetando los principios básicos de lealtad y mutua confianza entre las instancias autonómicas y estatal y sintiéndonos corresponsables en la defensa de los intereses del conjunto de los ciudadanos de nuestro país, podemos asumir este importantísimo reto pues contamos con una Administración altamente profesionalizada.

En definitiva, tras estos veinte años de pertenencia a la Europa comunitaria tenemos que consolidar todo lo logrado, reforzar los mecanismos de coordinación interna, aunando esfuerzos, medios y voluntades para avanzar en la misma dirección, actuando cada uno en el ámbito de sus respectivas responsabilidades e implicando al conjunto de la Administración regional en la apasionante tarea de hacer más Europa desde Asturias. Es una tarea de todos.

ANEXO DOCUMENTAL

RESOLUCIÓN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1992, DE LA SUBSECRETARIA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1990, DE LA CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (BOE nº 216 de 08/09/1992)

La Conferencia Sectorial constituida en el Ministerio para las Administraciones Públicas con la estrecha colaboración de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, ha venido ocupándose, desde su puesta en funcionamiento, en 1988, de la articulación, con carácter general, de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos.

En su reunión de 21 de noviembre de 1990, la Conferencia Sectorial adoptó sendos acuerdos sobre dos aspectos de dicha participación. El primero sobre los procedimientos por incumplimiento del Derecho Comunitario. Y el segundo sobre la notificación a la Comisión de las Comunidades Europeas de los proyectos de ayudas públicas.

Firmados los dos Acuerdos por cada una de las Comunidades Autónomas, y por tanto aplicables a las mismas -con la excepción del País Vasco que no ha procedido hasta el momento a su suscripción y a la que por consiguiente no resultan aplicables- se ha estimado oportuno su publicación oficial para favorecer su conocimiento y aplicación.

A tal fin, a propuesta conjunta de las Secretarías de Estado para las Comunidades Europeas y para las Administraciones Territoriales, esta Subsecretaría ha dispuesto la publicación de los citados Acuerdos como anexos a esta Resolución.

Madrid, 7 de septiembre de 1992.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

ACUERDO PARA REGULAR LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LAS ACTUACIONES DEL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS PRECONTENCIOSOS DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS QUE AFECTEN A SUS COMPETENCIAS.

Una de las vertientes de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas es el del cumplimiento

de las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario en relación con las facultades de control que están atribuidas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

Desde su reunión constitutiva, la Conferencia Sectorial creada en el Ministerio para las Administraciones Públicas ha venido abordando esta cuestión con la perspectiva de articular, bajo la premisa del principio de colaboración, un procedimiento eficaz de participación de las Comunidades Autónomas en las actuaciones de nuestro Estado, tanto en fase precontenciosa como en fase jurisdiccional, que afecten a las competencias de aquéllas.

Como consecuencia del debate producido en el seno de la Conferencia y de las reuniones a nivel técnico de su órgano de trabajo, se ha constatado la existencia de una posición común para fijar, mediante un Acuerdo que vincule a ambas partes, el procedimiento de referencia. Procedimiento que, a partir de la experiencia precedente en la materia, se contempla con la perspectiva de su progresivo perfeccionamiento a lo largo del tiempo. A tal efecto, el órgano de trabajo de la Conferencia realizará el examen concreto del cumplimiento del mismo, elevando las correspondientes propuestas.

Considerando lo anterior, la Conferencia Sectorial adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-El Ministerio de Asuntos Exteriores, por conducto de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas como órgano de coordinación en la materia, comunicará a la Comunidad o Comunidades Autónomas los escritos de queja, cartas de emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunicaciones recibidas de la Comisión de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias.

Segundo.-Si la Comunidad Autónoma entendiere que los plazos fijados por la Comisión para responder a los escritos referidos en el punto anterior son insuficientes, podrá solicitar de la mencionada Secretaría de Estado que recabe de la Comisión una ampliación del plazo concedido. En cualquier caso tales solicitudes deberán estar debidamente motivadas.

Tercero.-Corresponde a la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas coordinar a las diferentes Administraciones afectadas en relación con las distintas actuaciones a que se refiere este acuerdo, y en particular a los efectos de elaborar la respuesta.

La Comunidad Autónoma afectada facilitará a la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas la respuesta que estime pertinente en cada caso o,

en el supuesto de estar afectadas mas de una Administración, los elementos que considere opotunos para la elaboración de una respuesta única. La Secretaría de Estado, en contacto permanente con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, transmitirá a la Comisión, a través de la Representación Permanente, la correspondiente respuesta. Por otra parte, informará a las Comunidades Autónomas del envío de la misma así como de los sucesivos trámites en los que se encuentren los expedientes.

Cuarto.-Cuando por estar implicada más de una Administración o estimarse necesario por una Comunidad Autónoma afectada o por la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, tanto la Comunidad Autónoma en cuestión como la Secretaría de Estado podrán pedir y convocar, respectivamente, reuniones preparatorias a celebrarse en la sede de la Secretaría de Estado.

Quinto.-Cuando se celebren reuniones con los servicios de la Comisión para estudiar los procedimientos de incumplimiento iniciados contra el Reino de España, la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas informará a las Comunidades Autónomas afectadas, pudiendo éstas, si lo solicitan, participar en dichas reuniones. Las Comunidades Autónomas serán en todo caso informadas del contenido de las reuniones celebradas.

Sexto.-En los supuestos de interposición de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando el posible incumplimiento tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órganos de una Comunidad Autónoma, o en la omisión de los mismos, ésta podrá designar asesores para que participen en las reuniones que sean necesarias con los Agentes nombrados para la adopción de las posiciones a mantener por el Reino de España ante el Tribunal de Justicia.

Séptimo.-La Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas informará a la Comunidad Autónoma respectiva de las cuestiones prejudiciales suscitadas por cualquier órgano jurisdiccional español siempre que el asunto tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órganos de dicha Comunidad Autónoma, o en la omisión de los mismos.

La Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas lo examinará con la Comunidad Autónoma, a instancia de ésta, a los efectos, en su caso, de presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia.

ACUERDO EN MATERIA DE AYUDAS PÚBLICAS.

Los artículos 92 a 94 del Tratado CEE establecen el régimen a aplicar a las ayudas otorgadas por los Estados e imponen, principalmente, el deber de comunicar

previamente cualquier proyecto de ayuda procedente de fondos públicos a la Comisión de las Comunidades Europeas. De aquí surge la necesidad de que las Comunidades Autónomas ajusten su actuación en la materia a dicho régimen, conformándose, así, una vertiente más de participación de aquéllas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

Como uno de los medios para eliminar posibles dificultades en este ámbito, la Conferencia Sectorial creada en el Ministerio para las Administraciones Públicas ha venido, desde su reunión constitutiva, abordando esta temática, siempre bajo el principio de colaboración.

Siguiendo esta premisa se ha impulsado la puesta en marcha de un procedimiento eficaz de comunicación entre la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas y las Comunidades Autónomas en materia de Ayudas Públicas, en el marco del procedimiento de notificación de Ayudas de la Comisión Interministerial para Asuntos Económicos relacionados con la Comunidad Económica Europea y del Grupo de Trabajo de Ayudas que, integrado por técnicos en la materia, se constituyó en su seno.

Y, por otra parte, se han venido estudiando en el seno de la Conferencia Sectorial fórmulas y mecanismos tendentes a la mejora de dicho procedimiento, los cuales propician igualmente la implantación progresiva de una cultura común en ambas esferas administrativas.

De esta manera y como consecuencia de esta actividad ha podido apreciarse un triple resultado. Primero, existe una posición común sobre la creciente eficacia del procedimiento sobre ayudas antes aludido.
Segundo, dicho procedimiento ha dado lugar a la creación de canales de comunicación permanente entre las Comunidades Autónomas y la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, facilitados por las fórmulas de coordinación interna implantadas en el seno de aquéllas. Y tercero, se ha iniciado una dinámica de trabajo común que también está permitiendo profundizar en esta vertiente de la participación de las Comunidades Autónomas. La labor desarrollada en este campo por las partes en el seno de la Conferencia, que debe ser reconocida en cuanto que traduce en la práctica el enfoque objeto de consenso con que debe orientarse la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios, se contempla con la perspectiva de su perfeccionamiento de acuerdo con las experiencias que se recojan. A tal efecto se promoverá la celebración de reuniones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central, a través de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, y también de seminarios para la puesta en común de conocimientos.

Considerando lo anterior, la Conferencia Sectorial adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-La notificación de los proyectos de ayudas públicas de las Comunidades Autónomas a la Comisión de las Comunidades Europeas, así como las respuestas de las Comunidades Autónomas a las distintas comunicaciones de la Comisión en la materia se articularán, bajo las premisas de agilidad y transparencia, en el marco de un régimen de permanente colaboración entre las Comunidades Autónomas y la Administración central, a través de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas como órgano de coordinación en la materia.

Segundo.-Las Comunidades Autónomas, por conducto del órgano coordinador designado al efecto, se dirigirán a la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas para que, a través del sistema establecido en el seno de la Comisión Interministerial para Asuntos Económicos relacionados con la Comunidad Económica Europea, sean objeto de notificación a la Comisión de las Comunidades Europeas sus proyectos de ayudas públicas.

La Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas comunicará a las Comunidades Autónomas la recepción por parte de la comisión de las Comunidades Europeas de sus proyectos de ayudas públicas.

Tercero.-Respecto a las demás comunicaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas en este ámbito de ayudas públicas, la Secretaría de Estado para las Comunidades europeas asegura su rápido envío a las Comunidad Autónomas, por conducto del órgano coordinador a que se refiere el punto segundo.

Cuarto.-La Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas facilitará toda información útil en este campo a las Comunidades Autónomas así como cualquier otro tipo de apoyo que se solicite. Igualmente facilitará los contactos necesarios cuando así se requiera por la Comisión de las Comunidades Europeas o por alguna Comunidad Autónoma.

RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 1995, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN INTERNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS A TRAVÉS DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES. (BOE nº 69 de 22/03/1995)

La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, en su reunión de 30 de noviembre de 1994, adoptó un acuerdo sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las conferencias sectoriales. Firmado el Acuerdo por cada una de las Comunidades Autónomas, con la excepción del País Vasco y a la que, por consiguiente, no resulta aplicable, esta Secretaría de Estado ha resuelto disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento interno de la Conferencia.

Madrid, 10 de marzo de 1995.-El Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, José Francisco Peña Díez.

ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN INTERNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS A TRAVÉS DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES

I. Las Administraciones presentes en la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas acordaron, en la reunión celebrada el día 29 de octubre de 1992, la institucionalización de la Conferencia para lograr un objetivo considerado fundamental: Acometer, con arreglo al principio de cooperación, la solución progresiva de las cuestiones que plantea la participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración y aplicación del Derecho y las políticas comunitarias europeas.

El apartado cuarto del Acuerdo de Institucionalización de la Conferencia determina que corresponde a la misma «el impulso y seguimiento del progresivo desarrollo del esquema de participación de las Comunidades Autónomas aplicable, a través de la respectiva Conferencia Sectorial o instrumento equivalente, en cada una de las políticas comunitarias que afecten a las competencias de aquéllas. El esquema comprenderá los procedimientos de cooperación para hacer efectiva la intervención y participación de las Comunidades Autónomas, tanto en la fase de definición de la posición española

en los procesos de adopción de decisiones por las instituciones comunitarias, como en la fase de aplicación en nuestro país del Derecho comunitario y del contenido de las políticas comunitarias».

II. Para el desarrollo de este cometido propio de la Conferencia, se ha estimado necesario establecer un procedimiento marco en el que se determine el contenido necesario de esa participación de las Comunidades Autónomas, tanto en lo que respecta a la fase ascendente como en lo relativo a la fase descendente.

El contenido del presente Acuerdo se circunscribe a la dimensión interna de la participación, respondiendo a la línea de trabajo emprendida por la Conferencia y en consonancia con la moción aprobada al respecto por el Pleno del Senado, en su sesión de 28 de septiembre de 1994, sobre el estado de las Autonomías que, a su vez y en lo que respecta a la dimensión externa de la participación, señala como objetivo «el hacer factible que a partir de la práctica de la participación de las Comunidades Autónomas en cada Conferencia Sectorial, se genere la experiencia necesaria para articular, como elemento complementario de esa participación, la inclusión, cuando se considere procedente, de representantes de las Comunidades Autónomas o de expertos en la delegación española que acuda a debatir ante los organismos comunitarios sobre temas que incidan en competencias autonómicas».

III. Considerando lo anterior, la Conferencia, en su reunión de 30 de noviembre de 1994, adopta el Siguiente

ACUERDO

I. Principios generales

Primero.-El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el contenido necesario de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales, determinando el procedimiento marco de cooperación que cada Conferencia Sectorial debe aplicar tanto en lo que respecta a la fase ascendente, de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como en la descendente de aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones.

Segundo.-A efectos de lo establecido en este Acuerdo y siempre que no se especifique, se entiende por Conferencia Sectorial tanto el Pleno del órgano de esa naturaleza como el conjunto de órganos de cooperación multilateral de nivel inferior que, encuadrados directa o indirectamente en la Conferencia,

puedan desarrollar en la práctica el contenido del procedimiento marco. Cada Conferencia Sectorial desarrollará el procedimiento marco concretando su ámbito material, especificando los diversos elementos del procedimiento, y modulando su aplicación a tenor de las exigencias de la distribución de competencias y de la respectiva política comunitaria.

En tanto no se produzca dicho desarrollo, serán de aplicación, por su carácter de contenido necesario, los compromisos que para la Administración del Estado y que para las Administraciones de las Comunidades Autónomas resultan del procedimiento marco establecido en este Acuerdo.

Tercero.-1. En el desarrollo por cada Conferencia Sectorial del procedimiento marco deberá ser tenida en cuenta, a efectos de determinar el grado de intensidad y el contenido concreto de la participación de las Comunidades Autónomas, la naturaleza y el nivel de competencias, tanto de las asumidas por las Comunidades Autónomas como de las reservadas al Estado.

1.1 Cuando el asunto comunitario europeo afecte exclusivamente a las competencias reservadas del Estado y las Comunidades Autónomas invoquen su interés, la Administración del Estado les informará oportunamente en el marco de la Conferencia Sectorial respectiva.

1.2 Cuando los aspectos esenciales de un asunto comunitario afecten a las competencias legislativas exclusivas de las Comunidades Autónomas, si en el procedimiento de concertación interno, previo a la decisión del Consejo, se ha llegado a una posición común entre ellas, ésta será tenida en cuenta de forma determinante a efectos de fijar la posición negociadora inicial del Estado.

1.3 En aquellos asuntos que incidan sobre competencias compartidas o concurrentes del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los que previamente a la decisión del Consejo exista un acuerdo entre la posición común de las Comunidades Autónomas y la posición de la Administración del Estado, tal acuerdo será determinante a efectos de fijar la posición negociadora inicial del Estado.

2. En los supuestos 1.2 y 1.3, si la posición inicial del Estado experimentase variación sustancial como consecuencia del proceso de negociación comunitaria, siempre que los plazos lo permitan, la Administración del Estado, en el seno de la respectiva Conferencia Sectorial, informará a las Comunidades Autónomas sobre la modificación para facilitar una nueva posición común de éstas y, en su caso, su acuerdo con la posición de la Administración del Estado. Cuando los plazos no lo permitan, la Administración del Estado, a solicitud de las Comunidades Autónomas, explicará los motivos de que la posición

expresada por el Estado en el seno del Consejo haya variado respecto de la inicialmente acordada.

3. En el supuesto de que las decisiones sean susceptibles de originar aumento de gasto o disminución de ingresos de las Administraciones Públicas, la posición común de las Comunidades Autónomas se consensuará con la posición de la Administración del Estado.

4. En aquellos asuntos en los que no se hubiese alcanzado una posición común por parte de las Comunidades Autónomas, la Administración del Estado tomará conocimiento de los argumentos expresados por las Comunidades Autónomas.

Cuarto.-A los efectos del procedimiento de participación, se entiende por posición común de las Comunidades Autónomas el resultado alcanzado, tras agregar y concertar sus respectivas posturas, por aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias estén afectadas por el asunto comunitario en cuestión y que se hubieran pronunciado de forma expresa sobre su contenido.

Quinto.-Las Conferencias Sectoriales deberán incluir entre sus actividades los asuntos comunitarios europeos que, en las respectivas materias, tengan relación con la elaboración y ejecución de las políticas comunitarias.

Para la atribución de los asuntos a cada una de las Conferencias Sectoriales se tendrá en cuenta la tabla de correspondencias entre política comunitaria, Consejo de Ministros especializado y Conferencia Sectorial que figura en el anexo de este Acuerdo.

Cuando con arreglo al sistema anterior no pueda hacerse efectiva en una Conferencia Sectorial la participación de las Comunidades Autónomas en determinado asunto comunitario, será de aplicación, siempre que no resulte factible arbitrar un mecanismo ad hoc, lo establecido en el apartado cuarto, 1. 2.ª, e) del Acuerdo de Institucionalización de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

Sexto.-Los Plenos de las Conferencias Sectoriales deberán dejar constancia en acta del desarrollo de las reuniones y contenido de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Con carácter general y con respecto al tratamiento de los asuntos comunitarios europeos, el Pleno de las Conferencias Sectoriales se reunirá al comienzo de cada semestre para anlizar el programa expuesto por el representante del Estado miembro que en ese tiempo ejerce la Presidencia

del Consejo. Asimismo, la Conferecnia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas deberá convocar esta reunión al inicio de cada Presidencia.

A salvo de lo que se determine por cada Conferencia Sectorial, como regla general, corresponderá a los órganos de cooperación de representaciön técnica, el tratamiento de los asuntos que no requieran específicamente reunión plenaria.

Octavo.-La aplicación en cada Conferencia Sectorial del procedimiento de participación deberá garantizar el mantenimiento de la capacidad de acción del Reino de España y de una gestión flexible de las negociaciones.

Noveno.-La Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas se facilitarán entre sí, en el seno de las Conferencias Sectoriales, la información y documentos que sean necesarios para hacer efectivo el proccedimiento de participación tanto en su fase ascendente como en la descendente.

II. Participación de las Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado

Décimo.-La participación de las Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado tendrá como contenido necesario el que a continuación se establece:

1. La Conferencia Sectorial remitirá sin dilación a las Comunidades Autónomas la propuesta de la Comisión fijando, en función de los plazos de tramitación en el Consejo, un término para expresar su postura.

2. De conformidad con el sistema que acuerde cada Conferencia Sectorial o, en su defecto, siempre que lo solicite al menos una Comunidad Autónoma, la propuesta de la Comisión deberá incluirse en el orden del día del órgano especializado de la Conferencia -comisión, grupo de trabajo, o reunión ad hoc- a efectos de su deliberación y consideración conjunta entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

3. La Conferencia Sectorial informará regularmente a las Comunidades Autónomas de la evolución de la propuesta de la Comisión en el seno del Consejo.

4. En los procedimientos de cooperación y codecisión, las Comunidades Autónomas serán informadas de todas las sucesivas modificaciones que se

produzcan a lo largo del proceso de adopción de la iniciativa.

En el caso de convocatoria del Comité de Conciliación previsto en el procedimiento de codecisión se informará a las Comunidades Autónomas sobre sus deliberaciones.

5. La Conferencia Sectorial remitirá sin dilación a las Comunidades Autónomas el texto de la propuesta de la Comisión que se incluya en el orden del día del Consejo.

6. La Conferencia Sectorial remitirá sin dilación a las Comunidades Autónomas el orden del día provisional de la sesión del Consejo. Teniendo en cuenta el contenido del orden del día y el resultado del procedimiento de participación desarrollado, cada Conferencia Sectorial valorará la oportunidad de una reunión del Pleno de la misma antes de la sesión del Consejo.

III. Participación de las Comunidades Autónomas en la fase descendente de aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones

Undécimo.-En el marco del principio de autonomía institucional que rige en todos los Estados miembros en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados, así como del principio de que la aplicación en España del Derecho comunitario europeo debe llevarse a cabo conforme a la distribución de competencias resultante del bloque de constitucionalidad, la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas se comprometen a residenciar en la respectiva Conferencia Sectorial el tratamiento con arreglo al principio de cooperación de todos aquellos asuntos de mutuo interés relacionados con la aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones.

Duodécimo.-La participación en la fase descendente implica, como contenido necesario, los siguientes compromisos relativos a la aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones.

1. Cuando la aplicación consista en la aprobación de normas.

1.1. Las Administraciones que proyecten la aprobación de una norma, bien para desarrollar o completar un reglamento o decisión comunitario, bien para efectuar la transposición de una directiva comunitaria, pondrán en conocimiento de la Conferencia Sectorial el texto del proyecto.

1.2. Cuando en la Conferencia Sectorial la Administración del Estado y las

Administraciones de las Comunidades Autónomas coincidan en la necesidad de dar un contenido semejante o equivalente al proceso normativo interno derivado de la aplicación del Derecho comunitario, la cuestión será incluida en el orden del día del correspondiente órgano especializado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una propuesta de acuerdo y elevarla al Pleno de la Conferencia.

2. Cuando la aplicación consista en la ejecución de actuaciones administrativas.

2.1. La Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas se informarán regularmente, a través de la Conferencia Sectorial, de aquellas actuaciones administrativas en proyecto o en curso que se deriven de la aplicación del Derecho comunitario.

2.2. Cuando en la Conferencia Sectorial la Administración del Estado o la Administración de las Comunidades Autónomas propongan la necesidad de dar un contenido semejante o equivalente al proceso de ejecución administrativa en aplicación del Derecho comunitario, la cuestión será incluida en el orden del día del correspondiente órgano especilizado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una propuesta de acuerdo y elevarla al Pleno de la Conferencia.

3. Cuando la aplicación consista en el desarrollo de programas comunitarios.

3.1. La Administración del Estado informará regularmente a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, de aquellos programas comunitarios que gestione, abiertos o no a la participación de las Comunidades Autónomas.

3.2. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas informarán regularmente a la Administración del Estado de su participación en aquellos programas comunitarios que no sean coordinados por la Administración del Estado.

ANEXO SOBRE TABLA DE CORRESPONDENCIA

Políticas comunitarias / Consejo en el que se decide / Conferencia Sectorial

Aspectos institucionales y generales / Asuntos generales / Para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

Mercado interior / Mercado interior / *

Agricultura / Agricultura / Agricultura.

Pesca / Pesca / Pesca.

Políticas económicas que afecten a competencias autonómicas / Ecofin / Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Transportes / Transportes / Conferencia Nacional de Transportes.

Política social / Asuntos sociales / Asuntos sociales/asuntos laborales.

Educación / Educación / Educación.

Formación Profesional / Educación / Educación.

Juventud / Educación / Educación/Asuntos sociales.

Medio Ambiente / Medio Ambiente / Medio Ambiente.

Competitividad de la industria / Industria / Industria y Energía.

Investigación / Investigación / Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.

Desarrollo tecnológico / Investigación / Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.

Redes transeuropeas / - / Infraestructuras y ordenación del territorio.

Salud pública / Salud / Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Cultura / Cultura / Cultura.

Cooperación al desarrollo / Cooperación al desarrollo / Organo específico: Agencia Española de Cooperación Internacional.

Consumidores / Consumidores / Consumo.

Energía / Energía / Industria y Energía.

Protección civil / Protección civil / Comisión Nacional de Protección Civil.

Turismo / Turismo / Turismo.

Telecomunicaciones / Telecomunicaciones / Consejo Asesor de Telecomunicaciones.

Presupuesto / Presupuesto / Consejo de Política Fiscal y Financiera.

* Por su carácter horizontal versa sobre materias que corresponderían a distintas Conferencias Sectoriales lo que plantea algunos problemas al inicio y fin del procedimiento de participación.

RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1996, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LA CREACIÓN DE UN CONSEJERO PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. (BOE nº 302 de 16/12/1996)

La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, en su reunión de 22 de julio, adoptó un Acuerdo sobre la creación de un Consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, firmado por todas y cada una de las Comunidades Autónomas, y por lo tanto aplicable a las mismas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 4.º del artículo 9.º del Reglamento interno de la Conferencia, a propuesta de los Secretarios de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea y para las Administraciones Territoriales, se dispone la publicación del citado Acuerdo, como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera González.

ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LA CREACIÓN DE UN CONSEJERO PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas exigió, desde el momento de la adhesión de España a las mismas, la búsqueda de fórmulas para contemplar los diferentes aspectos que dicha participación requiere.

Desde el punto de vista interno, dicha participación se plasmó en la creación de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, que adoptó, en su reunión de 30 de noviembre de 1994, un acuerdo sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales.

La experiencia de estos años y el compromiso de mejorar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, debe también reflejarse en la propia Representación Permanente

de España ante la Unión Europea (REPER), que es el órgano acreditado, con carácter representativo y de gestión, por el Estado español ante la Unión Europea, responsable de asegurar la presencia de España en las instituciones y órganos dependientes de la misma.

Para ello resulta conveniente la creación de la figura de un Consejero dentro de la REPER, con competencia exclusiva para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y para la canalización de la información a las Comunidades Autónomas.

A tal fin, la Conferencia, en su reunión del día 22 de julio de 1996, acuerda la siguiente

PROPUESTA

1. Crear la figura de un Consejero dentro de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, con competencia exclusiva para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y para la canalización de la información hacia las Comunidades Autónomas. Dicha competencia no cuestionará en ningún caso las relaciones que normalmente seguirán teniendo las Comunidades Autónomas con los restantes Consejeros de la Representación Permanente.

2. El nombramiento y cese de este Consejero se hará, en régimen de libre designación, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, oídos el Pleno de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea y el Embajador Representante Permanente.

3. Este Consejero estará encargado de canalizar la información que sobre la actividad de la Unión Europea pueda afectar a las Comunidades Autónomas, así como de relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas. Contará, para el correcto desarrollo de sus funciones, con los medios y el personal auxiliar adecuados y necesarios, en el marco de la organización de la Representación Permanente.

La información a que se refiere el párrafo anterior lo es con independencia de la que corresponda efectuar por las Conferencias Sectoriales, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Participación Interna de las Comunidades Autónomas a través de las citadas Conferencias.

4. En el caso de las Comunidades Autónomas que no hubieren abierto una oficina en Bruselas, el Consejero establecerá con todas ellas los mecanismos

necesarios para canalizar la información de su interés.

5. Este Consejero podrá formar parte de la delegación española en todas aquellas reuniones en las que se debatan temas que afecten directamente a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.

Asimismo, podrá asistir a las reuniones de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento interno de ésta.

6. Las funciones del Consejero se realizarán en el respeto del Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, de creación de la Representación Permanente de España ante las Comunidades Europeas, modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre.

RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 1998, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE 11 DE DICIEMBRE DE 1997 DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (BOE nº 79 de 02/04/1998)

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en su reunión de 11 de diciembre de 1997, adoptó un Acuerdo sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado por todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de la del País Vasco.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 4.o del artícu lo 10 del Reglamento interno de la Conferencia, a propuesta de los Secretarios de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea y para las Administraciones Territoriales, se dispone la publicación del citado Acuerdo, como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 24 marzo de 1998.-El Subsecretario, Juan Junquera González.

ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Eu ropeas (en adelante, Conferencia), en su reunión de 29 de noviembre de 1990, adoptó un Acuerdo para regular la intervención de las Comunidades Autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos precontenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y en los asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal de Justicia) que afecten a sus competencias.

Este Acuerdo regula, de acuerdo con el principio constitucional de colaboración, un procedimiento que se ha demostrado eficaz para organizar la participación de las Comunidades Autónomas en las actuaciones del Reino de España, tanto en la fase precontenciosa como en la fase jurisdiccional de los recursos de incumplimiento que afecten a las competencias de las Comunidades

Autónomas.

Sin embargo, existen otros aspectos de la actuación jurisdiccional del Reino de España ante el Tribunal de Justicia que pueden incidir en las competencias de las Comunidades Autónomas y que no se encuentran previstos en el mencionado Acuerdo.

Se trata de los supuestos en que una Comunidad Autónoma desee que una disposición o acto adoptado por una institución comunitaria que pueda producir efectos jurídicos sea impugnada por el Reino de España, por entender que la misma se encuentra viciada de ilegalidad y entra dentro del ámbito de sus competencias o que el Reino de España intervenga como coadyuvante en un procedimiento iniciado ante el Tribunal de Justicia. Igualmente, hay que mencionar los casos en que una Comunidad Autónoma está interesada en la interposición de un recurso de inacción porque la no actuación de una institución comunitaria le cause algún perjuicio o aquellos supuestos en los que se estime oportuno solicitar del Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con el Tratado CE de un Acuerdo previsto por la Comunidad Europea.

Además, los supuestos previstos en el Acuerdo de 1990 deben también ampliarse a los recursos de incumplimiento que pueda interponer el Reino de España contra otro Estado miembro, en virtud del artículo 170 del Tratado CE. Igualmente, la obligación de información de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea prevista en dicho Acuerdo, en relación con las cuestiones prejudiciales, deberá ampliarse a todos los planteados por cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órganos de una Comunidad Autónoma.

Por otro lado, el Consejo de Ministros, en su Acuerdo de 13 de junio de 1986, creó la Comisión de Seguimiento y Coordinación de las Actuaciones Relacionadas con la Defensa del Estado Español ante el Tribunal de las Comunidades Europeas (en adelante, Comisión de Seguimiento) como órgano encargado de examinar todas las posibles intervenciones del Reino de España ante el Tribunal de Justicia, asegurando la coordinación entre los distintos Departamentos ministeriales y Administraciones afectadas,
y promoviendo la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia.

Por ello, la Conferencia, consciente de que existe un vacío en esta materia, y que es conveniente arbitrar un procedimiento que facilite la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración de las

Comunidades Autónomas en la interposición y tramitación de este tipo de recursos que tenga en cuenta la brevedad de los plazos procesales previstos en la legislación comunitaria, en su reunión del día 11 de diciembre de 1997, adopta el siguiente

ACUERDO

SOBRE EL RECURSO DE ANULACIÓN.

Primero.-Cuando una Comunidad Autónoma considere que una disposición o acto adoptado por una institución comunitaria que pueda pro ducir efectos jurídicos debe ser impugnado por el Reino de España ante el Tribunal de Justicia, por estar viciado de ilegalidad y afectar a sus competencias o a sus intereses, lo pondrá en conocimiento, a través del miembro de su Consejo de Gobierno que forma parte del Pleno de la Conferencia, del Presidente de la Comisión de Seguimiento en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación o notificación de la disposición o acto que pretenda impugnarse.

La Comunidad Autónoma deberá mencionar en su petición los motivos por los que entiende que la disposición o acto comunitario cuya impugnación se solicita adolece de un vicio de nulidad, así como en qué medida dicha norma afecta a sus competencias.

Igualmente, si una Comunidad Autónoma tuviese interés en que el Reino de España intervenga como coadyuvante en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia por entender que la sentencia que pueda dictarse en el mismo puede afectar a sus competencias, lo pondrá en conocimiento, por el mismo cauce, del Presidente de la Comisión de Seguimiento en un plazo de un mes contado a partir de la publicación del recurso en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

Segundo.-El Presidente de la Comisión de Seguimiento dará traslado de la petición formulada por la Comunidad Autónoma a los Departamentos ministeriales afectados por razón de la materia y al representante en el Pleno de la Conferencia de las restantes Comunidades Autónomas para que, en un plazo de diez días naturales, formulen sus observaciones.

Tercero.-Transcurrido el plazo de diez días mencionado en el apartado anterior, la Comisión de Seguimiento resolverá, mediante decisión motivada después de haber dado audiencia a las Comunidades Autónomas interesadas, sobre la procedencia o no de la interposición por el Reino de España del recurso de anulación o de la demanda de intervención.

A los efectos de la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, la Comunidad o Comunidades Autónomas que hubieren solicitado que se interponga el recurso o que se intervenga como coadyuvante, así como aquellas que hubieran formulado observaciones a esa petición, serán convocadas a la reunión en la que la Comisión de seguimiento resuelva la solicitud a los efectos de expresar su opinión.

Cuarto.-Decidida la interposición del recurso o de la demanda de intervención, el Presidente de la Comisión de Seguimiento dará traslado del acuerdo al Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia, para que, por parte de dicho Servicio, se procedan a realizar todas las actuaciones procesales necesarias.

El Abogado del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Justicia que sea el agente del Reino de España en el mencionado procedimiento actuará siempre en contacto permanente con la Comunidad Autónoma que haya solicitado la interposición del recurso, y ésta podrá designar Abogados o asesores para que asistan a aquél en su actuación ante el Tribunal de Justicia.

Quinto.-Cuando el Reino de España quiera impugnar una Disposición comunitaria ante el Tribunal de Justicia que afecte a alguna Comunidad Autónoma, lo pondrá en su conocimiento, para que, en el plazo de veinte días naturales, formule las observaciones que estimen pertinentes. Igualmente, si una Comunidad Autónoma decidiese interponer un recurso o una demanda de intervención, lo pondrá en conocimiento previamente del Presidente de la Comisión de Seguimiento, a través del miembro de su Consejo de Gobierno que forma parte del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, para que el Estado, en el plazo de veinte días naturales, formule las observaciones que estime pertinentes.

Sexto.-Teniendo en cuenta el plazo establecido por el artículo 33 del Tratado CECA para la interposición de un recurso de anulación, los plazos mencionados en el presente Acuerdo se verán reducidos a la mitad en caso de que se pretenda impugnar una Disposición comunitaria en el ámbito del Tratado CECA.

SOBRE EL RECURSO DE INACCIÓN.

Séptimo.-Si una Comunidad Autónoma considerase que una institución comunitaria se ha abstenido de actuar, causándole con ello un perjuicio, podrá solicitar, a través del procedimiento previsto en el punto primero, que el Reino de España requiera a la mencionada institución para que actúe y, en su caso, interponga ante el Tribunal de Justicia un recurso de inacción.

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuarto de este Acuerdo.

Sobre la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con las disposiciones del Tratado CE de cualquier Acuerdo previsto celebrar por la Comunidad Europea

Octavo.-Si una Comunidad Autónoma entendiese que es conveniente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 228, apartado 6, del Tratado CE, solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier Acuerdo previsto con las disposiciones del Tratado, podrá solicitarlo, siguiendo el procedimiento establecido en el punto primero, para que el Reino de España formule la correspondiente petición.

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuarto de este Acuerdo.

Sobre el procedimiento por incumplimiento de los Estados miembros regulado en el artículo 170 del Tratado CE

Noveno.-El procedimiento establecido en los puntos primero a cuarto de este Acuerdo será igualmente de aplicación cuando una Comunidad Autónoma desee que el Reino de España demande a otro Estado miembro por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.

Décimo.-La Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea informará a las Comunidades Autónomas de las cuestiones prejudiciales suscitadas por cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Comunidad Europea, siempre que el asunto tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órganos de una Comunidad Autónoma, o en la omisión de los mismos, o en una disposición del Estado que afecte a sus competencias.

Las Comunidades Autónomas, con arreglo al procedimiento establecido en el punto primero, podrán solicitar la intervención del Estado presentando sus observaciones.

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuarto de este Acuerdo.

Sobre el procedimiento por incumplimiento regulado en el artículo 169 del Tratado CE

Undécimo.-El Ministro de Asuntos Exteriores, por conducto de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea como órgano de coordinación en la materia, comunicará a la Comunidad o Comunidades Autónomas los escritos de queja, cartas de emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunicaciones recibidas de la Comisión de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias.

Si la Comunidad Autónoma entendiere que los plazos fijados por la Comisión para responder a los escritos referidos en el punto anterior son insuficientes, podrá solicitar de la Secretaría de Estado que recabe de la Comisión una ampliación del plazo concedido. En cualquier caso, tales solicitudes deberán estar debidamente motivadas.

Corresponde a la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea coordinar a las diferentes Administraciones afectadas en relación con las distintas actuaciones a que se refiere este Acuerdo y, en particular, a los efectos de elaborar la respuesta.

La Comunidad Autónoma afectada facilitará a la Secretaría de Estado la respuesta que estime pertinente en cada caso o, en el supuesto de estar afectadas más de una Administración, los elementos que considere oportunos para la elaboración de una respuesta única. La Secretaría de Estado, en contacto permanente con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, transmitirá a la Comisión, a través de la Representación Permanente ante la Unión Europea, la correspondiente respuesta. Por otra parte, informará a las Comunidades Autónomas del envío de la misma así como de los sucesivos trámites en los que se encuentren los expedientes.

Cuando por estar implicada más de una Administración o estimarse necesario por una Comunidad Autónoma afectada o por la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, tanto la Comunidad Autónoma en cuestión como la Secretaría de Estado podrán pedir y convocar, respectivamente, reuniones preparatorias, a celebrarse en la sede de la Secretaría de Estado.

Cuando se celebren reuniones con los servicios de la Comisión para estudiar los procedimientos de incumplimiento iniciados contra el Reino de España, la Secretaría de Estado informará a las Comunidades Autónomas afectadas, pudiendo éstas, si lo solicitan, participar en dichas reuniones. Las Comunidades Autónomas serán en todo caso informadas del contenido de las reuniones celebradas.

En los supuestos de interposición de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando el posible incumplimiento tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órganos de una Comunidad Autónoma o en la omisión de los mismos, ésta podrá designar Abogados o asesores para que asistan al Abogado del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Justicia que sea el agente del Reino de España en el procedimiento en su actuación ante el Tribunal de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Lo dispuesto en este Acuerdo, referido a las Comunidades Autónomas, será de aplicación en los mismos términos, en tanto en cuanto afecte a las competencias estatutariamente atribuidas, a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DEROGATORIA.

Queda sin efecto el Acuerdo de la Conferencia de 29 de noviembre de 1990, en lo que se refiere al recurso por incumplimiento regulado en el artículo 169 del Tratado CE y a las cuestiones prejudiciales.

REGLAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA. (ACUERDO CARCE de 10/03/2003)

I. ASPECTOS GENERALES DEL MANDATO REPRESENTATIVO.

1. Fundamento de la participación autonómica en los Comités.

1.1. El objeto de estas Reglas es el establecimiento de los principios generales a los que se ajusta la participación de los representantes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en los comités de la Comisión Europea previstos en la Decisión 1999/468/CE, del Consejo, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

1.2. Esta participación se realizará formando parte de la delegación española en dichos comités y responde a un triple fundamento acumulativo:
a. La competencias de las Comunidades Autónomas sobre las materias que se traten en los diferentes comités.

b. La voluntad expresa de un número significativo de Comunidades Autónomas o la existencia de un interés específico que aconseje la participación en los correspondientes comités.

c. La disponibilidad de personal con capacitación técnica adecuada para participar en las reuniones de los comités y que mantenga una relación funcionarial o laboral con una Administración autonómica.

1.3. La asistencia de la persona designada por la Comunidad Autónoma a las reuniones de un determinado comité se producirá en nombre de la totalidad de las Comunidades Autónomas.

2. Asignación de la representación autonómica en los Comités.

La distribución de la representación autonómica en los comités se realizará de común acuerdo por parte de las Comunidades Autónomas.

Los Coordinadores de Asuntos Europeos de las Comunidades Autónomas remitirán a la Secretaría de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas los nombres de las personas que participarán en los comités cuya representación autonómica les haya sido asignada; así como los de los responsables autonómicos sectoriales de cada comité.

A estos efectos, se entenderá por responsable autonómico sectorial la persona designada por cada Comunidad Autónoma para servir de interlocutor del representante autonómico en cada comité.

La Secretaría de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas los notificará a los Coordinadores de Asuntos Europeos de las demás Comunidades Autónomas, a la Secretaría de la Conferencia Sectorial o a la correspondiente unidad del Departamento ministerial competente, así como a la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, a fin de facilitar la necesaria notificación a la Comisión europea.

3. Duración del periodo de la representación autonómica en los Comités.

La duración de la representación autonómica en cada comité será de 4 años y corresponderá, por regla general y de forma sucesiva, a 2 Comunidades Autónomas. Cuando se haga efectiva esta sustitución, la Comunidad Autónoma que cesa en la representación adoptará las medidas necesarias para posibilitar la sucesión de forma ordenada e informará a la Comunidad Autónoma que le sustituye de la agenda de trabajo y del estado de los proyectos en tramitación.

Para garantizar la continuidad del proceso, durante el periodo de 4 años, las Comunidades Autónomas designadas podrán trabajar coordinadamente para cumplir las funciones de la representación autonómica en los comités.

II. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA.

1. Coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

La coordinación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado se realizará en el seno de la respectiva Conferencia Sectorial y/o órganos de apoyo específicos. En caso de que, por problemas de calendario, no sea posible la utilización de dicha vía, se utilizarán los instrumentos materiales que con mayor rapidez permitan esta comunicación y el contacto con las Comunidades Autónomas.

2. Coordinación entre las Comunidades Autónomas.

Al comienzo y al final de cada periodo, el representante autonómico en cada comité convocará una reunión con los responsables sectoriales de las Comunidades Autónomas con el objeto de conocer las funciones y el estado de la agenda de trabajo del comité en cuestión, y a fin de preparar los trabajos de

la participación autonómica en el mismo durante el periodo. El representante de la Administración General del Estado en el comité podrá ser invitado a participar en esta reunión.

Con el mismo fin, la Comunidad Autónoma que ejerza la representación autonómica en el comité correspondiente elaborará un informe al final del periodo temporal de representación.

III. PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES

1. Recepción y remisión de convocatorias y documentación.

La convocatoria de la reunión, junto con la documentación de que disponga, será remitida por el representante de la Administración General del Estado al representante autonómico con inmediatez a su recepción.

A continuación, y con la misma inmediatez, el representante autonómico que asista a las reuniones del comité remitirá al resto de las Comunidades Autónomas la convocatoria de cada reunión con el orden del día y la documentación disponible, señándole el plazo para remitir su opinión.

2. Elaboración de la posición de las Comunidades Autónomas.

Como regla general, la posición de las Comunidades Autónomas sobre las cuestiones que se están tratando o se van a tratar en la reunión de los comités se expresará y debatirá de forma habitual en las reuniones especializadas de los órganos de cooperación específicos existentes.

En los casos en que el calendario de reuniones no permita el tratamiento de la cuestión en la reunión del órgano de cooperación correspondiente, los responsables autonómicos sectoriales en cada Comunidad Autónoma comunicarán al representante autonómico en el comité su opinión sobre los puntos indicados; quien podrá, en caso de que se estime necesario, convocar una reunión de responsables sectoriales para precisar la postura autonómica.

3. Coordinación con la Administración General del Estado.

La posición de las Comunidades Autónomas se trasladará al representante de la Administración General del Estado que asista a las reuniones del comité, a fin de que sea debidamente tenida en cuenta a efectos de formar la posición española sobre los diferentes puntos a tratar por el correspondiente comité.

En caso de que una de las partes lo considere necesario, se celebrará una

reunión con anterioridad a la reunión del comité a fin de precisar las posturas que se mantienen.

IV. CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES.

1. Representación del Estado.

La dirección de la representación del Estado en las reuniones del comité corresponde al representante de la Administración General del Estado.

2. Condición de Portavoz e intervenciones en las reuniones del comité.

La condición de portavoz del Estado en cada Comité corresponde al representante de la Administración General del Estado. El representante autonómico podrá intervenir cuando lo estimen necesario o adecuado ambas partes.

3. Emisión de voto.

En caso de que se acuerde proceder a una votación formal, la emisión del voto corresponde al representante de la Administración General del Estado; que tendrá debidamente en cuenta la posición de las Comunidades Autónomas.

V. ASPECTOS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN.

1. Deber de información posterior al desarrollo de la reunión.

A la mayor brevedad y por escrito, el representante autonómico que asista a las reuniones del comité informará a los responsables autonómicos sectoriales del desarrollo de cada reunión y de los acuerdos adoptados, remitiéndoles la documentación y actas correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad de documentación existente.

2. Deber de confidencialidad.

Los representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que tomen parte en las reuniones de los comités están obligados a considerar el desarrollo de las mismas como confidenciales.

VI. SUMINISTRO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LOS COMITÉS.

1. Establecimiento del sistema de transmisión de información.

Las diferentes Administraciones participantes en cada Comité velarán para que la transmisión de la información se efectúe con la máxima celeridad, utilizando para ello la vía del correo electrónico en los casos en que la información disponible pueda ser transmitida por esta vía.

En caso de que no sea posible esta forma de comunicación, se utilizarán los medios que permitan la mayor rapidez en esta transmisión, y en especial los servicios de fax y mensajería urgente.

2. Sistema de recogida y ordenación de datos.

Las Administraciones estatal y autonómicas establecerán en sus respectivos ámbitos un procedimiento que permita conocer de forma rápida y certera los diferentes datos de la participación autonómica en cada comité. A este respecto, se arbitrarán los medios para que se produzca el intercambio de información, con el fin de efectuar un seguimiento y evaluación constante del procedimiento.

3. Seguimiento y evaluación de la participación autonómica en los Comités.

La Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, a través de la Comisión de Coordinadores, realizará un seguimiento permanente y una evaluación periódica de la participación autonómica en los Comités de la Comisión europea.

Sin perjuicio de lo anterior, en el primer trimestre del último año de cada periodo de representación autonómica, las Comunidades Autónomas presentarán al Pleno de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas un informe sobre la aplicación de estas Reglas en el respectivo periodo de participación autonómica en los comités de la Comisión. En el Informe se pondrá de manifiesto el grado de cumplimiento de las Reglas y se realizarán las propuestas y observaciones que se estimen oportunas.

VII. REGLAS ADICIONALES.

1. Actualización del Listado de Comités en los que participan las Comunidades Autónomas.

La Administración General del Estado efectuará periódicamente un análisis de la vigencia y del trabajo de los comités, a efectos de mantener la actualización del listado en los que pueden participar representante de las Comunidades Autónomas.

2. Participación de la Comunidad Foral de Navarra en los Comités.

De acuerdo con la solicitud efectuada por esta Comunidad, por lo que hace a la participación de la Comunidad Foral de Navarra en los Comites de Ejecución previstos en la Decisión 1999/468/CE, del Consejo, las relaciones de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2005, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL, POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 9 DE DICIEMBRE DE 2004, DE LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS, SOBRE LA CONSEJERÍA PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA Y SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA; Y SOBRE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN LAS FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. (BOE nº 64 de 16/03/2005)

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en su reunión de 9 de diciembre de 2004, adoptó sendos Acuerdos, sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y sobre la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea; y sobre el Sistema de Representación Autonómica en las Formaciones del Consejo de la Unión Europea.

Firmados los dos Acuerdos por cada una de las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, esta Secretaría de Estado ha resuelto disponer la publicación de los dos Acuerdos, cuyos textos figuran tras esta Resolución, en el «Boletín Oficial del Estado», para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.4 del Reglamento interno de la Conferencia.

Madrid, 28 de febrero de 2005. -El Secretario de Estado, José Luis Méndez Romeo.

ACUERDO SOBRE LA CONSEJERÍA PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA Y SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.

I. El proceso de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos se ha desarrollado de una manera gradual desde la constitución de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en 1989. La gradualidad de este proceso se ha correspondido, a su vez, con la del propio proceso de integración europea, ya que durante este período se ha producido un incremento sustancial de las competencias comunitarias y también del propio número de Estados miembros de la Unión

Europea.

En este proceso tuvo un contenido especial la creación, en 1996, de la Consejería para Asuntos Autonómicos, en el seno de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), ya que permitió arbitrar un sistema de relaciones entre las Oficinas de las Comunidades Autónomas existentes en Bruselas y la unidad orgánica acreditada por el Estado español ante la Unión Europea como encargada de asegurar la presencia de España en las instituciones y órganos dependientes de la misma.

El trabajo de la Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER en este período ha merecido una consideración positiva, ya que ha permitido que se formalicen las relaciones de colaboración y el acceso de las Comunidades Autónomas a una unidad que por su propia naturaleza y características desempeña un papel esencial en el sistema de participación de los Estados miembros en el proceso comunitario.

En relación con dicha Consejería de la REPER, se considera que es el momento de garantizar una mayor implicación y presencia autonómica, mediante la fórmula de que sean funcionarios propuestos por las propias Comunidades Autónomas los que desempeñen los puestos que la integran. Tanto de los dos puestos ahora existentes como de los puestos futuros en que se plasme la ampliación, a partir de 2005, de dicha Consejería.

Por otro lado, en ese proceso de completar y perfeccionar, en su dimensión externa, la participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea, ha llegado el momento de extenderla al ámbito del Consejo de la Unión Europea en aquellos asuntos que afecten a las competencias autonómicas. Tanto a las propias formaciones ministeriales del Consejo como a los Grupos de Trabajo y demás instancias preparatorias. En relación con esto último debe tenerse en cuenta que la Representación Permanente desempeña un papel especial en el proceso decisorio comunitario, básicamente mediante la participación directa del personal que en ella presta servicios en las reuniones de los Grupos de Trabajo y demás instancias preparatorias del Consejo, en cuanto órganos especializados de trabajo en los que se debaten las propuestas normativas formuladas por la Comisión.

Esta circunstancia, unida a la anterior, propicia que la participación autonómica en los Grupos de Trabajo del Consejo, para que resulte viable con carácter inmediato, deba canalizarse, como regla general, a través de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER, máxime teniendo en cuenta que, a partir de ahora, va a contar con funcionarios propuestos por las propias Comunidades Autónomas.

Estos avances en el sistema de participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea requieren, para su adecuada puesta en práctica, establecer de forma concertada entre los dos actores concernidos, la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas, las reglas esenciales que determinen su contenido. Para ello, el instrumento más apropiado es el de un acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. Así resulta de la Ley que regula la Conferencia y esa es la experiencia de dicho órgano de colaboración, que desde 1989 ha ido articulando, mediante acuerdos adoptados en su seno, los diferentes elementos que conforman dicho sistema de participación autonómica, del cual el presente constituye uno más.

II. La primera parte del presente Acuerdo contiene las reglas que se refieren a esa nueva configuración, dentro de la REPER, de la Consejería para Asuntos Autonómicos. Reglas que comprenden, en esencia, los tres aspectos siguientes.

En primer lugar y junto con el reflejo expreso de que los puestos de trabajo integrantes de la Consejería serán desempeñados por funcionarios propuestos por las Comunidades Autónomas, se establece el procedimiento para la incorporación de tales consejeros autonómicos y un sistema que, a partir del desempeño por períodos de tres años, garantice que puedan sucederse funcionarios propuestos por distintas Comunidades Autónomas.

En el plano funcional y partiendo de la premisa de la dependencia de la Consejería de la REPER y su consiguiente dirección por el Embajador Representante Permanente, el Acuerdo recoge en primer lugar los cometidos a desarrollar por los consejeros autonómicos en relación con las Comunidades Autónomas. Dichos cometidos parten de la experiencia previa de funcionamiento durante estos años, ampliándolos en aquellas facetas de transmisión de información y seguimiento de los asuntos europeos que presentan más interés para las Comunidades Autónomas.

El tercer aspecto es la identificación de las funciones de la Consejería en relación con el Ministerio de Administraciones Públicas, en razón de su dependencia orgánica del mismo. Aspecto que se completa con la información periódica que la Consejería debe hacer de sus actividades a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

III. En su segunda parte, el Acuerdo determina el sistema que con carácter inmediato se arbitra para hacer factible la participación autonómica en relación con los Grupos de Trabajo y demás instancias preparatorias del Consejo de la Unión Europea.

Primero se determinan los dos mecanismos para hacerla efectiva. Por un lado y como mecanismo ordinario, la incorporación a la delegación española en los Grupos de Trabajo de los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos. Por otro y en relación con aquellos asuntos en los que se aplique la representación autonómica en las propias reuniones de las formaciones ministeriales del Consejo, la incorporación de responsables técnicos, según lo previsto en el Acuerdo de la Conferencia que, de forma paralela al presente Acuerdo, establece las reglas de dicha representación.

En segundo lugar se precisan los Grupos de Trabajo e instancias preparatorias a los que se extiende la participación autonómica. La regla general comprende los Grupos que se corresponden con las cuatro formaciones ministeriales previstas en el Acuerdo que, en paralelo al presente Acuerdo, se ocupa de la participación autonómica en tales formaciones ministeriales. Junto a lo anterior, se incluyen aquellos otros Grupos de Trabajo que determine el Embajador Representante Permanente. El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) es objeto de una previsión específica por su singular naturaleza como instancia preparatoria.

Un tercer contenido del Acuerdo en esta parte se refiere a concretar el contenido de la participación autonómica. Con la premisa de que dicha participación se extiende a aquellos asuntos que afecten a las competencias autonómicas, el Acuerdo precisa la secuencia de dicha participación desde la información previa sobre las reuniones de los Grupos e instancias preparatorias, hasta la asistencia a las reuniones y la forma de intervenir en las reuniones de los Grupos por parte de los representantes autonómicos dentro de la delegación española.

La gradualidad en el perfeccionamiento de esta faceta de la participación autonómica se refleja de forma expresa, al recoger en el Acuerdo la revisión de la misma a partir de la experiencia que proporcione su aplicación práctica a lo largo del año 2005.

IV. Por último y bajo la rúbrica de reglas especiales se hace salvedad expresa tanto de la existencia de los regímenes singulares comunitarios de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, como de los regímenes e instrumentos bilaterales que, como complemento de los multilaterales, existen o pudieran existir con determinadas Comunidades Autónomas para la participación en los asuntos de la Unión
Europea.

Considerando lo anterior, la Conferencia, en su reunión de 9 de diciembre de 2004, adopta el siguiente acuerdo:

I. CONSEJERÍA PARA ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Los puestos de trabajo integrantes de la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -en adelante Consejería-serán desempeñados por funcionarios propuestos por las Comunidades Autónomas. Tales puestos de trabajo serán los que determine la correspondiente relación dentro del Ministerio de Administraciones Públicas.

2. La incorporación de los consejeros autonómicos de la Consejería -en adelante consejeros-así como el desarrollo de sus funciones se llevará a cabo en los términos establecidos en este Acuerdo.

3. Los consejeros serán nombrados de acuerdo con la normativa aplicable, a propuesta previamente consensuada de las Comunidades Autónomas y formulada en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

4. Una vez incorporados a sus puestos de trabajo, los consejeros quedarán integrados en la organización de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -en adelante REPER-y desarrollarán su actividad de acuerdo con la regulación establecida por el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre, sobre la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. A efectos organizativos internos, la Consejería contará con un Consejero Coordinador y los demás Consejeros.

5. Los nombramientos de los consejeros tendrán una vigencia temporal limitada a tres años. Podrán ser objeto de prórroga, por períodos anuales, previa conformidad de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

6. Las Comunidades Autónomas establecerán por consenso un sistema que garantice la sucesión de consejeros propuestos por diferentes Comunidades Autónomas.

7. Con carácter periódico, los consejeros informarán y darán cuenta del desarrollo de sus funciones a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, debiendo remitir una memoria anual de sus actividades a las Comunidades Autónomas.

8. Los consejeros desempeñarán los cometidos que el Embajador Representante

Permanente y el Embajador Representante Permanente Adjunto les atribuyan o asignen, en virtud de las competencias que les confiere el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, modificado por el Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre, sobre la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

9. En el marco de las actividades de la REPER y dentro del respeto a las reglas que rigen su funcionamiento, los cometidos específicos de los consejeros son los que se determinan a continuación, sin perjuicio de aquellos otros que la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas les atribuya expresamente.

9.1 En relación con las Comunidades Autónomas:

1.º Transmisión, con la máxima celeridad posible y preferentemente por vía telemática, de la información y documentación generada en relación con las actividades y propuestas normativas de las Instituciones comunitarias que puedan afectar a las competencias o los intereses de las Comunidades Autónomas.

2.º Organización de reuniones informativas entre representantes autonómicos y los consejeros sectoriales que prestan servicios en la REPER.

3.º Seguimiento de la participación autonómica en los asuntos europeos dentro de las Conferencias Sectoriales y contribución al desarrollo de dicha participación proporcionando información sobre las claves de la negociación de tales asuntos.

4.º Seguimiento y detección de puntos críticos en las negociaciones de los diferentes asuntos, procediendo a la pertinente comunicación de aquéllos.

5.º Seguimiento informativo de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea, de las observaciones a las ayudas públicas notificadas y de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, que afecten a las competencias o intereses de las Comunidades Autónomas.

6.º Apoyo, en su caso, a la coordinación entre las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas, contribuyendo a los mecanismos de cooperación que puedan establecerse para mejorarla.

7.º A solicitud de las mismas, apoyo específico a las Oficinas de las Comunidades Autónomas en la preparación de visitas y entrevistas de autoridades autonómicas con responsables comunitarios y en la realización

de otras gestiones ante las Instituciones comunitarias.

8.º Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones.

9.2 En relación con el Ministerio de Administraciones Públicas:

1.º Información sobre las iniciativas normativas de las Instituciones comunitarias que puedan afectar a las competencias de las Comunidades Autónomas.

2.º Información sobre las actividades más relevantes de las Instituciones comunitarias que se relacionen o incidan en la actividad política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

3.º Tramitación de las propuestas de nombramientos y sustituciones de los miembros españoles del Comité de las Regiones.

4.º Información sobre la actividad del Comité de las Regiones.

5.º Información sobre la actividad más relevante de las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas.

6.º Información sobre la actividad derivada del proceso de descentralización en otros Estados miembros de la Unión Europea.

II. PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. la participación de las comunidades autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea se hará efectiva, en su fase inicial, mediante las dos vías siguientes.

A través de los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), mediante su incorporación a la delegación española en determinados Grupos de Trabajo.

En aquellos asuntos en que se haya acordado, en la correspondiente Conferencia Sectorial, la representación autonómica directa en las formaciones del Consejo de la Unión Europea, mediante la incorporación a la delegación española en el Grupo de Trabajo correspondiente a cada asunto del responsable técnico designado por quien vaya a ejercer la representación autonómica directa. Dicha incorporación será objeto de comunicación previa al Ministerio concernido y a

la Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER.

2. Los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea en los que se hará efectiva la participación autonómica serán los que figuren, dentro del listado periódicamente elaborado por la Secretaría General del Consejo, como instancias preparatorias de las siguientes formaciones del Consejo de la Unión Europea:

Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores

Agricultura y Pesca

Medio Ambiente

Educación, Juventud y Cultura

Además, el Embajador Representante Permanente y el Representante Permanente Adjunto pueden, en el uso de sus atribuciones, designar otros Grupos de Trabajo en los que se considere de utilidad o interés que asista un consejero de la Consejería para Asuntos Autonómicos.

3. La participación autonómica en los Grupos de Trabajo indicados en el apartado anterior se referirá a los asuntos que afecten a las competencias autonómicas, se hará efectiva como representantes del conjunto de las Comunidades Autónomas y tendrá el siguiente contenido:

1.º Recibir información sobre el calendario de reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea, su convocatoria, los respectivos órdenes del día y la documentación de los asuntos que afecten a las competencias autonómicas.

2.º Asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo formando parte de la delegación española, bajo la dirección del Consejero de la REPER que asuma la jefatura de la delegación y, por tanto, la condición de portavoz de la delegación.

3.º Intervenir en las reuniones de acuerdo con las reglas establecidas en el Acuerdo que establece el sistema de representación autonómica directa en las formaciones del Consejo de la Unión Europea.

4. La participación autonómica llevará consigo la asistencia al Comité de Representantes Permanentes (COREPER), de conformidad con la práctica institucional existente, cuando en el Comité se examinen asuntos que afecten a las competencias autonómicas.

5. La Consejería para Asuntos Autonómicos hará llegar a las Comunidades Autónomas, preferentemente por vía telemática, toda la información y documentación disponibles relativa a su participación en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.

6. A partir del informe que la Consejería para Asuntos Autonómicos presente tras la aplicación durante 2005 del presente Acuerdo, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas examinará la procedencia de revisar el sistema de participación autonómica en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.

Para la elaboración del informe, la Consejería recabará el parecer de los responsables a que se refiere el apartado II.1.

III. REGLAS ESPECIALES.

1. Lo establecido en el presente Acuerdo respecto a las Comunidades Autónomas se aplicará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las competencias estatutariamente asumidas.

2. Lo establecido en el presente Acuerdo será de aplicación sin perjuicio de las especialidades que se establezcan como consecuencia de la existencia del régimen de integración específico de Canarias, así como del régimen comunitario especial de Ceuta y Melilla.

3. La participación objeto del presente Acuerdo lo es sin perjuicio de los regímenes e instrumentos bilaterales existentes o que pudieran existir con algunas Comunidades Autónomas para el tratamiento de aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten en exclusiva a dichas Comunidades o que tengan para las mismas una vertiente singular en función de su especificidad autonómica y foral.

IV. CLÁUSULAS ADICIONALES.

1. Queda sin efecto el Acuerdo adoptado por la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, el 22 de julio de 1996, sobre la creación de la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

2. La Administración General del Estado procederá a realizar las actuaciones que resulten necesarias para adaptar al presente Acuerdo el Real Decreto 2105/1996, de 20 de setiembre, de creación de la Consejería para Asuntos Autónomicos en la Representación Permanente de España ante la Unión

Europea.

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN LAS FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

I. Dentro del proceso de decisión establecido en el ámbito de la Unión Europea, el Consejo de Ministros es la institución que desarrolla el papel más relevante desde la perspectiva de los Estados miembros, ya que la conformidad del mismo resulta imprescindible para la adopción definitiva de los actos jurídicos de contenido normativo propuestos por la Comisión europea.

Este papel central en el proceso decisor, y su especial consideración como institución de representación y defensa de los Estados miembros, justifica el interés que el desarrollo de sus trabajos ha merecido en los últimos años para las entidades regionales europeas y en especial, por lo que respecta al caso español, para las Comunidades Autónomas.

Este interés, unido a la regulación constitucional de esta posibilidad en determinados Estados de la Unión Europea, se ha materializado en los últimos años en diferentes iniciativas expresadas desde las propias Comunidades Autónomas o desde el ámbito parlamentario, para que la Administración General del Estado arbitre un sistema que haga posible la participación de las Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo, tanto en lo que se refiere a las formaciones de rango ministerial como en lo que respecta a las instancias preparatorias de su trabajo, en especial de los Grupos de Trabajo del Consejo.

II. La participación de las Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo, entendida como la incorporación de un representante de las mismas a la delegación española y su participación en las deliberaciones, ha venido siendo una faceta postergada frente a las demás facetas de la participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea.

A partir de la experiencia previa que ha supuesto en España la puesta en marcha de los diversos elementos que hoy en día constituyen el sistema de participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea, ha llegado el momento de acometer esa faceta externa de dicha participación que, por su alto valor simbólico, viene a representar una cierta culminación de dicho sistema.

Hacerlo supone establecer de forma concertada entre los dos actores concernidos, la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas, las reglas esenciales para determinar el contenido de esa

participación en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión Europea. Y para ello el instrumento más apropiado es el de un acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. Así resulta de la Ley que regula la Conferencia y esa es la experiencia de dicho órgano de colaboración que desde 1989 ha ido articulando, mediante acuerdos adoptados en su seno, los diferentes elementos que conforman el sistema de participación autonómica, del cual el presente constituye uno más.

III. Partiendo de las premisas anteriores, el presente Acuerdo establece esas reglas concertadas que deben dar respuesta a las preguntas esenciales que supone llevar a la práctica la participación autonómica en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión Europea en relación con los asuntos que afecten a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La primera cuestión no es otra que determinar lo que debe entenderse por esta participación, en cuanto forma de asegurar una representación autonómica de forma directa, mediante la incorporación a la delegación española de un miembro designado por las Comunidades Autónomas, frente a la indirecta que resulta de la participación en el plano exclusivamente interno arbitrada desde 1994. Esta determinación conceptual se completa reflejando de forma expresa los principios generales que deben guiar el ejercicio
de esa representación autonómica directa.

Una segunda consiste en determinar las formaciones ministeriales del Consejo en que resulta aplicable, lo que se hace a partir de dos premisas. La primera el hecho de que sólo son determinadas formaciones las que, desde un punto de vista material, concentran los asuntos que afectan a competencias autonómicas. Y la segunda la propia experiencia de funcionamiento del Consejo, durante estos últimos años, en relación con el resto de Estados miembros descentralizados que han desarrollado este tipo de participación. De ahí que se circunscriba inicialmente a cuatro formaciones la aplicación de esa representación autonómica directa.

La tercera cuestión a resolver es cómo se determina el representante autonómico a incorporar a la delegación española. Se ha buscado la fórmula de las Conferencias Sectoriales correspondientes a las cuatro formaciones, porque el pleno de las mismas asegura la presencia de los interlocutores adecuados para que las Comunidades Autónomas puedan elegir un miembro de Consejo de Gobierno que las represente en su conjunto, y para que puedan participar esa elección a quien va a ejercer la presidencia de la delegación española. Esa elección se contempla con un carácter sucesivo, que propicie el mayor grado de implicación de las Comunidades Autónomas en este ejercicio

de corresponsabilidad, y con una periodicidad que tenga en cuenta, como regla general, los semestres de presidencia.

Unida a la anterior, se encuentra la de determinar los asuntos en los que se aplique esta representación autonómica y, en tales asuntos, la de aplicar un procedimiento que asegure la información necesaria sobre su evolución, la formación de una posición autonómica común y su integración en la posición española inicial. En cuanto a lo primero, el elemento que debe tenerse en cuenta es la conexión de tales asuntos con las competencias autonómicas, en cuanto que representa el elemento legitimador de la existencia de intereses por parte de las Comunidades Autónomas en hacer efectiva su participación. Y en cuanto a lo segundo, el Acuerdo se remite a los instrumentos de colaboración que en cada sector permitan llevarlo a cabo y al procedimiento marco establecido desde 1994 para la participación autonómica en el plano interno.

Tanto la determinación del representante autonómico como la de los asuntos en que se acuerde la representación autonómica directa deberán aplicarse en la práctica con un criterio de flexibilidad, de forma que sean decisivos el grado de interés de las propias Comunidades Autónomas y la prioridad que éstas otorguen a los asuntos. Por ello y teniendo en cuenta que son diez las Conferencias Sectoriales implicadas, el Acuerdo hace esa expresa remisión a las propias Conferencias para concretar el esquema general que establece el Acuerdo y para establecer las modulaciones en cada caso necesarias.

Una última cuestión consiste en precisar la condición en la que el representante autonómico acude a las reuniones del Consejo y su margen de intervención en las mismas. En este punto, el acuerdo establece su plena integración en la delegación española, la prestación de asesoramiento al resto de la delegación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones de acuerdo con el jefe de la delegación y los efectos de la existencia de una posición autonómica común. En todo caso, la responsabilidad de las negociaciones y, consiguientemente, de su resultado global queda en manos del jefe de la delegación española.

IV. A efectos de la modulación que puedan suponer sobre el sistema general de participación autonómica, el Acuerdo hace expresa salvedad tanto de la existencia de los regímenes comunitarios singulares de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, como de los regímenes e instrumentos bilaterales que, como complemento de los multilaterales, existen o pudieran existir con determinadas Comunidades Autónomas para la participación en los asuntos de la Unión Europea.

V. El Acuerdo culmina con dos previsiones adicionales que se relacionan con la evaluación de su puesta en práctica por la Conferencia para Asuntos

Relacionados con las Comunidades Europeas. La primera, la de revisar el Acuerdo de 1994 sobre Participación Interna e impulsar las adaptaciones de los reglamentos de las Conferencias Sectoriales. Y la segunda, la de examinar, tras su aplicación en 2005, la procedencia de revisar el Acuerdo que ahora se adopta.

Considerando lo anterior, la Conferencia, en su reunión de 9 de diciembre de 2004, adopta el siguiente acuerdo:

1. OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES.

1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas aplicables a la representación autonómica directa en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión Europea.

Se entiende por dicha representación la incorporación a la delegación española en las reuniones de determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea de un miembro, con rango de Consejero o miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, que represente a las Comunidades Autónomas en los asuntos que afecten a sus competencias.

1.2 La aplicación de la representación autonómica directa tendrá en cuenta los siguientes principios generales:

a) El principio de la unicidad de representación de España en el seno de la Unión Europea.

b) El principio de unidad de acción de España en el exterior.

c) El principio de la necesidad de mantener y facilitar la capacidad de propuesta y de reacción de España en el sistema de adopción de decisiones del Consejo de la Unión Europea.

d) El principio de lealtad y mutua confianza entre las instancias autonómicas y estatal.

e) El principio de corresponsabilidad a la hora de lograr el mayor grado de eficacia en la participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea.

f) El principio general de representación conjunta de las Comunidades Autónomas.

g) El principio de responsabilidad del Estado en el resultado de las

negociaciones.

2. DETERMINACIÓN DE LAS FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS QUE RESULTA APLICABLE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA DIRECTA.

2.1 La representación autonómica directa será de aplicación, inicialmente, en las siguientes formaciones del Consejo de la Unión Europea:

Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores

Agricultura y Pesca

Medio Ambiente

Educación, Juventud y Cultura.

2.2 En el resto de formaciones del Consejo y en relación con aquellos asuntos que afecten a competencias autonómicas, será de aplicación lo establecido en el Acuerdo de 1994 sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales y, en particular, lo que establezcan los instrumentos que en cada Conferencia desarrollen dicho Acuerdo según lo previsto en su punto segundo.

3. DETERMINACIÓN DEL REPRESENTANTE AUTONÓMICO.

3.1 Para la aplicación de la representación autonómica directa, el Pleno de cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas procederá a designar, como representante autonómico, al miembro de la misma, con rango de miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, que deba incorporarse a la delegación española en las reuniones de las formaciones del Consejo de la Unión Europea para representar a las Comunidades Autónomas que hayan manifestado su interés en determinados asuntos que afecten a sus competencias.

Tal designación se efectuará según el procedimiento previamente fijado por el Pleno de cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas, a partir de la propuesta acordada por las Comunidades Autónomas.

A estos efectos, las Conferencias Sectoriales correspondientes a las cuatro formaciones ministeriales, en función de su correspondencia con los asuntos a tratar, son las que figuran en el siguiente cuadro.

Formación Del Consejo	Temas	Conferencia sectorial
	Empleo y Política Social (temas EPS).	Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales.
Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).	Asuntos Sociales (SOC)	Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
	Sanidad (temas SAN).	Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
	Consumo (temas CONSOM).	Conferencia Sectorial de Consumo.
Agricultura y Pesca (AGRIPESC).	Agricultura (temas CEA). Agricultura (temas CRP).	Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
	Pesca (temas PECHE).	Conferencia Sectorial de Pesca Marítima.
Medio Ambiente (ENV).	Medio Ambiente (temas ENV).	Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Educación. Juventud y Cultura (EJC).	Educación (temas EDUC).	Conferencia Sectorial de Educación.
	Juventud (temas JEAN).	Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
	Cultura (temas CULT).	Conferencia Sectorial de Cultura.

3.2 El procedimiento de designación del representante autonómico deberá asegurar tanto una estabilidad que, como regla general, al menos cubra un semestre de presidencia del Consejo de la Unión Europea, como un sistema que garantice la sucesión de representantes propuestos por las Comunidades Autónomas.

3.3 El representante autonómico asumirá, por parte de las Comunidades Autónomas, la coordinación del proceso previo a la incorporación a la delegación española y la concertación con la Administración del Estado.

A tal efecto, designará un responsable técnico que podrá asistir a las reuniones de las instancias preparatorias del Consejo en que se examine el asunto en que sea de aplicación la representación autonómica directa.

4. DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE APLICA LA REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA DIRECTA.

4.1 En cada una de las Conferencias Sectoriales concernidas, al inicio de cada presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea y a partir del Programa de presidencia, las Comunidades Autónomas que manifiesten su interés determinarán, en relación con la respectiva formación del Consejo de la Unión Europea y a la vista de los asuntos incluidos en el orden del día previsto para las reuniones programadas, aquellos asuntos en que debe aplicarse la representación autonómica directa. Coordinada dicha determinación por el representante autonómico designado, éste asumirá la concertación con la Administración del Estado de tales asuntos y del tratamiento que deban tener según lo establecido en el punto tercero del Acuerdo de Participación Interna de 1994.

4.2 En relación con cada uno de los asuntos en que se acuerde la aplicación de la representación autonómica directa, dentro de la respectiva Conferencia Sectorial y según lo establecido en el Acuerdo de Participación Interna de 1994:

a) Las Comunidades Autónomas deberán tener a su disposición la documentación completa sobre el asunto.

b) Las Comunidades Autónomas deberán ser informadas regularmente de la evolución del asunto y de las negociaciones.

c) Las Comunidades Autónomas concernidas por el asunto deberán desarrollar el proceso para fijar una posición común.

4.3 Cada Conferencia Sectorial determinará el órgano especializado de la misma en el que se desarrollen las actuaciones anteriores. Cuando de común acuerdo se estime que deba ser un grupo de trabajo específico el que asuma tales actuaciones, se procederá a su constitución.

5. APLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA DIRECTA.

5.1 El representante autonómico será miembro de pleno derecho de la delegación española a todos los efectos. Representará al conjunto de las Comunidades Autónomas.

5.2 Prestará asesoramiento directo al jefe de la delegación en todo lo referente a la posición común adoptada por las Comunidades Autónomas en relación con los puntos del orden del día en que se traten cuestiones que afecten a sus competencias.

5.3 El representante autonómico podrá solicitar el uso de la palabra al jefe de delegación si se están debatiendo cuestiones que afectan a competencias autonómicas y existe una posición común autonómica que expresar. En este supuesto, el jefe de delegación le cederá el uso de la palabra siempre que lo estime oportuno para la mejor defensa de los intereses españoles.

5.4 La posición común de las Comunidades Autónomas habrá de ser debidamente tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de negociación.

5.5 La responsabilidad última de las negociaciones y de su conclusión corresponderá en todo momento al jefe de delegación.

6. REGLAS ESPECIALES.

6.1 Lo establecido en el presente Acuerdo respecto a las Comunidades Autónomas se aplicará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las competencias estatutariamente asumidas.

6.2 Lo establecido en el presente Acuerdo será de aplicación sin perjuicio de las especialidades que se establezcan como consecuencia de la existencia del régimen de integración específico de Canarias, así como del régimen comunitario especial de Ceuta y Melilla.

6.3 La participación objeto del presente Acuerdo lo es sin perjuicio de los regímenes e instrumentos bilaterales existentes o que pudieran existir con algunas Comunidades Autónomas para el tratamiento de aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten en exclusiva a dichas Comunidades o que tengan para las mismas una vertiente singular en función de su especificidad autonómica y foral.

7. CLÁUSULAS ADICIONALES.

7.1 A la vista de los resultados de los trabajos de seguimiento y evaluación de este Acuerdo, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas procederá a revisar el Acuerdo de Participación Interna de 1994, así como a impulsar las necesarias adaptaciones de los reglamentos de las Conferencias Sectoriales concernidas.

7.2 La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas examinará la procedencia de revisar el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo establecido en este Acuerdo tras su aplicación durante 2005.

Juan Fernández Fernández

Es Licenciado y Master en Socioeconomía por la Universidad Católica de Lovaina la Nueva (Bélgica), Master en Estudios Europeos por la misma Universidad, Diplomado en Formación Europea por la Sorbona y Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense.

Desde 1973 a 1980 trabajó en la Cooperación al desarrollo en Ruanda; en 1985 se incorpora a la Oficina de Asesoramiento sobre Comunidades Europeas del Principado de Asturias como Asesor económico, desempeñando el cargo de Director de la misma desde 1992 a 1999; desde diciembre de 2003 es el Jefe del Área de Relaciones Exteriores en la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Desde 1986 hasta 1999 ha sido co-director del Boletín Asturiano sobre la Unión Europea, y desde 2003 es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Eurastur.

Ha participado en la elaboración de diferentes monografías y publicado numerosos artículos sobre temas relacionados con la participación de las regiones en los asuntos comunitarios europeos, la política de cohesión de la UE, los Fondos Estructurales, la Estrategia Europea por el Empleo, la política social comunitaria, las ayudas públicas y la política de la competencia en el mercado único, la estrategia comunitaria de desarrollo rural, la protección de los intereses económicos del consumidor, etc.

Ha impartido clases en diferentes Centros de formación públicos y privados y Universidades.

Gonzalo Riesgo Fernández

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

En 1991 inicia su trayectoria profesional como Asesor Jurídico del Centro Europeo de Información Empresarial del Instituto de Fomento Regional (IFR).

A partir de 1993 y hasta 1998 desarrolla su labor como Asesor Jurídico para toda la organización (IFR), asumiendo también desde 1996 la Secretaría Letrada del Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Durante los años 1995 a 1998 compatibiliza además su trabajo con el ejercicio libre de la profesión.

Ha seguido numerosos cursos de especialización en gestión y Administración Pública y en asuntos europeos, en España, Reino Unido y Bélgica.

Desde 1999 hasta la actualidad presta servicios como Asesor Jurídico del departamento de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la Administración del Principado de Asturias.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS EUROPEOS